

26ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA (Especial) — 7/8 DE ENERO DE 1988

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor **VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ**;
del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor **JORGE D. SOLANA**;
y del señor presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto,
doctor **ADOLFO GASS**

Secretarios: doctores **ANTONIO J. MACRIS** y **LEONARDO J. PALOMEQUE**

Prosecretarios: doctor **ALBERTO J. B. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO L. ALMIRÓN**

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GIL, Francisco
GROSSO, Edgardo Roger M.
CURDULICH de CORREA, Lilitana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAPFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo

MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI, Ramón Eduardo
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, CON AVISO:

BENÍTEZ, Alfredo L.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
JUÁREZ, Carlos Arturo
MOLINA, Pedro E.

SUMARIO

1. Nota del señor senador Nápoli y otros señores senadores por la que se solicita la convocatoria a una sesión especial del Honorable Senado y decreto de citación para la misma. (Pág. 2337.)
2. A moción del señor senador Menem se fija el plan de labor para la sesión de la fecha y se resuelve considerar sobre tablas los temas incluidos en él. (Pág. 2337.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2338.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo. (Pág. 2338.)
 - III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios y Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. (P.E.-105-120/87.) (Pág. 2338.)
 - IV. Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 289 del Código Penal. (P.E.-105-121/87.) (Página 2341.)
 - V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2341.)
 - VI. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2342.)
 - VII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2366.)
 - VIII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2366.)
 - IX. Peticiones particulares. (Pág. 2366.)
 - X. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicitan informes acerca de la desaparición de azúcar de los ingenios San Pablo y La Florida, Tucumán (S.-105-451/87.) (Pág. 2367.)
 - XI. Proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se prohíben y sancionan los actos discriminatorios de todo tipo. Modificación del Código Penal. (S.-105-452/87.) (Pág. 2368.)
 - XII. Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita la actualización del precio sostén del girasol. (S.-105-453/87.) (Pág. 2370.)
 - XIII. Proyecto de ley del señor senador Britos por el que se establece la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes por parte de los miembros de los tres poderes de la Nación. (S.-105-454/87.) (Pág. 2370.)
 - XIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita se adopten medidas para que las proyecciones cinematográficas en medios de transporte público sean aptas para todo público. (S.-105-455/87.) (Pág. 2372.)
 - XV. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli por el que se solicita se declare de interés nacional el Mundialito Infantil de Fútbol Alto Vallo '88. (S.-105-456/87.) (Página 2372.)
 - XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Bravo Herrera por el que se solicita la restitución a la provincia de Salta de toda su documentación histórica. (S.-105-457/87.) (Página 2372.)
 - XVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca de la reglamentación establecida en el artículo 89 de la ley 23.287 relativa a su producción de alcohol anhidro. (S.-105-458/87.) (Pág. 2373.)
 - XVIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicita la implantación de la venta obligatoria de alcoñafta en Córdoba y en la región de Cuyo. (S.-105-459/87.) (Pág. 2373.)
 - XIX. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicita el aumento del cupo de producción azucarera para la presente zafra. (S.-105-460/87.) (Pág. 2374.)
 - XX. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen y otros señores senadores por el que se solicita el pronto cumplimiento de las instrucciones del presidente de la Nación con respecto al paso a retiro del capitán de corbeta Alfredo Ignacio Astiz. (S.-105-461/87.) (Pág. 2374.)
 - XXI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Grosso y Mauhum por el que se solicita la efectivización de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente al uso de la planta repetidora de Canal 12 Telecor S.A., en Catamarca. (S.-105-463/87.) (Pág. 2375.)
4. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se declare de interés nacional el "Mundialito Infantil de Fútbol Alto Valle '88". (S.-105-456/87.) (Pág. 2375.)
5. A pedido del señor senador Solari Yrigoyen se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Defensa Nacional para el proyecto de declaración del que es autor por el que se solicita el cumplimiento inmediato de las instrucciones del señor presidente

de la Nación en cuanto al pase a retiro del capitán de corbeta Alfredo I. Astiz. (S.-105-461/87.) (Página 2376.)

6. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre régimen de coparticipación federal de impuestos. (S.-310/85.) (Pág. 2376.)
7. Consideración del proyecto de ley en revisión de ahorro obligatorio y de modificación de diversas normas impositivas. (C.D.-105-68/87.) Se aprueba. (Página 2414.)
8. A moción del señor senador Solari Yrigoyen se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita un subsidio para el Racing Club de Trelew. (S.-105-257/87.) (Pág. 2472.)
9. Apéndice:

- I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2473.)
- II. Inserción. (Pág. 2474.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 23 del jueves 7 de enero de 1988:

Sr. Presidente (Solana). — Queda abierta la sesión especial.

I

CONVOCATORIA

Sr. Presidente (Solana). — Por Secretaría se dará lectura a una nota presentada por varios señores senadores en la que solicitan la realización de una sesión especial, y al decreto respectivo dictado por la Presidencia del cuerpo.

Sr. Secretario (Macri). — (Lee.)

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1987.

Señor presidente del Honorable Senado de la Nación doctor Víctor H. Martínez.

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Los senadores nacionales que suscriben la presente nota lo solicitan la convocatoria a una sesión especial del Honorable Senado de la Nación para el tratamiento de las leyes de Coparticipación Federal e Impositivas que ha ingresado a este cuerpo como consecuencia de su aprobación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de su tratamiento, ya que su mayoría tienen vigencia a partir del 1º de enero de 1988.

Saludamos a usted muy atentamente.

Antonio O. Nápoli. — Juan Trilla.

—Al archivo.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1987.

Visto la nota presentada por varios señores senadores, solicitando la realización de una sesión especial del honorable cuerpo para el día 7 de enero de 1988, y

CONSIDERANDO:

Que dicha petición se ajusta a los alcances del artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado,

Por ello:

El presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º — Cítese por Secretaría a los señores senadores a sesión pública especial (artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado) para el día 7 de enero de 1988 a las 16 horas, con el objeto de considerar el siguiente plan de labor:

- 1) Lectura de Asuntos Entrados.
- 2) Proyecto de ley en revisión sobre ahorro obligatorio, reforma impositiva y régimen del cheque.
- 3) Proyecto de ley devuelto con modificaciones estableciendo un Régimen Transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese.

*VÍCTOR H. MARTÍNEZ,
Antonio J. Macri.*

—Al archivo.

2

PLAN DE LABOR

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: en la reunión de presidentes de bloque realizada hoy a los efectos de ordenar la labor parlamentaria de esta sesión se convino en tratar en primer término el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos y, en segundo término, los proyectos de leyes impositivas.

Solicito, en consecuencia, que el cuerpo apruebe este plan de labor y, asimismo, formulo moción para que los mencionados proyectos se traten sobre tablas.

Sr. Presidente (Solana). — En consideración la moción formulada por el señor senador por La Rioja.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: de acuerdo con lo convenido este mediodía en la reunión de presidentes de bloque, apoyamos la propuesta formulada por el señor senador por La Rioja.

Sr. Presidente (Solana). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor propuesto por el señor senador por La Rioja y la moción de tratamiento sobre tablas de los temas incluidos en él.

—La votación resulta afirmativa.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Solana). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados, que fueron girados a sus respectivos destinos, de acuerdo con la autorización oportunamente conferida a esta Presidencia.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee.*)

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 21 de diciembre por el que se modifican las fechas del viaje que realizará el señor senador Lafferrère a Nueva Zelanda, del 12 al 27 de enero de 1988 (D.P.-1.107/87). (*A sus antecedentes.*)

—Decreto de la misma fecha por el que se designa al señor senador León para que, como presidente del Parlamento Latinoamericano, participe en el coloquio sobre el "Problema del Desarrollo Rural en América latina desde una perspectiva europea", que tendrá lugar en Roma, Italia (D.P. 1.111/87). (*A sus antecedentes.*)

—Decreto de la misma fecha por el que se crea el Centro de Capacitación Superior para el Personal del Honorable Senado, dependiente de la Secretaría Administrativa (D.P. 1.112/87). (*A sus antecedentes.*)

II

Acuerdo

Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdo (P.E.-105-123/87). (*A la Comisión de Acuerdos.*)

III

Adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1987.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar la adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCRUM), organismo especializado intergubernamental creado en 1959 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Este organismo tiene como misión reunir, estudiar y difundir documentación relativa a los problemas científicos y técnicos de la conservación y de la restauración de los bienes culturales, coordinar, fomentar o iniciar investigaciones en esa esfera; prestar servicios consultivos y formular recomendaciones sobre temas de orden general o especiales y, por último, coadyuvar en la formación de investigadores y técnicos y en la elevación del nivel de las restauraciones.

El ICCROM posee, además, una biblioteca especializada compuesta por unos 9.000 volúmenes —cuya consulta es accesible a sus miembros— y distribuye entre ellos publicaciones y material pedagógico.

El organismo de referencia cuenta con un servicio permanente de especialistas que si bien dedican sus actividades a la conservación de los bienes culturales a escala mundial, sus actividades se encaminan ante todo a ayudar a los estados miembros, a sus servicios oficiales de conservación, a los miembros asociados y a la UNESCO.

El ICCROM aborda los problemas de la conservación de los bienes culturales a través de las siguientes actividades: estudio de los materiales que constituyen el bien cultural; estudio de las razones de su degradación; estudio de los métodos científicos de conservación; y aplicación de los resultados con miras a la restauración.

El organismo de referencia cuenta con más de setenta estados miembros y cuarenta y ocho miembros asociados —instituciones culturales públicas o privadas sin carácter lucrativo— cuyos delegados a la Asamblea General se reúnen cada dos años para definir la política de conjunto y aprobar el programa y presupuesto bienal. El organismo cuenta, además, con un Consejo de Especialistas, la mayoría elegida por la Asamblea General, y de un Secretariado —compuesto por 25 personas— encargado de la preparación y realización del programa.

La adhesión de la República a este organismo contribuirá a reforzar las acciones emprendidas por el gobierno nacional en favor de la preservación del patrimonio cultural mediante el empleo de las técnicas más modernas de conservación, capacitando al mismo tiempo el personal especializado en restauración de nuestro país.

El ingreso al ICCROM significaría una erogación de once mil ciento treinta y un dólares estadounidenses con ochenta y nueve céntimos (u\$s 11.131,89) para 1987 ya que la cuota anual está fijada en el uno por ciento del aporte que el país efectúa a la UNESCO, importe que se imputaría a la partida del Ministerio de Educación y Justicia quien tiene a su cargo el pago de las cuotas de UNESCO.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.032

RAÚL R. ALFONSÍN.

Dante Caputo. — Jorge Sabato. — Carlos A. Bastianes.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase la adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios de

de ser inferiores las remuneraciones provinciales, la garantía se abonará, como límite, hasta alcanzar la remuneración vigente en la administración central nacional;

- c) Para la base de cálculo del monto de salarios en la administración central se utilizará el índice que confeccionará la Dirección Nacional de Programación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de la Nación; para precios al consumidor se utilizarán los índices publicados por el INDEC; para las plantas de personal de las provincias se computarán las efectivamente ocupadas al 31 de diciembre de 1987, para lo cual los gobiernos provinciales deberán informar a la Secretaría de Hacienda estos guarismos; dentro de los treinta (30) días de la sanción de la presente.

Los pagos a que hubiere lugar por parte del gobierno nacional serán efectivizados antes del 30 de abril de 1988.

La Nación se obliga a no cubrir las vacantes ni incrementar las plantas del personal de la administración central nacional existente al 31 de diciembre de 1987. Las provincias percibirán las sumas resultantes de la garantía de este artículo cuando correspondiere y sólo en el caso que no incrementasen las plantas de personal ni cubriesen las vacantes existentes al 31 de diciembre de 1987.

Las provincias que otorguen incrementos salariales a sus agentes que superen, en promedio para la administración central, en diez puntos la variación acumulada del índice de precios al consumidor, en tanto estos incrementos superen los otorgados para la administración central nacional, se entenderá que renuncia a participar en la distribución del fondo de aportes del Tesoro nacional, instituido en el inciso d) del artículo 3º de la presente ley.

Las disposiciones de este artículo regirán hasta el 31 de marzo de 1988.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Béjar.

Sr. Presidente (Solana). — Queda reservado para su tratamiento, tal como fuere solicitado por la Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

2

Régimen de ahorro obligatorio y modificación de diversas normas impositivas. Proyecto de ley en revisión. (Cámara de Diputados, 105-68/87)

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1987.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Ahorro obligatorio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Establécese un régimen de ahorro obligatorio por los períodos anuales 1988 y 1989 sobre la base de los períodos fiscales 1986, 1987 y 1988, en las condiciones previstas en los capítulos II y III de este título.

Art. 2º — El reintegro de las sumas ahorradas se realizará el día en que se cumplan sesenta (60) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se realice el respectivo depósito, con más un interés que se determinará aplicando una tasa mensual igual a la que rija en cada uno de los períodos mensuales para los depósitos en caja de ahorro común de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Los intereses se capitalizarán por períodos mensuales contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de constitución del respectivo depósito y estarán exentos del impuesto a las ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas.

Art. 3º — Las sumas ahorradas, con más los intereses devengados, no se considerarán como activo o como bienes a los fines de la determinación de los impuestos sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, respectivamente, por lo que en ambos casos no serán tenidos en cuenta a efecto del prorratio de pasivos o deudas.

Art. 4º — A los fines dispuestos en el presente título no serán de aplicación las exenciones, liberaciones y demás franquicias tributarias, de carácter subjetivo u objetivo, establecidas por normas de promoción sectoriales, regionales o especiales, respecto de los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, no incluidas en las leyes de los referidos impuestos, según textos vigentes para los períodos comprendidos en el presente régimen.

Art. 5º — El ingreso de las sumas destinadas al ahorro obligatorio deberá efectuarse mediante depósito de su importe en efectivo o con cheque en la forma, plazo y condiciones que disponga la Dirección General Impositiva.

Art. 6º — Cuando el depósito del ahorro obligatorio se realice con posterioridad al vencimiento de los plazos que establezca la Dirección General Impositiva y hasta el último día del mes subsiguiente al de dicho vencimiento, los respectivos montos deberán ingresarse con más un interés mensual igual al que rija al momento del ingreso para montos sin actualizar, de conformidad a lo previsto en el artículo 42 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Art. 7º — Si el ahorro se constituyera a partir del primer día del tercer mes siguiente a aquel en que opere el vencimiento de los plazos a que alude el artículo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los intereses previstos en el mismo, el monto del ahorro

deberá ingresarse actualizado, considerando a dicho fin la variación operada en el índice mayorista, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre el mes de vencimiento y el penúltimo mes anterior a aquel en que se efectúe el ingreso. En estos casos el obligado al ahorro perderá el derecho al reintegro del importe que resulte de aplicar al monto del depósito actualizado el porcentaje que resulte de computar un diez por ciento (10 %) mensual, hasta el límite del cincuenta por ciento (50 %), por el lapso comprendido entre el tercer mes siguiente al del vencimiento y el mes en que se realice el depósito, considerándose como mes completo las fracciones menores al mes calendario.

El importe no reintegrable, calculado de acuerdo con lo previsto en el párrafo precedente, no será deducible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

Art. 8º.— Cuando resulte de aplicación lo dispuesto por el artículo anterior, los intereses previstos en el artículo 2º se devengarán exclusivamente respecto de las sumas depositadas por las cuales resulte procedente el derecho al reintegro.

Art. 9º.— Cuando por el hecho de no haberse constituido el ahorro en el plazo previsto, correspondiera la sanción del artículo 7º, el juez administrativo notificará la aplicación de la misma a los sujetos responsables, sin necesidad de sustanciación previa. La sanción será recurrible con efectos devolutivos por las vías establecidas en los artículos 78 y 82, inciso a) de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Art. 10.— Las constancias de los depósitos que se entregarán a los contribuyentes podrán ser sustituidas, a solicitud del depositante y a partir de los ciento ochenta (180) días de la fecha del depósito, por un instrumento de crédito nominativo y transferible por endoso, a ser emitido en las condiciones y con las características que determine la Secretaría de Hacienda.

Art. 11.— No corresponderá constituir el ahorro en función de la renta por el período anual 1988 cuando, de conformidad al artículo 16, se determine un importe igual o inferior a quinientos australes (A 500). Igual tratamiento será aplicable con relación al ahorro en función del patrimonio determinado de acuerdo a los artículos 22 y 25.

Respecto del ahorro correspondiente al período anual 1989, dicho monto se actualizará mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación operada en el mismo entre el mes de enero de 1988 y el penúltimo mes anterior al del vencimiento que se fije para el respectivo depósito.

CAPÍTULO II

Ahorro en función de la renta

Art. 12.— Quedan obligados a cumplimentar el sistema de ahorro de este capítulo los sujetos que se indican a continuación:

a) Las personas físicas domiciliadas en el país;

- b) Las sucesiones indivisas radicadas en el país, en los casos en que el último domicilio del causante hubiera estado ubicado en el país, hasta el momento en que se dicte declaratoria de herederos o se declare válido el testamento que cumple la misma finalidad;
- c) Los comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, excluidos los organismos y entidades a que se refiere el artículo 1º de la ley 22.016 por la parte de las ganancias que correspondan a fiscos nacional, provinciales y municipales.

Las sucesiones indivisas iniciadas a raíz de decesos ocurridos en los años 1986 y 1987, según corresponda, deberán determinar el resultado neto a que se refiere el artículo siguiente sumando o compensando, según proceda, los resultados netos atribuibles al causante y a la sucesión. Cuando el deceso hubiera ocurrido con posterioridad al año 1987 se computará el resultado correspondiente al causante para los años 1986 y 1987.

Art. 13.— A los fines de establecer la capacidad de ahorro en función de la renta se presumirá, sin admitir prueba en contrario excepto las causales establecidas en el artículo 26, que en cada uno de los períodos comprendidos en el régimen de este título los obligados obtienen una renta igual a la que surja de introducir los ajustes que se determinan en el artículo siguiente, al resultado neto determinado de acuerdo con las normas del impuesto a las ganancias, de los ejercicios fiscales que para cada caso se fijan a continuación:

- a) Sujetos indicados en los incisos a) y b) del artículo 12: para los períodos anuales 1988 y 1989, los ejercicios fiscales 1986 y 1987, respectivamente;
- b) Sujetos indicados en el inciso c) del precitado artículo:

- 1º Para el período anual 1988: los ejercicios fiscales cerrados en los meses de octubre a diciembre de 1986 y enero a septiembre de 1987.
- 2º Para el período anual 1989: los ejercicios fiscales cerrados en los meses de octubre a diciembre de 1987 y enero a septiembre de 1988.

Art. 14.— De conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá realizar los siguientes ajustes al resultado neto:

a) Se adicionarán:

- 1º Las rentas exentas netas originadas en los conceptos comprendidos en los incisos h), i), k), q), r), t) y a*) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones.
- 2º Las rentas exentas y el monto de las desgravaciones, deducciones, liberaciones y demás franquicias tributarias de carácter objetivo o

subjetivo, dispuestas por normas de promoción de carácter sectorial, regional o especial, no incluidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que hubieran afectado la determinación del resultado neto.

- 3º Las cuotas del ajuste por inflación positivo del ejercicio tomado como base de cálculo imputables a ejercicios posteriores, por aplicación del artículo 98 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones;

b) Se detraerán:

- 1º En los casos de los obligados comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 12:

1.1. Las deducciones previstas en el artículo 23 de la referida ley vigentes para el ejercicio fiscal 1986 o 1987, según corresponda.

1.2. Los dividendos percibidos en efectivo o en especie que hayan sido incorporados a efectos de la determinación del resultado neto.

- 2º De corresponder, la cuota imputable al ejercicio en concepto de diferimiento del ajuste por inflación positivo de ejercicios anteriores, de conformidad a lo establecido en el aludido artículo 98, en la medida en que hubiera afectado la determinación de la ganancia neta.

A los fines previstos en este título se entenderá por resultado neto el que se determine por aplicación de las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias vigentes para los periodos fiscales 1986, 1987 o 1988, según corresponda, sin computar los quebrantos acumulados de ejercicios anteriores.

Art. 15. — Al monto que se determine según lo dispuesto en el artículo anterior, se le aplicarán las tasas previstas por la Ley del Impuesto a las Ganancias en sus artículos 90 y 69, incisos a) y b), según corresponda, que rijan para los ejercicios fiscales 1986, 1987 o 1988.

El resultado así obtenido se actualizará mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación operada en el mismo entre el penúltimo mes inmediato anterior al del cierre del ejercicio fiscal tomado como base de cálculo y el penúltimo mes inmediato anterior a aquel en que operen los respectivos vencimientos.

Art. 16. — El ahorro anual correspondiente a cada uno de los periodos a que se refiere el artículo 13 se determinará aplicando, sobre el importe calculado conforme las normas del artículo anterior la tasa del cuarenta por ciento (40 %).

CAPÍTULO III

Ahorro en función del patrimonio

Art. 17. — Están obligados a cumplimentar el sistema de ahorro de este capítulo:

a) Las personas de existencia ideal, las empresas o explotaciones unipersonales y los establecimientos estables, comprendidos en el artículo 2º de la Ley de Impuesto sobre los Capitales, texto ordenado en 1986, excepto los organismos y entidades a que se refiere el artículo 1º de la ley 22.016 en la parte que corresponda a los fiscos nacionales, provinciales o municipales;

b) Las cooperativas mencionadas en el artículo 6º de la ley 23.427, excepto aquellas que exclusivamente prestan servicios públicos de energía eléctrica, gas, agua o telefonía y las de trabajo de enseñanza que cumplan con los requisitos que para ellas prescribe la reglamentación de la ley citada;

c) Las personas físicas y sucesiones indivisas a que se refiere el artículo 2º de la Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto, texto ordenado en 1986, excepto que se trate de personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el exterior, o de sucesiones indivisas radicadas en el país en los casos en que el último domicilio del causante hubiera estado ubicado en el exterior.

Art. 18. — A efectos de la determinación de la capacidad de ahorro de los obligados a que se refiere el inciso a) del artículo anterior se presumirá, sin admitir prueba en contrario excepto las causales previstas en el artículo 26, que en cada uno de los ejercicios comprendidos en el régimen de este título, los mismos poseen un capital neto igual al que surja de adicionar al capital imponible a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Impuesto sobre los Capitales, de los ejercicios fiscales cerrados en los meses de octubre de 1986 a septiembre de 1987, para el período anual 1988 y en los cerrados en los meses de octubre de 1987 a septiembre de 1988, para el período anual 1989, los siguientes conceptos:

a) El importe atribuible a los bienes a los que se refiere la exención dispuesta por el inciso a) del artículo 3º de la mencionada ley, valuados de acuerdo a las normas de la misma;

b) El monto de las exenciones, reducciones, desgravaciones y demás franquicias tributarias de carácter objetivo o subjetivo dispuesto por las normas de promoción sectoriales, regionales o especiales que hubieran afectado la determinación del capital imponible.

A los fines previstos en este artículo para la determinación del capital imponible, se deducirá la proporción del pasivo que no hubiera resultado computable

como consecuencia de las exenciones a que se refieren los incisos a) y b).

Art. 19. — Al monto establecido de acuerdo con las normas del artículo precedente se le aplicará la alícuota que para la liquidación del impuesto sobre los capitales rija para los ejercicios fiscales 1986, 1987 o 1988, según corresponda.

Si el importe así obtenido supera al fijado por el inciso g) del artículo 3º de la Ley de Impuesto sobre los Capitales, vigente para cada ejercicio, se actualizará de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15.

Art. 20. — Para la determinación de la capacidad de ahorro de los obligados mencionados en el inciso b) del artículo 17 se presumirá, sin admitir prueba en contrario excepto las causales previstas en el artículo 26, que en cada uno de los ejercicios comprendidos en el régimen de este título, los mismos poseen un capital neto igual al que resulte de adicionar al capital cooperativo imponible a que se refiere el artículo 15 de la ley 23.427, determinado para los ejercicios cerrados en los meses de diciembre de 1986 a noviembre de 1987 para el período anual 1988 y en los cerrados en los meses de diciembre de 1987 a noviembre de 1988 para el período anual 1989, el importe atribuible a los bienes a que alude el inciso a) del artículo 9º de la mencionada ley y, de corresponder, el importe de los conceptos a que se refiere el inciso b) del artículo 18.

A estos fines será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 18.

Art. 21. — Al monto que resulte de lo dispuesto en el artículo anterior se le aplicará la alícuota establecida por el artículo 16 de la ley 23.427, que rija para los ejercicios fiscales 1986, 1987 o 1988, según corresponda.

Cuando el importe así obtenido supere el fijado por el referido artículo 16, vigente para el ejercicio tomado como base de cálculo, se actualizará de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15.

Art. 22. — El ahorro correspondiente a cada uno de los períodos comprendidos en el régimen de este título se determinará aplicando sobre el importe que resulte de lo establecido en los artículos 19 y 21, la tasa del cuarenta por ciento (40 %).

Art. 23. — A fin de determinar la capacidad de ahorro de los obligados a que se refiere el inciso c) del artículo 17 se presumirá, sin admitir prueba en contrario excepto las causales previstas en el artículo 26, que en los años comprendidos en el régimen de este título, los mismos poseen un patrimonio neto igual al patrimonio neto sujeto a impuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto, texto ordenado en 1986, correspondiente a los períodos fiscales 1986 y 1987, para los períodos anuales 1988 y 1989, respectivamente, incrementado en el importe que, de acuerdo con las disposiciones de dicho texto legal, corresponda asignar a los bienes comprendidos en las exenciones dispuestas por el segundo párrafo del inciso a) y en los incisos b) y c) del artículo 4º de dicha ley, y artículo 4º de la presente.

Al monto que se obtenga se le deducirá, en su caso:

- a) El importe de las acciones del inciso c) y de las participaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 6º de la Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto, texto ordenado en 1986, disminuido en la correspondiente proporción de las deudas computadas a fin de establecer aquel patrimonio;
- b) El importe de las deudas que, a efectos de su determinación, no se hubieran computado a raíz de las exenciones a que alude el primer párrafo.

Las sucesiones indivisas iniciadas a raíz de decesos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 1986 o 1987, aplicarán lo dispuesto en este artículo considerando el patrimonio neto sujeto a impuesto correspondiente al causante.

Art. 24. — Cuando el patrimonio neto establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior supere el importe establecido en el artículo 12 de la Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto, vigente para cada uno de los períodos fiscales, se aplicará la escala del artículo 13 de la mencionada ley que rija para el período tomado como base del cálculo.

Art. 25. — Para determinar el ahorro correspondiente a cada uno de los períodos del presente régimen, el importe que se obtenga por aplicación del artículo anterior actualizado conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15, se le aplicará la tasa del cuarenta por ciento (40 %).

CAPÍTULO IV

Exclusiones

Art. 26. — Los sujetos mencionados en los artículos 12 y 17, quedarán excluidos de la obligación de ahorro —en función de la renta y del patrimonio— con relación al período anual respectivo, cuando al operarse los vencimientos que se fijan para el correspondiente depósito, demuestren fehacientemente en las condiciones que determine la Dirección General Impositiva, la ocurrencia de las siguientes situaciones:

- a) Sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 12. Cuando en el curso de los períodos anuales 1988 o 1989 experimenten la pérdida de una o más fuentes de rentas, siempre que concurran a su respecto las siguientes circunstancias:

- 1º Se originen por incapacidad sobreviniente o desempleo de su titular o por una pérdida en una proporción superior al ochenta por ciento (80 %) del capital generador de la renta.
- 2º La fuente o fuentes perdidas hubieran generado en el ejercicio fiscal 1986 o 1987, según corresponda, en su conjunto, el ochenta por ciento (80 %) o más de las rentas que deben computarse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 y por los puntos 1 y 2 del inciso a) del artículo 14.

3º La renta generada por la o las fuentes a que se refieren los apartados anteriores no hubieran sido sustituidas en el curso del período considerado, en una proporción tal que dé lugar a que la pérdida de rentas que surja en definitiva, sea inferior al porcentaje requerido por el apartado 2. A este efecto, deberán considerarse todas las rentas provenientes de fuentes incorporadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1986 o 1987, según corresponda, cualquiera sea el carácter —gravadas o exentas— que revistan a los fines del Impuesto a las Ganancias;

b) Sujetos comprendidos en el inciso b) del artículo 12. Cuando en el curso de los períodos anuales 1988 o 1989 se configure la situación prevista en el inciso a) precedente a raíz de la pérdida del capital generador de las rentas en la proporción allí indicada o cuando en esos períodos o en el año 1986 o 1987, según corresponda, el deceso del causante hubiera significado una pérdida de rentas provenientes del trabajo personal que encuadre en lo dispuesto en el apartado 2 de dicho inciso;

c) Sujetos comprendidos en el inciso c) del artículo 12. Cuando en el curso de los períodos anuales 1988 o 1989 se configure alguna de las siguientes situaciones:

1º Declaración de quiebra de la empresa.

2º Pérdida, en una proporción superior al sesenta por ciento (60 %), del capital de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 1986, 1987 o 1988, según corresponda, determinado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto sobre los Capitales, texto ordenado en 1986, sin considerar las exenciones que la misma establece. A los efectos indicados precedentemente, cuando dichas disposiciones contemplen o no valores actualizables, los importes determinados con arreglo a las mismas deben, a su vez, actualizarse considerando la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, producida entre el mes de cierre del ejercicio comercial respectivo y el penúltimo mes anterior al vencimiento fijado para la constitución del ahorro.

Si alguna de las situaciones a que se refiere este inciso se configuran respecto de sujetos incluidos en el artículo 17, incisos a) y b), distintos de los comprendidos en el artículo 12, inciso c), tales sujetos quedarán excluidos, en el período anual correspondiente, de la obligación de determinar el ahorro de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20, respectivamente. Ello sin perjuicio de la exclusión que pudiera corresponder, a los socios o dueños de la empresa en razón de las situaciones enumeradas en los incisos a) y b) precedentes.

En los casos en que las situaciones previstas en el presente artículo se produjeran en el curso de los períodos anuales 1988 o 1989, con posterioridad a las fechas de vencimiento que para dichos períodos se establezcan, los responsables podrán interpretar recurso de repetición, en las condiciones que determine la Dirección General Impositiva. Igual tratamiento se aplicará cuando a las precitadas fechas, no se pruebe fehacientemente la existencia de las referidas situaciones.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

Art. 27. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer que el reintegro previsto en el artículo 2º se pueda efectuar hasta en ocho (8) trimestres contados a partir de la fecha indicada en el mismo. Hasta tanto se efectivice el reintegro del total de los montos ahorrados, los correspondientes saldos devengarán el interés que se fija en el referido artículo. La Secretaría de Hacienda establecerá las pautas del programa de reintegro en función de los aspectos que estime adecuados para su cumplimiento.

Art. 28. — La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización del presente régimen de ahorro obligatorio, quedando facultada para dictar las normas complementarias que considere necesarias y en especial sobre requisitos, formas, plazos, regímenes especiales de percepción y retención de las sumas destinadas al ahorro, planes especiales de facilidades para el ingreso de los montos de ahorro, anticipos y demás condiciones que deberán ser observadas a los fines de la determinación de las capacidades de ahorro y constitución de los respectivos depósitos.

Art. 29. — En todo lo no previsto en este título serán de aplicación las normas legales y reglamentarias de la ley 11.083, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, excepto las disposiciones de sus artículos 45, 46, 48, 50 y 52, salvo en lo que concierne a la actuación de los agentes de retención.

TÍTULO II

Impuesto sobre los débitos bancarios

Art. 30. — Establécese hasta el 31 de diciembre de 1992 un impuesto sobre los débitos en cuenta corriente de las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, en cuentas a la vista de cajas de crédito y en cuentas de cheque postal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Quedan comprendidas en el ámbito del gravamen establecido por este título todas las operatorias que cumplan la misma finalidad que la de la cuenta corriente a que se refiere el párrafo anterior, las cuales serán determinadas por el Poder Ejecutivo nacional con el asesoramiento del Banco Central de la República Argentina.

El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades citadas en el primer párrafo como agentes de liquidación y percepción.

Art. 31. — El hecho imponible se considerará configurado al efectuarse el débito en la respectiva cuenta u operatoria a que se refiere el artículo 30.

Art. 32. — La alícuota general del impuesto será del siete por mil (7‰).

Dicha alícuota será reducida al uno por mil (1‰) para los débitos correspondientes a cuentas de los contribuyentes que se mencionan a continuación, en tanto se usen en forma exclusiva en el desarrollo específico de sus actividades:

- a) Corredores y comisionistas de cereales registrados en la Junta Nacional de Granos en el Registro de Mandatarios;
- b) Consignatarios de ganado registrados en la Junta Nacional de Carnes;
- c) Agentes de bolsa registrados como tales en las bolsas o mercados de valores;
- d) Corredores y casas de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina;
- e) Agentes de mercado abierto;
- f) Expendedores de combustibles líquidos con precios oficiales de venta.

Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a ampliar el alcance de la reducción de la alícuota dispuesta en el párrafo anterior, respecto de otras actividades específicas, cuando por la modalidad de sus operaciones hayan habitualmente un uso acentuado de cheques y cuyo margen de utilidad sea extremadamente reducido en comparación con el tributo, siempre que la situación particular no pueda ser corregida por otro medio más idóneo.

Estarán alcanzados con la alícuota del dos por mil (2‰) los débitos correspondientes a las entidades cooperativas y las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 en tanto no se les hubiera suspendido la vigencia de dicho artículo respecto del impuesto a las ganancias.

Art. 33. — Estarán exentos del impuesto:

- a) Los débitos correspondientes a cuentas de:
 - 1º El Estado nacional, provincial y municipal, así como también de sus respectivas reparticiones, excluidas las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificaciones.
 - 2º Las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas, a condición de reciprocidad.
 - 3º Las entidades reconocidas como exentas por la Dirección General Impositiva, en virtud de lo dispuesto por los incisos e), f) y g) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones.
 - 4º Las personas jurídicas regidas por la ley 23.298 y sus modificatorias;

b) Los débitos correspondientes a las siguientes operaciones:

- 1º Contraasientos por error.
- 2º Anulaciones de documentos no corrientes previamente acreditados en cuenta.
- 3º Realizadas entre el Banco Central de la República Argentina y las instituciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;

c) Los débitos correspondientes a:

- 1º Operaciones realizadas entre sí por las instituciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, sólo en aquellos casos en que el pagador efectivo y el beneficiario efectivo del correspondiente pago fueran dichas instituciones actuando a nombre y por cuenta propia. A los fines de esta exención, las instituciones beneficiadas deberán canalizar dichos pagos y cobros a través de cuentas respecto de las cuales se pueda demostrar su uso en forma exclusiva para tales operaciones.

Cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad en los mercados de valores y de cereales de las respectivas bolsas y las bolsas de comercio que no tengan organizados mercados de valores y/o de cereales.

Los débitos que generen un impuesto inferior a cinco australes (A 5).

Dicho importe será actualizado por la Dirección General Impositiva de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y regirá de acuerdo a sus disposiciones.

Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para ampliar la exención consagrada por el inciso c) punto 1º de este artículo a otras operaciones, a solicitud del Banco Central de la República Argentina, para las que regirán los condicionamientos en él previstos.

Art. 34. — El impuesto creado por este título podrá ser computado como crédito de impuesto en una suma equivalente al setenta por ciento (70 %) de los importes tributados.

En los casos de aplicación de la alícuota reducida del uno por mil (1‰), se computará como crédito de impuesto la totalidad de los importes tributados.

Los contribuyentes del gravamen creado por este título efectuarán la acreditación autorizada, contra el impuesto a las ganancias determinado.

El cómputo del impuesto sólo podrá efectuarse en la declaración jurada anual del gravamen mencionado y no podrá generar, en ningún caso, saldo a favor del contribuyente. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación

con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitud de reintegro o transferencia a favor de terceros, ni trasladarse a otros ejercicios fiscales.

Cuando se trate de crédito de impuesto correspondiente a los sujetos mencionados en los incisos b) y c) y penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1986 y sus modificaciones) y sociedades en comandita por acciones en la parte comanditada, corresponderá atribuirlo a cada uno de los socios o asociados, en idéntica proporción en que los mismos participan en los resultados impositivos de aquéllas.

No obstante, y a los efectos de su imputación sólo procederá hasta el importe del incremento de la obligación fiscal producida por la incorporación en la declaración jurada individual, de las ganancias de la entidad que origina el crédito, hasta el límite del impuesto a las ganancias determinado del ejercicio en que corresponda atribuirlo.

En todos los casos, el importe computable estará referido al impuesto tributado durante el ejercicio fiscal al que corresponda la declaración jurada en la que se produzca el cómputo.

Cuando el crédito de impuesto previsto en los párrafos anteriores más el importe de los anticipos determinados para el impuesto a las ganancias calculados conforme a las normas respectivas superen la obligación estimada del período para dicho impuesto, el contribuyente podrá solicitar a la Dirección General Impositiva autorización para reducir total o parcialmente el importe a pagar en concepto de anticipos. Facúltase al referido organismo para dictar las normas que determinen el procedimiento a observar para llevar a cabo la aludida reducción.

El importe del impuesto computado como crédito no será deducido a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

Art. 35. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a reducir con carácter general la alícuota del siete por mil (7%) hasta en un cincuenta por ciento (50%).

Art. 36. — El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 32 y 33 inciso c), para la reducción de alícuota o exención del gravamen, respectivamente, sin perjuicio de la determinación del impuesto correspondiente, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a cinco (5) tantos del impuesto de los contribuyentes que incumplieron, establecido en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

En el supuesto de reincidencia la multa prevista en el párrafo anterior se elevará a diez (10) tantos del impuesto respectivo.

Art. 37. — El impuesto establecido por la presente ley se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización se hallarán a cargo de la Dirección General Impositiva, la que establecerá los plazos, forma y condiciones de los pagos correspondientes al presente impuesto y toda otra forma complementaria que estime pertinente.

Dicho organismo también establecerá la forma en que los contribuyentes exentos de la obligación de presentar declaración jurada del impuesto a las ganancias por aplicación del inciso a) del artículo 1º del decreto reglamentario de dicho tributo puedan gozar del cómputo del crédito de impuesto a que se refiere el artículo 34.

Art. 38. — El producido del presente gravamen se coparticipará de acuerdo con el régimen legal pertinente.

Art. 39. — Derógase a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente título, la disposición de facto 22.947, modificada por la norma de facto 22.983 y por las leyes 23.121 y 23.213, restablecida en su vigencia por la ley 23.496.

TITULO III

Modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias

Art. 40. — Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Incorpórase como penúltimo párrafo del artículo 18, el siguiente:

Con relación a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se reputarán percibidos únicamente cuando se cobren: a) Los beneficios derivados del cumplimiento de los requisitos del plan y b) Los rescates por el retiro del asegurado del plan por cualquier causa.

2º Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 19, por los siguientes:

Cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse, con la limitación que se indica en el párrafo siguiente, de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos posteriores. Transcurridos cinco (5) años después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos.

En cada período fiscal podrán deducirse los quebrantos acumulados de períodos anteriores hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) de la ganancia gravada del período.

3º Sustitúyense los incisos i) y n) del artículo 20, por los siguientes:

i) Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro.

No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los beneficios o rescates, netos de aportes no deducibles, derivados de planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, excepto los originados en la muerte o incapacidad del asegurado;

- n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros de vida y mixtos, excepto en los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4º Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:

Artículo 23. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

- a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de cuatro mil australes (australes 4.000) siempre que sean residentes en el país;
- b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a cuatro mil australes (A 4.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Dos mil australes (A 2.000) anuales por cónyuge.
2. Mil australes (A 1.000) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
3. Mil australes (A 1.000) anuales por cada descendiente en línea recta (nieta, nieta, bisnieta o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno y nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarse el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

- c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de cinco mil australes (A 5.000), cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 79.

5º Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 35, la expresión "décimo año" por "quinto año".

6º Incorpórase a continuación del inciso c) del artículo 45, los siguientes incisos:

...) Los beneficios netos de aportes no deducibles, provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal;

...) Los rescates netos de aportes no deducibles, por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que alude el inciso anterior, excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo incorporado a continuación del artículo 101.

7º Incorpórase a continuación del inciso c) del artículo 79, el siguiente inciso:

...) De los beneficios netos de aportes no deducibles, derivados del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal.

8º Sustitúyese el primer párrafo del inciso b) del artículo 81, por el siguiente:

Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte; en los seguros mixtos, excepto para los casos de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sólo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte.

9º Incorpórase a continuación del inciso d) del artículo 81, el siguiente:

...) Los aportes individuales correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, hasta la suma de doce mil australes (A 12.000) anuales.

El importe establecido en el párrafo anterior será actualizado anualmente por la Dirección General Impositiva, aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 89, referido al mes de diciembre de 1987, según lo que indique la tabla elaborada por dicho organismo para el mes

de diciembre del período fiscal en el cual corresponda practicar la deducción.

10. Incorpórase a continuación el inciso g) del artículo 87, el siguiente:

...) Los aportes efectuados a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, hasta la suma de seis mil australes (\$6.000) anuales por cada empleado asegurado en relación de dependencia.

El importe establecido en el párrafo anterior será actualizado anualmente por la Dirección General Impositiva, aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 89, referido al mes de diciembre de 1987, según lo que indique la tabla elaborada por dicho organismo para cada mes de cierre del período fiscal en el cual corresponda practicar la deducción.

11. Sustitúyese la escala del artículo 90, por la siguiente:

De más de \$	a \$	Pagarán \$	Más el %	de \$ Sobre el excedente
0	2.000	—	10	0
2.000	6.000	200	14	2.000
6.000	12.000	700	18	6.000
12.000	20.000	1.840	22	12.000
20.000	30.000	3.600	26	20.000
30.000	42.000	6.200	30	30.000
42.000	56.000	9.800	34	42.000
56.000	72.000	14.500	38	56.000
72.000	90.000	20.640	42	72.000
90.000	en adelante	28.200	45	90.000

12. Derógase el artículo 98.

13. Incorpóranse como artículos nuevos a continuación del artículo 101, los siguientes:

Artículo ... — En el caso de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no estará sujeto a este impuesto el importe proveniente del rescate por el beneficiario del plan, cualquiera sea su causa, en la medida en que el importe rescatado sea aplicado a la contratación de un nuevo plan con entidades que actúan en el sistema, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de percepción del rescate.

Artículo ... — En los casos de beneficios o rescates a que se refieren los incisos incorporados a continuación del inciso c) del artículo 45 y el inciso incorporado a continuación del inciso c) del artículo 79 de esta misma ley, el beneficio neto gravable se establecerá por diferencia entre los beneficios o res-

cates percibidos y los importes que no hubieran sido deducidos a los efectos de la liquidación de este gravamen actualizados, aplicando el índice mencionado en el artículo 89, referido al mes de diciembre del período fiscal en que se realizó el gasto, según la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre del período fiscal en el cual se perciban los conceptos citados.

En el caso de pago del beneficio o rescate en forma de renta periódica se establecerá una relación directa entre lo percibido en cada período fiscal respecto del total a percibir y esta proporción deberá aplicarse al total de importes que no hubieran sido deducidos actualizados como se indica en el párrafo precedente, la diferencia entre lo percibido en cada período y la proporción de aportes que no habrían sido deducidos será el beneficio neto gravable de ese período.

14. Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

Artículo 109. — A los efectos de la actualización de los importes de los artículos 23 y 87, inciso f), los mismos se considerarán vigentes a las fechas que a continuación se indican:

- a) El artículo 87, inciso f), al mes de diciembre de 1985;
b) Los del artículo 23, al mes de diciembre de 1986.

Para la actualización de los tramos de la escala del artículo 90, prevista en el artículo 25, deberá considerarse como base el promedio de los índices mensuales correspondientes al año fiscal 1986.

15. Sustitúyese el artículo 110, por el siguiente:

Artículo 110. — A los efectos de la actualización a que se refiere el tercer párrafo del artículo 25, se tomará como importe correspondiente al mes de diciembre de 1986 la duodécima parte de los montos establecidos en el artículo 23.

16. Incorpóranse como disposiciones transitorias a continuación del artículo 115, los siguientes artículos:

Artículo ... — En todos los casos y sin excepción los quebrantos deducibles serán los originados en el período más antiguo, con prescindencia del régimen que resulte aplicable de acuerdo con las normas vigentes con anterioridad a la reforma dispuesta por la ley 23.260, las aplicables con motivo de ésta y las emergentes de los artículos siguientes.

Artículo ... — Los quebrantos acumulados en ejercicios fiscales cerrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este

artículo no podrán ser deducidos en los dos (2) primeros ejercicios fiscales que cierren a partir de la fecha citada.

Artículo ... — El quebranto correspondiente al primer ejercicio fiscal que cierre a partir de la fecha de vigencia, del presente artículo, no será deducible en el ejercicio siguiente y el cómputo del plazo de cinco (5) años previsto en el artículo 19, empezará a contarse a partir del segundo ejercicio cerrado, inclusive, después de aquel en que se produjo la pérdida.

Artículo ... — A partir del tercer ejercicio cerrado con posterioridad a la fecha de vigencia de este artículo, los quebrantos acumulados a que se refieren los dos artículos anteriores y los que se originen desde el segundo ejercicio, inclusive, cerrado a partir de la aludida fecha, serán deducibles con la limitación del cincuenta por ciento (50 %) de las ganancias gravadas, conforme lo establece el artículo 19.

Artículo ... — Los quebrantos mencionados en el segundo artículo incorporado a continuación del artículo 115, que no hubieran podido deducirse como consecuencia de la suspensión dispuesta por dicha norma o que se difieren con motivo de la limitación del cincuenta por ciento (50 %) prevista en el artículo anterior, podrán deducirse, sin límite en el tiempo, hasta su agotamiento. Dicha deducción procederá siempre que, de no haber existido la suspensión o la limitación en el cómputo de los quebrantos, los mismos hubieran podido ser absorbidos dentro de los plazos previstos en el artículo 19 según corresponda.

Artículo ... — Los sujetos cuyo cierre de ejercicio se hubiera operado hasta la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, calcularán los anticipos no vencidos correspondientes al ejercicio siguiente sobre la base de la ganancia neta gravada del período anterior sin deducir los quebrantos acumulados, si los hubiere.

Artículo ... — Las disposiciones del segundo y tercer artículo incorporado a continuación del artículo 115 no serán de aplicación para los quebrantos provenientes de las enajenaciones mencionadas en el último párrafo del artículo 19.

TITULO IV

Modificaciones a la ley 11.683

Art. 41. — Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

Artículo 28. — Podrá la Dirección General Impositiva exigir, hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presenta-

ción de la declaración jurada por parte del contribuyente, el que fuera posterior, el ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar por el período fiscal por el cual se liquidan los anticipos.

En el caso de falta de ingreso a la fecha de los vencimientos de los anticipos que fije la Dirección General, ésta podrá requerir su pago por vía judicial. Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Dirección General no estará obligada a considerar el reclamo del contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses y actualización que correspondan.

La presentación de la declaración jurada en fecha posterior a la iniciación del juicio no enervará la prosecución del mismo.

Facúltase a la Dirección General Impositiva a dictar las normas complementarias que considere necesarias, respecto del régimen de anticipos y en especial las bases de cálculo, cómputo e índices aplicables, plazos y fechas de vencimiento, actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes.

2º Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

Artículo 42. — La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interposición alguna, un interés resarcitorio.

La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda, el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.

Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización del artículo 115 y de las multas que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 43, 45, 46 y 47.

La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Dirección General Impositiva al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.

En los casos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación los intereses de este artículo continuarán devengándose.

3º Sustitúyese el artículo 55, por el siguiente:

Artículo 55. — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitivo computable desde la interposición de la demanda.

La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la Secretaría de Hacienda, no pudiendo el tipo de interés

exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 42.

4º Incorporárase a continuación del primer párrafo del artículo 115, el siguiente:

En lo que hace a su competencia y en todo lo no especificado, en especial lo referente a plazos, cómputo e índices aplicables, se estará a lo que disponga la Secretaría de Hacienda.

5º Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 117, por el siguiente:

De recurrirse al cobro judicial, la deuda reclamada se actualizará de acuerdo con este régimen, sin necesidad de liquidación o intimación previa por parte de la Dirección General Impositiva, siendo suficiente la reserva formulada en el título ejecutivo.

6º Derógase el artículo 118.

7º Sustitúyese el artículo 120, por el siguiente:

Artículo 120. — También serán actualizados los montos por los que los contribuyentes soliciten devolución, repetición, pidieren reintegro o compensación.

Dichos montos se actualizarán desde la fecha de interposición del pedido de devolución, del reclamo administrativo, de la demanda judicial, o del pedido de reintegro o compensación según corresponda. Para los procedimientos iniciados con anterioridad al 7 de abril de 1976, ella será de aplicación desde esta fecha. En ambos casos cesará al momento de producirse la efectiva devolución o compensación, según el caso.

8º Sustitúyese el artículo 150, por el siguiente:

Artículo 150. — Cuando el Tribunal Fiscal de la Nación encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, podrá disponer que sin perjuicio del interés del artículo 42 se liquide otro igual hasta el momento del fallo, que podrá aumentar en un ciento por ciento (100 %).

TÍTULO V

Modificaciones al régimen del cheque

Art. 42. — Modifícase el decreto ley 4.778/63, ratificado por la ley 18.478, de la siguiente forma:

1º Sustitúyese el inciso 5) del artículo 2º, por el siguiente:

5) En los cheques librados por montos superiores al que resulte de lo preceptuado por el artículo 56, última parte, la expresión de que es a favor de persona determinada y, en los cheques librados por montos iguales

o inferiores, la misma expresión o la mención "al portador".

2º Incorporárase como inciso d) del artículo 3º, el siguiente:

d) Cuando el cheque de monto igual o inferior al que resulte de lo preceptuado en la última parte del artículo 56 no contenga mención del beneficiario, valdrá como cheque al portador.

3º Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

Artículo 6º. — El cheque por monto igual o inferior al que resulte de lo preceptuado en el artículo 56, última parte, sólo podrá librarse:

- a) A nombre de persona determinada;
- b) Al portador.

Cuando el mencionado cheque librado a favor de una persona determinada llevase también la mención "o al portador" u otra equivalente, valdrá como cheque al portador. Asimismo tal cheque sin indicación del beneficiario valdrá como cheque al portador.

El cheque por monto superior al que resulte de lo preceptuado por el artículo 56, última parte, no podrá librarse válidamente sino a favor de persona determinada.

4º Sustitúyese el artículo 13, por el siguiente:

Artículo 13. — El cheque librado a favor de una persona determinada no es susceptible de ser transmitido mediante endoso ni simple entrega y sólo podrá ser transferido bajo la forma y con los efectos de una cesión ordinaria.

El cheque al portador es transmisible mediante la simple entrega y será abonado al tenedor que lo presente al cobro.

En todos los casos el cheque podrá ser endosado al banco pagador al solo efecto de su cobro y en esa circunstancia el endoso valdrá como recibo.

En cualquier otro supuesto, el endoso que figure en un cheque es nulo y sin efecto alguno.

5º Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

Artículo 19. — Cuando una persona hubiese sido desposeída de un cheque al portador por cualquier evento, aquel a cuyas manos hubiera llegado el cheque no estará obligado a desprenderse de él sino cuando lo hubiese adquirido de mala fe o si al adquirirlo hubiese cometido una falta grave.

Son inoponibles al portador legítimo las excepciones fundadas en las relaciones perso-

nales con el librador o por los portadores anteriores, a menos que el portador, al adquirir el cheque, hubiese obrado a sabiendas en detrimento del librador.

6º Sustitúyese el inciso 5) del artículo 34, por el siguiente:

5) Cuando el cheque haya sido librado por un monto superior al que resulte de lo preceptuado por el artículo 56, última parte, y no tuviera indicación de beneficiario o fuere presentado al cobro por una persona distinta del mismo, su mandatario o el beneficiario de una cesión ordinaria; en los cheques de monto igual o inferior al que resulten de lo preceptuado en el artículo 56, última parte, en los tres (3) últimos supuestos mencionados, cuando hubiera sido emitido en favor de una persona determinada.

7º Elimínanse en el artículo 38, párrafo segundo, la expresión "y los endosantes".

8º Sustitúyese el artículo 40, por el siguiente:

Artículo 40. — Los libradores responden solidariamente hacia el portador.

9º Suprímese el último párrafo del artículo 43.

10. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 47 la expresión "endosante" por "portador" y suprímese la última parte del segundo párrafo del mismo artículo.

11. Incorpórase como segundo párrafo del artículo 53, el siguiente:

A los cheques de viajero emitidos en moneda de curso legal en el país le serán aplicadas las disposiciones del artículo 6º.

12. Elimínase en el primer párrafo del artículo 54 la expresión "y los endosantes".

13. Incorpórase como último párrafo del artículo 56, el siguiente:

El monto máximo por el cual podrán librarse cheques al portador será de setecientos australes (A 700). Este monto será actualizado anualmente por el Banco Central de la República Argentina en función de la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada entre el 1º de noviembre y el 31 de octubre del año siguiente. El nuevo monto regirá a partir del 1º de enero, inclusive, de cada año y deberá ser publicado antes de dicha fecha.

14. Deróganse los artículos 7º, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32 y 39.

TÍTULO VI

Art. 43. — Modifícase la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Incorpóranse a continuación del artículo 51, los siguientes artículos:

Artículo... — Establécese un impuesto sobre el precio de venta al público del veinticuatro por ciento (24 %) para las motonafas,alconafas y el kerosene y del diecisiete por ciento (17 %) para el gas oil, diesel oil y fuel oil. Exceptúase de este gravamen a los combustibles destinados al consumo a que se refiere el artículo 11 de la ley 17.597 y sus modificaciones.

Artículo... — El producido del impuesto citado en el artículo anterior no estará sujeto a la contribución prevista en el artículo 89, inciso c), de la ley 19.032 y sus modificaciones, y se destinará:

a) El noventa por ciento (90 %) a un Fondo Especial para el Financiamiento del Sistema Nacional de Previsión Social, que se depositará en la cuenta que a tal efecto determinará la Secretaría de Seguridad Social;

b) El diez por ciento (10 %) a ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de Previsión o de Seguridad Social de cada una de estas jurisdicciones al 30 de noviembre de 1987. Los importes que surjan de dicha distribución serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorrateo será efectuado por la Secretaría de Seguridad Social sobre la base de la información que le suministrará la Comisión Federal de Impuestos.

Quando existan cajas de previsión o seguridad social en jurisdicciones municipales el importe a distribuir a las mismas se determinará en función al número total de beneficiarios existentes al 30 de noviembre de 1987, en relación al total de beneficiarios de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90 %) de dicho importe se deducirá del monto a distribuir de conformidad con el inciso a) y el diez por

ciento (10 %) del determinado de acuerdo al inciso b). Los importes que surjan de dicha distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuir en forma automática y quincenal los fondos correspondientes a las respectivas cajas municipales.

29 Sustitúyese el artículo 55 por el siguiente:

Artículo 55. — Los impuestos internos nacionales a los artículos de tocador, a los objetos suntuarios, a los seguros, a las bebidas gasificadas, refrescos, jarabes, extractos y concentrados, a los vehículos automóviles y motores y a otros bienes y servicios, se abonarán conforme al régimen que se establece en este título.

39 Incorpórase a continuación del párrafo 4º, del artículo 56, el siguiente:

En el caso de la provisión de gas distribuido mediante redes, se considera expendio el vencimiento para el pago de la factura emitida por la empresa prestadora del servicio. Igual temperamento se aplicará al servicio telefónico gravado en este título.

49 Sustitúyese la denominación del capítulo VI del título II "Otros bienes" por la de "Otros bienes y servicios".

59 Incorpóranse a continuación del artículo 70, los siguientes artículos:

Artículo ... — Establécese un impuesto del diecisiete por ciento (17 %) sobre el importe facturado por la provisión de gas distribuido mediante redes.

Exceptúase de este tributo el destinado al consumo de usinas eléctricas de servicios públicos.

Artículo ... — Establécese un impuesto del veinticuatro por ciento (24 %) sobre el importe del total de pulsos facturados al usuario por la prestación de servicio telefónico.

Artículo ... — El régimen establecido por el segundo artículo incorporado a continuación del artículo 51 de esta ley, se aplicará también al producido de los impuestos a que se refieren los dos artículos anteriores.

TITULO VII

Modificación a la ley 23.256

Art. 44. — Sustitúyese el artículo 4º de la ley 23.256, por el siguiente:

Artículo 4º — Las sumas ahorradas se reintegrarán con más un interés que se determinará aplican-

do una tasa igual a la que rija para los depósitos en cajas de ahorro común de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. El mencionado interés se capitalizará por períodos mensuales contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de constitución del respectivo depósito y estarán exentos del impuesto a las ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas.

TITULO VIII

Precios diferenciales de combustibles

Art. 45. — La Secretaría de Energía procederá, en un plazo de noventa (90) días, a zonificar el territorio nacional a los fines de la fijación de precios al consumidor diferenciados de los combustibles líquidos conforme a criterios económicos espaciales.

TITULO IX

Modificación a la Ley de Impuesto sobre los Beneficios Eventuales

Art. 46. — Incorpórase a continuación del inciso c) del artículo 4º de la Ley de Impuesto sobre los Beneficios Eventuales, texto ordenado en 1986, el siguiente inciso:

...) Las transferencias de las acciones cotizadas en las bolsas de comercio del país, cuya negociación se realice en los mercados de valores de las mismas, que se liquiden por el sistema de caja de valores y se les practique la retención del impuesto a la transferencia de títulos valores.

TITULO X

Vigencia

Art. 47. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto:

- a) Las de los títulos I y VIII: desde la fecha de vigencia, inclusive;
- b) Las de los títulos II y V: desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se cumplan los treinta (30) días corridos contados desde su publicación. A los fines de la primera actualización anual que corresponda de conformidad al inciso d) del artículo 33 y al punto 13 del artículo 42, se considerará la variación operada entre el mes de entrada en vigencia de dichos títulos y el mes de octubre de 1988;
- c) Las del título III, artículo 40:
 1. Las modificaciones introducidas por los puntos 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16, a partir de la fecha de entrada en vigencia, inclusive.

2. La modificación introducida por el punto 2, para los quebrantos acumulados a que se refiere el cuarto artículo incorporado por el punto 16, a partir del tercer ejercicio cerrado, inclusive, contado desde la fecha de entrada en vigencia.
3. Las modificaciones introducidas por los puntos 4, 11, 14 y 15 serán de aplicación a partir del 1º de enero de 1987.
4. La sustitución dispuesta por el punto 5, para los quebrantos que se originen a partir del año fiscal en curso a la fecha de entrada en vigencia, inclusive.
5. La derogación dispuesta por el punto 12, respecto del artículo 98 excepto para su cuarto párrafo, para los ejercicios fiscales que cierran a partir de la fecha de entrada en vigencia, inclusive;

- a) Las del título IV: desde la fecha de vigencia, inclusive;
- e) Las del título VI: desde el primer día hábil siguiente al de su publicación, excepto las del punto 5 que tendrán efectos desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se cumplan los treinta (30) días corridos contados desde su publicación;
- f) Las del título VII: desde la fecha de vigencia de la ley 23.256;
- g) Las del título IX: desde el 1º de enero de 1988, inclusive.

Art. 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Béjar.

Sr. Presidente (Solana). — Queda reservado para su tratamiento, tal como fuera solicitado por la Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

3

Defensa Nacional. Proyecto de ley en revisión.

(Cámara de Diputados, 105-74/87)

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1987.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Principios básicos

Artículo 1º — La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional.

Art. 2º — La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Art. 3º — La defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda.

Art. 4º — Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial.

Art. 5º — La defensa nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para casos de guerra o conflicto armado.

Contempla también a los ciudadanos, bienes y espacios nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacio aéreo internacional.

Art. 6º — La defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos, en la forma y términos que establecen las leyes.

TÍTULO II

Finalidad del sistema

Art. 7º — El funcionamiento ordenado del sistema de defensa nacional estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así como a su permanente actualización.

Art. 8º — El sistema de defensa nacional tendrá por finalidad:

- a) Determinar las hipótesis de conflicto y las que deberán ser retenidas como hipótesis de guerra;

tribución de la coparticipación federal entre la Nación y las provincias. Esta es la realidad económica.

Entonces, cuando nosotros decimos que es bondadoso el régimen de distribución primaria, que es bondadoso el diálogo, que es bueno que estudiemos la ley y que la profundicemos, estamos haciendo una crítica sana al proyecto. Cuando, manejándonos con la realidad económica nos oponemos a la distribución secundaria, decimos que no es correcto beneficiar a provincias que parece que tienen derecho a la gobernabilidad y perjudicar a otras que no tienen ese derecho.

Cuando nos manejamos con la realidad económica, que es producto del acuerdo de 1986, y la comparamos con lo que establece este proyecto, vemos que todas las provincias son perjudicadas, salvo aquellas que parece tienen derecho a la gobernabilidad.

La segunda afirmación es que las provincias peronistas tenemos "obras públicas cero", y ahora nos enteramos de que las provincias radicales también tiene "obras públicas cero". Entonces, tenemos que cerrar el Ministerio de Obras Públicas.

Sr. Brasesco. — Es una buena idea. *(Risas)*

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: en lo que respecta a la remisión de fondos tengo información de que mañana se cumpliría con la correspondiente a la cuarta semana del mes de diciembre y que Hacienda piensa girar las remesas correspondientes a enero a partir de la semana próxima. Lo que no se nos explicó es si esto está condicionado o no a la aprobación de estas leyes.

Sr. Brasesco. — Que se cierre el debate.

Sr. Presidente. — La Presidencia va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Brasesco. — Se encuentran cuarenta senadores presentes, señor presidente: hay quórum.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de orden del señor senador Romero Feris de que el proyecto pase a comisión.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general el proyecto.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

7

AHORRO OBLIGATORIO Y NUEVAS NORMAS TRIBUTARIAS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de ahorro obligatorio, se crean nuevos impuestos, se introducen modificaciones a algunas de las normas tributarias vigentes y se fijan restricciones a la transmisión de cheques.

Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de ley que figura en el punto VI/2 de los Asuntos Entendidos.

Sr. Presidente. — La Presidencia informa que hay cuatro señores senadores anotados para hablar. Si desean incorporarse otros senadores, pueden hacerlo.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Se entiende que la lista de oradores está confeccionada, pero que con posterioridad, otros pueden anotarse.

Sr. Presidente. — Sí, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: debemos ahora tratar el proyecto de ley en revisión que contiene modificaciones al régimen tributario argentino, la incorporación de algunas disposiciones nuevas y otras reglamentaciones fundadas en la emergencia económica que vivimos.

Se origina en un mensaje del Poder Ejecutivo enviado al Congreso en sesiones extraordinarias, y el proyecto ha sufrido profundas modificaciones en la Cámara de Diputados como consecuencia de un análisis previo de las distintas bancadas para alcanzar el consenso.

Esta ley, señor presidente, que puede ser llamada omnibus, contiene varios títulos; son diez en total, y algunos tratan de imposiciones transitorias mientras otras son de carácter permanente.

Es transitorio el sistema de ahorro obligatorio, como también lo son el que grava a los

débitos bancarios y las modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias, que establece excepciones transitorias. Tienen una transitoriedad que está expresamente indicada. Y son permanentes las imposiciones para fines determinados, como es el caso de la modificación de la ley de impuestos internos, que tiene como fundamento alimentar un fondo especial para previsión social en el orden nacional y provincial.

Hay algunas otras reglas relativas a la equidad tributaria, como puede ser lo dispuesto en el título VII que se refiere a la ley 23.256; los precios diferenciales de combustibles del título VIII, y la modificación de algunos aspectos de la ley sobre beneficios eventuales en el título IX.

El título IV introduce modificaciones en atribuciones de la Dirección General Impositiva, reformando la ley 11.683, en tanto el título V prescribe un tema totalmente diferente del impositivo al establecer un tratamiento en cuanto al régimen del cheque.

El título X se refiere exclusivamente a la vigencia de cada una de las disposiciones.

El título I habla especialmente del ahorro obligatorio. Es considerado en forma integral con algunas metodologías y arquitectura de la disposición semejante que se aprobó en 1985 para ese año y para 1986.

En este sentido, podemos decir que en el artículo 1º se establece, en primer lugar, la existencia y la urgencia del régimen por dos años. Por ello dijimos que era transitoria, para los años 1988 y 1989.

En el artículo 2º se especifica el plazo para su reintegro que es a los sesenta meses, y un artículo posterior, el 27, faculta al Poder Ejecutivo para devolverlo hasta en ocho trimestres.

En el artículo 3º se define que las sumas ahorradas no están alcanzadas por el impuesto sobre los capitales de entidades ni sobre el patrimonio neto de personas físicas.

En el artículo 4º se establece con claridad que no hay exenciones ni franquicias de ninguna naturaleza dentro del área que abarca el proyecto, incluidos también los regímenes de promoción industrial.

En el artículo 5º se dispone que no hay compensación de ninguna naturaleza por adelantos o saldos de créditos fiscales preexistentes, debiéndose abonar el importe que resulte en efectivo o con cheque, en la fecha que indique la Dirección General Impositiva.

Se establece, además, un sistema para los depósitos realizados fuera de término, es decir, con posterioridad al vencimiento de los plazos. Sobre este punto hay algunas variantes respecto del sistema anterior. Se indica que si la demora

es de sesenta días, corresponde la actualización de los capitales, aplicándose el interés previsto en la ley 11.683, que tendrá carácter mensual, llegándose en algunos casos al 18 por ciento. Si la demora en el pago es mayor de 60 días, ya entran a jugar las disposiciones referidas a la actualización de los capitales que determine la Dirección General Impositiva, la que fijará el interés correspondiente.

Existe también un sistema de disminución del crédito, que será de un 10 por ciento a partir del primer día del tercer mes siguiente al que opere el vencimiento de los plazos, llegándose al 50 por ciento en el séptimo mes siguiente; eso es lo que perderán los contribuyentes que se encuentren en la situación de pagos fuera de término. Sobre este tema también hay una diferencia respecto de la norma anterior, por la cual directamente se determinaba la disminución de un 50 por ciento a partir del tercer mes. Se establece asimismo, que esta pérdida de capital no debe ser imputada a pérdidas en las liquidaciones de impuesto a las ganancias, no generando intereses. Las discusiones sobre este punto entran en el marco de la Dirección General Impositiva y los reclamos deben ser formulados al Tribunal Fiscal de la Nación.

Las boletas de depósito pueden ser cambiadas a solicitud de los interesados por un documento especial nominativo, que puede ser transferible, con lo que se convierte potencialmente en un instrumento de crédito.

En forma general, podemos decir que el ahorro obligatorio se establece en razón de dos aspectos diferenciados: un monto en función de la capacidad de renta y otro monto en razón del patrimonio.

En el caso de que el ahorro obligatorio calculado en función de renta sea inferior a 500 australes, no corresponderá constituirlo. Ahora bien, este importe deberá ser actualizado para el período anual 1989. Todo el ahorro en función de la renta está dispuesto en el capítulo II del título I y se indica que están obligados a cumplir este sistema de ahorro, las personas físicas con domicilio en el país, las sucesiones indivisas, las sociedades anónimas, las en comanditas por acciones, las asociaciones civiles y fundaciones en aquellas operaciones que son imposables para el impuesto a las ganancias, las sociedades de economía mixta en la parte que no están eximidas del impuesto a las ganancias, las empresas del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 22.016, y los establecimientos comerciales e industriales de capital extranjero que funcionen en el país.

La capacidad de ahorro de los que están involucrados en la obligatoriedad del sistema debe establecerse, sin prueba en contrario, sobre la base de las liquidaciones del impuesto a las ganancias indicadas en los formularios correspondientes a los años 1986 y 1987 para las personas físicas, a los efectos de hacer los depósitos correspondientes para 1988 y 1989, respectivamente. Para los demás obligados —personas ideales y fundaciones— el cálculo debe hacerse en razón de los ejercicios fiscales cerrados desde octubre de 1986 hasta septiembre de 1987 para la liquidación del impuesto de 1988, y de octubre de 1987 a septiembre de 1988, cuando deba depositarse el año próximo el ahorro forzoso.

Para determinar la capacidad de ahorro con respecto a la respectiva liquidación de ganancias, hay algunos conceptos que están eximidos en la ley orgánica para determinar el impuesto a las ganancias y que ahora se incluyen.

Algunas de las que eran exenciones en esa ley se incluyen en esta iniciativa. Así, deberá adicionarse en la liquidación de impuesto a las ganancias todo aquello que signifique intereses del ahorro común y especial, plazos fijos, el mercado de aceptaciones bancarias, los derechos de autor, la renta de títulos públicos, la dieta de los legisladores y, además, las rentas exentas, desgravaciones y franquicias establecidas en normas de promoción.

Entonces, la metodología para su aplicación está dada fundamentalmente por la del impuesto a las ganancias. Así, una vez determinado el monto tal cual como si se liquidara ese impuesto, la alícuota que debe aplicarse a efectos del ahorro respectivo es equivalente al 40 por ciento de la que le hubiere correspondido en el impuesto a las ganancias.

En el capítulo III se establecen las condiciones para determinar el ahorro obligatorio en función de los capitales y del patrimonio neto. Según estas condiciones, están obligadas tanto las personas de existencia ideal como las físicas, y las cooperativas.

Para estas personas corresponderá la metodología que se aplicaba para las personas ideales en el impuesto a los capitales, para las personas físicas en la ley de patrimonio neto, y para las cooperativas en la ley 23.427 de fondo especial para cooperativas.

En el artículo 18 se establece una presunción, sin admitir prueba en contrario, de que la capacidad de ahorro corresponderá a la liquidación del impuesto a los capitales, para las personas ideales, desde luego. Pero deben hacerse algunos ajustes. En las leyes de impuesto sobre

los capitales se excluyen los bienes en la Tierra del Fuego y los regímenes de promoción industrial. Pero a efectos de determinar este ahorro estos bienes se incluyen en cada una de las liquidaciones que deben formularse.

¿Cómo se calcula el depósito que debe hacerse para ahorro en razón del patrimonio? Una vez hecha la liquidación tal como se ha explicado, debe aplicarse la alícuota de la ley de capitales, que es del 1,5 por ciento, superando el mínimo, que en este momento está alrededor de los 400 australes.

Se calcula la actualización en función del mes anterior a aquel en que hay que abonar el importe, y sobre ella se determina el 40 por ciento.

La determinación de la capacidad de ahorro de las cooperativas (artículos 20, 21 y 22) se basa en la liquidación del fondo cooperativo, sumándose también los bienes en la Tierra del Fuego y los bienes exentos en los regímenes de promoción industrial. La alícuota también es del 1,5 por ciento, y sobre el resultado se aplica el 40 por ciento para determinar el monto a ahorrar.

Según los artículos 23, 24 y 25 del proyecto, en el supuesto de las personas físicas, la liquidación del impuesto se debe practicar sobre el patrimonio neto. De la misma manera como se hace en los otros casos, se deben efectuar los ajustes que se consideren y que están determinados específicamente en el proyecto. Para abonar el ahorro obligatorio del año 1988, deberá basarse en la liquidación ya presentada del ejercicio 1986 y para el caso del año 1989, corresponderá tener en cuenta la liquidación que se presentará por el ejercicio 1987. Sobre el ajuste realizado corresponde la aplicación de la alícuota del 40 por ciento de lo que correspondería en el impuesto al patrimonio neto.

Se pueden realizar algunas exclusiones en razón de circunstancias especiales. Pero este caso especial de exclusiones para las personas ideales o las físicas, solamente cabe cuando resulte probada por el contribuyente la circunstancia de un desempleo y de una pérdida superior al 80 por ciento del capital o, prácticamente, la quiebra de la empresa, o en el supuesto del concurso civil de la persona física.

El artículo 27 del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a efectuar el reintegro hasta en 8 trimestres.

En el artículo 28 se dispone que la Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto y su metodología de acción se desarro-

llará de acuerdo con los términos de la ley 11.683.

Con estas consideraciones generales, con algunas modificaciones con respecto al ahorro obligatorio anteriormente votado, queda establecido este resorte transitorio para la aplicación circunstancial con el objetivo indicado en el mensaje relativo al cierre de las cuentas fiscales.

En el título II se trata otro asunto totalmente distinto relativo a la modificación del impuesto sobre los débitos bancarios. Este impuesto también es transitorio y se establece hasta el 31 de diciembre de 1992. Se refiere a los débitos en cuentas corrientes, a la vista, en cajas de crédito y en cheques postales de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

El cargo de este impuesto será exclusivo para el titular de la cuenta bancaria, la retención estará a cargo de las entidades financieras y el depósito se efectuará a favor de la Dirección General Impositiva.

Se establece una alícuota general del 7 por mil, pero se estipulan algunas excepciones. Por ejemplo, se reduce la alícuota al 1 por mil en razón del giro de los negocios o la metodología del trabajo de la empresa respectiva, cuando hace uso intensivo de los cheques y percibe porcentaje pequeño en las intermediaciones en que actúa, es decir, en las comisiones y utilidades. En este sentido están incluidos los corredores y comisionistas de cereales, los consignatarios de ganado, los agentes de bolsa, los corredores y agentes de cambio, los agentes de mercado abierto y los expendedores de combustibles líquidos con precios oficiales de venta.

Con inteligencia, en la Cámara de Diputados se incluyó un párrafo por el que se faculta al Poder Ejecutivo a considerar algún otro tipo de actividades semejantes en las que también corresponda aplicar esta alícuota del 1 por mil.

Se establece también una alícuota especial del 2 por mil para ciertos casos, fundamentalmente para las entidades cooperativas.

Se establece también quiénes estarán exentos de este mecanismo y en tal sentido se mencionan los débitos de las cuentas de los Estados, nacional, provinciales y municipales, las misiones diplomáticas y consulares, a condición de reciprocidad y a las entidades reconocidas como exentas y que ya están indicadas en el impuesto a las ganancias, en los incisos e), f) y g) del artículo 20, como las mutuales o las entidades sin fines de lucro, las personas jurídicas de la ley 23.298, ley orgánica de los partidos políticos —este último elemento fue introducido

por la Cámara de Diputados, dado que de no haber sido considerada específicamente la exención, podría interpretarse que también corresponde por parte de la entidad bancaria la disminución del porcentaje respectivo—; los débitos por error, desde luego, y las operaciones del Banco Central con las entidades financieras.

Quedan también exentos del pago los débitos por unidad de movimiento inferiores a 5 australes.

Debemos aclarar que del 7 por mil corresponde considerar el 70 por ciento a cuenta del impuesto a las ganancias. O sea que queda como impuesto neto nada más que el 30 por ciento de la retención que se practica, lo que es escasamente superior a lo establecido por la ley vigente.

Para los casos en que debe aplicarse una alícuota del uno por mil, se considera el ciento por ciento a cuenta del impuesto. Para el caso de la alícuota del 2 por mil, no se procede de la misma forma por tratarse de cooperativas y de algunas entidades del Estado que de hecho no pagan impuesto a las ganancias.

También para esta norma se ha previsto un artículo especial por el cual el Poder Ejecutivo tiene la atribución en todos los casos de rebajar al 50 por ciento la alícuota de que se trate.

En el título III se considera la modificación de la ley de impuesto a las ganancias.

Uno de los aspectos más importantes y que realmente va a tener una significación en la recaudación del impuesto para los ejercicios siguientes, es la suspensión por dos años —es decir, transitoriamente— de la deducción de los quebrantos impositivos.

Desde luego esta modificación tendrá vigencia para los ejercicios que cierran a partir de la fecha en que la norma esté vigente. A partir del tercer año inclusive, se va a deducir ya en forma definitiva, exclusivamente, el 50 por ciento de los quebrantos impositivos. Quiere decir que a partir del tercer año se tendrá que pagar el 50 por ciento de lo obtenido en ese año porque no va a ser posible disminuir mayor importe por los quebrantos anteriores.

Hay algunos otros temas complementarios que hacen al tratamiento y la forma como deben considerarse en el impuesto a las ganancias aspectos que hacen al seguro de retiro privado, a las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, por capital o renta por causas de muerte.

Se trata de aclarar estos aspectos y también se disponen modificaciones a los mínimos impositivos. A partir de la aplicación de esta ley el contribuyente con una familia tipo podrá

deducir 2.750 australes y el soltero 1.700 australes. Es decir que se fijan importes mayores, desde luego actualizables de acuerdo con las disposiciones legales y a través de la Dirección General Impositiva.

Se han previsto también modificaciones en la escala progresiva y la alícuota de base.

El título IV comprende las modificaciones de la ley 11.683, texto ordenado de 1978, conocido como ley de procedimiento fiscal. Los cambios propuestos están referidos a aspectos específicos, fundamentalmente en lo que respecta a los anticipos de pagos para los distintos impuestos cuando las leyes así lo determinen, y que podrán ser determinados y exigidos por la DGI.

El título V introduce reformas a las disposiciones que originariamente regían para el instituto del cheque en el Código de Comercio, con las modificaciones introducidas por el decreto 4.776/63, ratificado por ley 16.478.

En general, podemos decir que se suprime, fundamentalmente, el mecanismo de los endosos, se divide la mecánica según se trata —en valores actualizados a posteriori por la Secretaría de Hacienda—, de cheques de más de 700 australes y de menos de esa cifra. Los primeros deberán ser siempre nominativos y los segundos podrán ser nominativos o al portador.

La diferencia es tal que los que están librados al portador servirán para pago exclusivo en el banco a quien ejerza su tenencia, pero no deberá figurar al dorso ningún endoso. Mientras que en el caso de que sean nominativos, para transferirlos deberán jugar las disposiciones propias de la transferencia de valores o de créditos, de acuerdo a lo que marca el Código Civil.

En el título VI se proponen modificaciones a la Ley de Impuestos Internos. Hemos dicho que esto era una inclusión permanente, pero con afectación específica, por cuanto toda su recaudación debe ir a formar la caja para alimentar el servicio de previsión social en el orden nacional y provincial, de acuerdo con algunas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Desde luego, éste fue uno de los temas que más se consideró, trató e informó por parte de todos los integrantes de la Cámara de Diputados, a los efectos de encontrar caminos ciertos que permitan no sólo agilizar la recaudación sino facilitarla en términos de porcentajes. Esto se aplica, fundamentalmente, para las motonaftas, alconaftas y el querosén. Es decir, los combustibles de ese nivel estarán gravados con impuesto interno, con un 24 por ciento de alícuota sobre sus respectivos precios.

En el caso del gas oil, diésel oil y fueloil se aplica una alícuota del 17 por ciento, por las características propias del uso a que son destinados estos combustibles.

Por otra parte, se excluyen taxativamente los combustibles nombrados en el artículo 11 de la ley 17.597; es decir, los que se utilizan para la exportación y para el consumo de los barcos de pesca. Pero, fundamentalmente, interesa el problema de las exportaciones.

Además, implícitamente se considera excluido el denominado JPI, que es el combustible mezcla de alcohol y querosén, que utiliza la aviación comercial. Precisamente, porque es un combustible combinado no figura incluido dentro de este detalle. Pero sí lo está la alconafta, que también es un combustible mezcla de nafta y alcohol.

La aeronafta no figura explícitamente determinada porque tiene un régimen especial, su precio es el mismo que el de las motonaftas, pero la diferencia impositiva va a formar parte de un fondo específico para la promoción de la aviación civil.

También queda gravada la facturación por la distribución de la red de gas en un 17 por ciento.

Finaliza esta imposición aplicando un impuesto de un 24 por ciento sobre los pulsos telefónicos, según las respectivas facturaciones.

Es necesario mencionar, de acuerdo con una acotación formulada por el diputado Martínez Márquez —presente en esta sala—, la separación del 90 por ciento del fondo constituido para atender la financiación del Sistema Nacional de Previsión Social y del 10 por ciento restante para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un pronoteco formado conforme a la nómina de jubilados de cada una de estas jurisdicciones.

Cabe aclarar que este fondo total, creado a través de estos impuestos, no está afectado con el porcentaje de disposiciones de leyes anteriores para el INOS, es decir, para el Instituto Nacional de Obra Social, como el caso de la ley 19.032.

En el título VII se propone la modificación de las disposiciones de la ley de ahorro obligatorio número 23.256, para hacerlo equitativo con respecto a las nuevas disposiciones vigentes. En la ley anterior se aplicaba el interés común de la caja de ahorros, con una capitalización anual, en tanto en las disposiciones del presente proyecto se hace en razón de una capitalización mensual. Pareció equitativo que se reformaran los aspec-

tos parciales de esa ley a los efectos de equilibrar las bondades de esta nueva disposición.

El título VIII fue también incorporado en la Cámara de Diputados y trata los precios diferenciales de combustibles. Es una diferenciación geográfica en razón de situaciones económicas especiales. Dentro de los noventa días, la Secretaría de Energía deberá fijar los precios finales, una vez aplicado el impuesto de acuerdo con esta disposición, que tiene en cuenta —como dije— las circunstancias económicas de cada región del país.

En el título IX hay modificaciones a la ley de impuesto a los beneficios eventuales. Se trata exclusivamente de determinar que las transferencias de acciones a través del mercado de valores, quedan exentas, a los efectos de un tratamiento mejor y más equitativo del pago de los beneficios eventuales. Se considera como pago definitivo el 0,5 por mil.

En cuanto al título X, establece el momento a partir del cual tendrán efecto las disposiciones contenidas en el proyecto. Como son tantas, es necesario especificar ya que varía de uno a otro caso.

Este proyecto, al que hemos llamado "ley omnibus", tiene una especial significación en cuanto al equilibrio del presupuesto para 1988 pues importa 2.500 millones de australes para cuentas fiscales y 3.900 millones para el sistema de previsión nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Amoedo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Está en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: conforme con la distribución de tareas que hemos realizado con el senador Romero Feris traigo a este acto la representación del Partido Autonomista y del Partido Liberal.

Iniciamos hoy la consideración conjunta del paquete de medidas impositivas y ya lo hemos hecho con respecto a la coparticipación federal. Debo confesar, señor presidente, que no puedo menos que unir ambos temas. Ello hace que lleguemos nosotros a esta discusión con un ánimo que no resulta muy grato.

Ya el señor senador Romero Feris explicó los motivos de nuestra disidencia en materia de coparticipación impositiva, no porque estemos en desacuerdo con que se estructure definitiva e institucionalmente el manejo de los fondos de coparticipación sino en razón de las circunstancias que fueron la génesis de la ley que votamos.

De la misma manera podría decir, señor presidente, que no es muy grato al ánimo con que llegamos a esta discusión en cuanto a los proyectos de ley que seguramente serán sancionados en el curso de esta noche, porque tengo la impresión de que, frente a las urgencias que se invocan, nuestra Cámara —por lo menos yo me siento así— parece haberse convertido en un convidado de piedra. Así, parece que estuviéramos firmando lo que los abogados conocemos como un contrato de adhesión y no sancionando una norma legal que, sobre todo cuando ella tiene la trascendencia de esta que hoy examinamos, debería ser el producto de un maduro análisis, de una discusión cierta que permitiera introducir las modificaciones que resultaran de un debate lúcido que, sin duda alguna, podrá producirse pero no va a tener ningún efecto en cuanto a la alteración de las normas que hoy se van a sancionar.

Acá, señor presidente, no podemos menos que dejar de referirnos a un personaje siniestro que está dominando el tema que nosotros vamos a tratar, y que es la inflación. Este es un flagelo que está acentuado en nuestra economía, un mal que, por la alta tasa que está exhibiendo en este momento, origina conflictos sectoriales, trae descontento social, impide el ahorro genuino y no deja que se fortalezca la moneda que, en todas las naciones que tienen sanidad económica, constituye un verdadero atributo de la soberanía, del que lamentablemente hoy nosotros no podemos gozar.

¿Cuál es, entre todas las causas que históricamente se mencionan, aquellas que generan la inflación? Creo que nadie puede dudar de que es el déficit fiscal.

Precisamente ayer, leyendo diarios brasileños, vi una noticia que se daba con motivo de la asunción de un nuevo ministro de Hacienda. Este explicó que su principal preocupación, producto a su vez de la preocupación del presidente Sarney, iba a ser la de atacar frontalmente a la inflación equilibrando el déficit fiscal como un deber primario que iba a impulsar su cometido.

¿Cómo subsanar esta causa que genera la inflación, que es el déficit fiscal? Por supuesto que hay distintas maneras de hacerlo y se han ensayado en el curso de la historia en diferentes países.

Algunas veces se acude irresponsablemente a la emisión monetaria, que tiene un efecto pernicioso y que no lleva a buen puerto.

Descartada esta acción, que yo calificaría de suicida, de corto vuelo y malos efectos, quedaría como otro arbitrio a tomar el de la reduc-

ción del gasto. Esta medida sí va en la buena senda, y esto ha sido esbozado y proclamado desde las más altas esferas del poder, aunque lamentablemente no siempre los hechos han coincidido con las palabras y los resultados no han sido buenos.

Reconozco, señor presidente, que cuando se habla de desmonopolización de los servicios y de desregulación se está poniendo el dedo en la llaga, se está apuntando hacia algo que, sin duda alguna, de practicarse bien, traerá buenos resultados. Pero una cosa son los decretos, como el que se ha dictado seguramente con muy buena intención, y otra cosa diferente es la necesidad que existe de sancionar normas legales que den viabilidad y eficacia a esos proyectos que tienden a reducir el déficit fiscal.

Nosotros, los senadores por Corrientes, así como seremos inflexibles en criticar todo aquello que entendamos que no es conveniente para la salud económica del país ni para la justicia de las relaciones entre la Nación y las provincias, tampoco vamos a ser renuentes a prestar nuestro decidido apoyo a todo aquello que contribuya a sanear nuestra economía.

Creo en estas medidas, y esa voluntad política nos corresponde exhibirla a todos; en primer lugar, a los que están en el gobierno, y también a los que estamos en una sana oposición, para contribuir a rehacer la maltrecha economía del país.

Pero descarto esta reducción de gastos que hasta ahora se presta a un doble discurso. Hay buenas intenciones, pero no son acompañadas hasta el momento con la efectividad de los hechos. Deseo que esta expectativa frente a enunciados sea coronada con éxito, descontando que todos los señores senadores le vamos a prestar el apoyo si ello se pone en práctica.

¿Cuál es hasta el momento el arbitrio que se ha usado para solucionar ese déficit fiscal? El arbitrio al que se ha apelado es lisa y llanamente el de incrementar la recaudación impositiva, con lo cual estamos dando un nuevo golpe de tuerca que pesa muy severamente sobre los hombros de los sufridos contribuyentes.

Diría, señor presidente, que son justas las críticas que se hacen y las advertencias que se han lanzado aquí y en todas partes, pero especialmente aquí, cuando se sostiene, a mi juicio con razón, que para equilibrar las cuentas fiscales tendríamos que apelar a una vigorosa tarea que impida una crecida evasión fiscal. La existencia de esta evasión fiscal ha sido reconocida incluso por el propio secretario de Es-

tado de Hacienda con frases y cantidades que resultan alarmantes. Voy a respetar a mis estimados colegas no sometiéndolos a la lectura, aunque tengo los elementos. Nos muestran que si frenáramos esa evasión, si la modificásemos por lo menos, podríamos no solamente traer recursos insospechables a las finanzas públicas, sino que también evitaríamos la injusticia que se va a cometer nuevamente con estos impuestos que están en consideración del Honorable Senado, que hacen que las cargas cada vez más crecientes recaigan sobre un reducido número de contribuyentes, con los perniciosos efectos que ello trae para la actividad económica.

Pagan siempre los mismos pero pagan más; son aquellos que no pueden eludir por diversas razones el pago de los impuestos, con lo cual estamos tendiendo a un agotamiento de la capacidad de los contribuyentes.

El impuesto, señor presidente, no debe ser solamente un arbitrio de tipo recaudatorio con un fin exclusivamente fiscalista. El impuesto es también una medida de gobierno que bien utilizada, bien inducida, bien dirigida, debe evitar la falta de motivación de las fuerzas económicas y productivas del país. Por el contrario, un impuesto que motive la actividad económica será también el mejor instrumento para la reactivación de la economía y para la creación de fuentes de trabajo sobre la base de una reinversión que facilite la incorporación de tecnología y mayor eficiencia por parte de nuestras industrias y empresas, de modo que puedan salir a competir internacionalmente con precios adecuados. Así haremos crecer los recursos de la Nación y la sacaremos de la postración en que se encuentra. No necesito citar, por ser demasiado conocidas, las motivaciones que provocaron la actividad productiva del Japón y de otros países del sudeste asiático, que son realmente el asombro del mundo por la forma tremenda en que han aumentado sus inversiones y exportaciones.

Señor presidente: el Estado tiene deberes pero ellos no deben hacer que pretenda solucionar sus urgencias económicas exclusivamente a través de exacciones crecientes desde el punto de vista impositivo sino que, por el contrario, tiene la obligación de dar seguridad jurídica y de respetar los derechos adquiridos de los contribuyentes, lo que lamentablemente no ocurre con algunas normas que sin duda habrá de sancionar el Senado esta noche. Esta situación anuncia crecidas y contundentes reclamaciones judiciales a las cuales seguramente la Justicia habrá de respaldar.

El país es de todos y entre todos debemos hacer que el Estado no solamente goce de la estabilidad necesaria que reclamamos sino que también merezca la credibilidad suficiente, evitando acciones como las que acabo de mencionar.

Hace un mes asistimos realmente con satisfacción a los anuncios optimistas que se derivaban del convenio concertado con Italia, por medio del cual se asegura —deseo muy sinceramente que así ocurra— una crecida corriente de inversiones que traerá beneficiosos efectos a nuestra economía. Sin embargo, cabe aclarar que ese acuerdo es sólo un convenio-marco y que para dinamizarlo van a ser necesarios empresarios de carne y hueso, que tengan confianza en nuestra economía y no se vean ahuyentados por una inflación creciente y una puja sectorial cada vez más aguda, en medio de una voracidad fiscal que constituye el signo distintivo de la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Por estas razones, señor presidente, y con estas consideraciones generales, sintetizando así las diversas disidencias que tenemos con estos proyectos, interpreto que han quedado traducidas nuestras opiniones respecto de las iniciativas que estamos tratando.

Ahora vamos a analizar algunas de las normas legales que han venido a nuestra consideración. Empezaremos por una que merece nuestras mayores y totales objeciones; me refiero a la renovación del régimen de ahorro forzoso, cuya primera sanción legal fue en 1985 a través de la ley 23.526.

Este proyecto no tiene mayores diferencias respecto del anterior, salvo algunos puntos. Se mantiene el reintegro del capital a los 60 meses y se determina que el interés que se pagará será el que se concede en los depósitos comunes de la Caja de Ahorro y Seguro. Yo diría que hay dos cambios fundamentales: uno se refiere al aumento de la tasa, que pasa del 30 al 40 por ciento para el caso de las sociedades y para aquellos establecimientos que adopten la forma de empresa; el otro cambio está vinculado con la capitalización mensual de los intereses en lugar de la capitalización anual.

Me voy a permitir leer lo que expresaba el mensaje del Poder Ejecutivo oportunamente, cuando enviara el proyecto al Congreso en 1985. Señalaba que este proyecto "se inserta dentro de la política antiinflacionaria que el gobierno lleva a cabo, uno de cuyos objetivos centrales es la reducción del déficit fiscal.

"El esfuerzo dirigido a reducir los gastos del sector público se complementa con la captación

de recursos genuinos, necesarios para lograr el equilibrio fiscal."

Por su parte, el miembro informante de la comisión expresó que los objetivos que persigue este proyecto "están enmarcados en la realidad económica que le toca vivir a la República y forman parte del paquete de medidas económicas adoptadas a mediados de junio por el Poder Ejecutivo con el objeto fundamental de combatir y erradicar uno de los mayores males de la economía argentina, como es el problema de la inflación".

Pasaron dos años y ahora, nuevamente, se nos envía otro paquete impositivo que sin duda alguna nos revela que los objetivos mencionados en 1985 no se alcanzaron.

Este es un elemento fundamental que origina la posición de nuestro bloque. Con todo patriotismo, con la mejor buena fe, con la mayor esperanza, acompañamos en ese momento —me refiero a los señores senadores que en ese entonces representaban a Corrientes— la sanción de la primigenia ley. Pero hoy las circunstancias no son las mismas.

Se vuelve a invocar una urgencia económica, una circunstancia especial que nos muestra que lo que era extraordinario ayer hoy se pretende convertir en ordinario. Y eso nos obliga a variar nuestra posición.

Por otra parte, el miembro informante del proyecto en el Senado manifestó: "Se trata de un crédito que otorgan determinadas personas físicas y jurídicas de la sociedad argentina a raíz de la situación de emergencia por la que está atravesando el país, que será devuelto en un plazo determinado. Y pongo énfasis en estas últimas palabras para disipar algunos comentarios en el sentido de que se trata de un impuesto más". Así dijo el miembro informante, y me referiré más adelante a esta circunstancia.

Y agregó: "...lo que se pretende fundamentalmente es captar fondos para aplicarlos al presupuesto de la Nación de los años 1985 y 1986. Es decir, se procura destinar fondos para los años que se consideran claves a los efectos de provocar un punto de inflexión que nos lleve a un desarrollo sostenido y recrear toda la economía saliendo de las angustias inmediatas que estamos padeciendo".

Es evidente, señor presidente, que los objetivos que entonces se invocaban, las circunstancias que entonces se presentaban como absolutamente inéditas y superables no pueden esgrimirse nuevamente transformando —repito— lo extraordinario en ordinario.

El proyecto que ahora se nos presenta reabre las agudas críticas que en ese momento, de ma-

nera enfática, se hicieron aquí de parte de algunos señores senadores como los señores senadores Amoedo, Martiarena, Saadi, Villada, Menem y Vidal. En realidad, esas críticas hoy son válidas ante este nuevo intento y se basaban en el encuadre constitucional del instituto que se creaba, en su naturaleza jurídica y en la razonabilidad del sistema, porque atacaban y atacan un derecho fundamental como es el de la libertad fiscal.

Me voy a permitir leer lo que menciona en tal sentido el profesor Linares Quintana en su *Tratado de la ciencia del derecho constitucional*, tomo 5, página 177: "La libertad fiscal, aspecto importantísimo de la libertad jurídica e íntimamente vinculada con el derecho de propiedad, ampara al individuo contra toda exigencia pecuniaria del Estado, que, so color del ejercicio del poder impositivo, carezca de causa constitucional, en cuyo caso el tributo, de justificada y democrática contribución de todos y cada uno de los habitantes al sostenimiento del Estado, degenera en exacción y despojo. Si hemos afirmado que la historia del hombre es la historia de su lucha por la libertad, debemos agregar ahora que no pocas páginas de esa historia han sido escritas por el incesante batallar del individuo por la conquista de la libertad fiscal, mediante la institución de las necesarias limitaciones del poder impositivo del Estado."

Es decir, tenemos que hacer este encuadre constitucional y para ello debemos observar la verdadera naturaleza jurídica del instituto que estamos por sancionar nuevamente, para saber si es viable dentro del sistema constitucional argentino.

El sistema constitucional argentino es esencialmente teleológico o finalista. ¿Cuál es el fin de nuestro sistema constitucional? Es repetido, casi un axioma, que dentro de nuestro sistema constitucional el fin último —no el medio— es asegurar la libertad y la dignidad del hombre. El hombre es el fin y no el medio como ocurre con otros sistemas.

Desde luego, eso no significa que el hombre, el ciudadano o el habitante no deba contribuir al sostenimiento del Estado mediante los impuestos. Lo que no puede hacer el Estado es ejercer el poder impositivo de manera irrazonable, limitando así el patrimonio de los individuos.

He mencionado que para saber en qué medida lo que seguramente la Cámara habrá de sancionar nuevamente es viable o puede ser fulminado constitucionalmente, se necesita averiguar cuál es la naturaleza jurídica del instituto que vamos a aprobar. ¿Es acaso un impuesto?

No, señor presidente; creo que no se puede sostener que sea un impuesto. El impuesto es un gravamen que responde a necesidades generales y que no tiene contraprestaciones individualizadas.

En este sentido recuerdo y enfatizo las expresiones del miembro informante, en palabras que acabo de recordar, cuando descalificó a aquellos que sostenían que éste era un impuesto más, afirmando categóricamente que no se trataba de un tributo. Yo coincido en que efectivamente no es un impuesto, porque éstos no tienen una contraprestación efectiva sino que solamente son establecidos para atender necesidades genéricas.

Aquí, por el contrario, existe una contraprestación específica: es el reintegro de lo que los particulares aportan con un interés. Entonces, si no es un impuesto, ¿podrá ser acaso un empréstito? Creo que tampoco es un empréstito en la forma típica en que existe en doctrina. El empréstito es una oferta que hace el Estado con determinadas condiciones de reintegro y con ciertos premios en materia de intereses o de exenciones, que los particulares suscriben voluntariamente. Pero aquí, evidentemente, no podemos afirmar que se trata de un empréstito ya que no es un acto voluntario del particular que responde a esa oferta del Estado.

Nos encontramos, entonces, ante un procedimiento anómalo y un procedimiento que se va acercando a un empréstito forzoso, instituto que no está permitido por la Constitución Nacional ni en el artículo 4º ni en el 67, inciso 3º. Sin duda alguna, de insistirse en ello, se lesionará la tutela jurídica que presta al patrimonio el artículo 17.

Me adelanto, de esta manera, a las críticas o a las objeciones que puedan realizarse con respecto a esta tutela sobre el derecho de propiedad que establece el artículo 17.

Se me podrá decir —y yo coincido— que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto sino que —conforme a lo que establece la propia Constitución Nacional— está sujeto a la reglamentación que se establezca legalmente.

Pero digo también, señor presidente, que el artículo 28 de nuestra Constitución prohíbe al Congreso de la Nación el dictado de leyes que, por vía reglamentaria, alteren la esencia misma de los derechos.

Evidentemente, el tema que nos ocupa, no consiste en un ejercicio voluntario del derecho sino de un acto de imposición realizado por el Estado que afecta, sin duda alguna, la órbita patrimonial de los individuos.

En doctrina existen limitaciones al derecho de propiedad así como también las hay en la propia letra de la Constitución. ¿Cuáles son esas limitaciones? La primera estaría dada por la expropiación. Al respecto, creo que nadie puede sostener realmente que este instituto esté dentro de los cánones o de los presupuestos que la Constitución Nacional establece para darle legitimidad a la expropiación.

El proyecto de ley en debate constituye un caso completamente distinto. Podría ser en todo caso una verdadera requisición. También la Constitución Nacional en su artículo 17 prohíbe las requisiciones que puedan ejercer los grupos armados exigiendo auxilios que constitucionalmente son inválidos.

Joaquín V. González, en su *Manual de derecho constitucional*, nos explica el porqué de esa prohibición de tipo constitucional, diciendo que se origina en la trágica experiencia de nuestra historia de luchas civiles y de disensiones, donde en más de una ocasión en un bando o en el otro, grupos armados establecían este tipo de requisiciones al margen de las normas legales o de la acción de los tribunales.

Linares Quintana nos dice, sin embargo, que en ciertos casos la requisición puede hacerse. No voy a leer la parte pertinente para no extender en demasía mi exposición y para no fatigar a mis distinguidos colegas. Pero los presupuestos que en materia de requisición establece Linares Quintana son distintos de los que estamos contemplando en el instituto que ahora examinamos.

Este tratadista se refiere a la requisición que se hace en tiempo de guerra cuando, por razones de necesidad general, pueden tomarse determinados bienes para evitar el peligro, para asegurar el éxito de las operaciones bélicas y, desde luego, sometiéndose a lo que es fundamental: a que el Estado preste, conceda o pague una indemnización adecuada que evite el daño patrimonial. Pero aquí no se da ese caso.

En primer lugar, no podemos invocar un estado de guerra y, en segundo lugar, no se trata de operaciones militares ni hay, pues, un conflicto bélico.

Entonces, ¿qué argumento podría darse —o se ha dado, incluso— para justificar esto? Yo escuché por ahí, en alguno de los argumentos que se dieron en la discusión sobre la constitucionalidad del instituto que estamos examinando, lo que algunos sostuvieron en el sentido de que podría tratarse de una requisición civil. En ese sentido, invocaron la opinión muy prestigio-

sa del doctor Marienhoff, un jurista de gran sapiencia e integridad —sin duda alguna—, a quien le rindo mi más sincero y justiciero homenaje.

Y esa mención que alguien hizo sobre la opinión del doctor Marienhoff provocó mi curiosidad y fue por ello que fui a consultar su *Tratado de derecho administrativo*. Efectivamente Marienhoff acepta la existencia de requisiciones civiles —tengo el tratado en mis manos; no obstante, no cansaré a mis colegas leyendo los supuestos múltiples que Marienhoff analiza— pero en ninguno de sus supuestos encontré algo que pudiera acomodarse al instituto de naturaleza jurídica que estamos examinando en este momento.

Se trata —en la generalidad de los casos— de situaciones súbitas, imprevisibles. Inclusive, en algunos de los casos que cita a Marienhoff para requisiciones civiles se trata de aspectos referidos a la defensa. Y aquí no estamos ante una emergencia, como sucediera en 1985. En consecuencia, no se trata de una requisición civil. Es, verdaderamente, una confiscación parcial por el daño patrimonial existente.

Prosiguiendo con Marienhoff debo recordar, para alejar cualquier duda que pudiera existir en el sentido de que esto está prohibido en su libro, que dicho autor unas páginas más adelante detalla una serie de requisitos para que pudiera efectuarse una requisición civil. Entre esos requisitos figuran el de la utilidad pública, en un caso y, en otros, una serie de requisitos formales. También se menciona una adecuada indemnización.

Evidentemente, aquí no se presentan esos supuestos, por lo cual descarto que la opinión de Marienhoff pueda ser dada como fundamento de la institución que estamos discutiendo.

En realidad, existen a mi juicio varias causas que tornan inconstitucional el tributo que es materia de consideración de este Honorable Senado. En primer lugar, porque carece de una causa constitucional, debido a su irrazonabilidad. No se aprecia cuáles son las necesidades genéricas para adoptar este procedimiento, verdaderamente extraordinario.

Tampoco puede invocarse la circunstancia existente en 1985, la emergencia que en este entonces se presentó como fundamento de este aporte extraordinario de los contribuyentes. Yo diría que podríamos preguntar cuál fue el destino de los fondos aprobados en 1985, y cuál será el destino de los fondos que ahora se van a votar y qué seguridad tenemos de que dentro de dos años no volvamos nuevamente a re-

petir este procedimiento en el que lo extraordinario se convierte en ordinario contra principios de nuestra propia Constitución.

En segundo lugar, no se prevé una indemnización apropiada, acercándonos al riesgo de una amenaza de confiscación. Como en toda requisición de dinero —que esto sería, sin duda alguna— no puede hacerse si no es bajo cierta condición inexcusable: la de devolver exactamente la cantidad sin que en la devolución se irroque el menor perjuicio patrimonial a los particulares. Y digo que en ese caso no va a ocurrir eso porque quienes reciben el dinero de vuelta no recibirán el mismo poder adquisitivo que obtuvieron. Esto es muy claro; se va a devolver un capital nominal que será erosionado por la inflación creciente y se aplicarán intereses, que de ninguna manera pueden significar, por su exiguo monto, una indemnización adecuada que conserve ese capital que se ha prestado en virtud de este ahorro forzoso, como bien se lo denomina en el proyecto en consideración.

Me animo a decir sin ningún temor que habrá una verdadera confiscación sobre parte del dinero que se haya oblado en carácter de ahorro. Es decir, existe una lesión al derecho patrimonial que ha sido fulminado, condenado, por la jurisprudencia de la Corte Suprema en casos como, por ejemplo, el de "Valdez", el de "Díaz Morales" y el de "Vieytes de Fernández".

En tercer lugar, vulnera el principio de los derechos adquiridos al establecer con efecto retroactivo una restricción al derecho de propiedad. Aquí se presume la renta y se presume el patrimonio. Por lo tanto, se aplican impuestos sobre la base del ejercicio fiscal de 1986. Es decir, dado su carácter compulsivo y las variaciones patrimoniales que por encima de la presunción existen y existirán inevitablemente, se lesionan derechos adquiridos por contribuyentes que cumplieron cabalmente con su obligación fiscal.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Cómo no.

Sr. Solari Yrigoyen. — Yo respeto todas las consideraciones que usted ha hecho, muchas de las cuales son jurídicamente válidas. Pero, por lo pronto, quisiera decirle que el proyecto de ley no habla de ahorro forzoso sino de ahorro obligatorio.

Sr. Aguirre Lanari. — No creo que haya mucha diferencia.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pero como usted dijo que la ley lo mencionaba... Si hubiera dicho que popularmente se habla de ahorro forzoso,

le encontraría razón porque en la calle se lo llama así, pero el proyecto, en su Título I...

Sr. Aguirre Lanari. — La calle tiene bastante intuición, sin duda alguna, para hacer la calificación.

Sr. Solari Yrigoyen. — Voy a ser muy breve para terminar con esta gentil interrupción que me ha concedido.

El reintegro de las sumas ahorradas se realizará el día que se cumplan sesenta meses. Estoy de acuerdo con usted en que no es un ahorro beneficioso para los ahorristas. Pero hay que tener en cuenta que se fija un interés, que es el mismo que rige para los depósitos en caja de ahorro común de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y que además los intereses se capitalizarán por períodos mensuales, lo cual es también una ventaja, como es otra el que estarán exentos del impuesto a las ganancias.

Y hay otra consideración especial, que es la que hace el artículo 10, sobre la posibilidad de que las constancias de los depósitos que se entregarán a los contribuyentes se conviertan en un instrumento de crédito.

No quiero destruir, señor senador, sus válidos argumentos en el sentido de que éste no es un buen ahorro para inversionistas. Desde ya que desde este punto de vista usted tiene razón, pero quiero poner en la balanza también los aspectos favorables a este ahorro obligatorio que, en alguna medida, menguan o disminuyen notablemente las críticas que usted le ha efectuado.

Este ahorro obligatorio se basa verdaderamente en una situación de crisis, en un déficit fiscal que no es el único motor de la inflación pero posiblemente sea el principal, todo lo cual determina un marco al cual nosotros no podemos permanecer ajenos.

Es decir que hay dos posibilidades: o seguimos con una inflación galopante, al borde de la hiperinflación, o tomamos algunas medidas para evitarla; entre ellas, las fundamentales son las que se refieren a frenar el incremento notable del déficit fiscal.

Valoro muchísimo las críticas que, con un sentido constructivo, ha hecho el señor senador por Corrientes; pero también valoraría mucho más que se ofrecieran alternativas. En este sentido, me gustaría que se dijera que estas medidas no son las adecuadas pero que estamos de acuerdo en que hay que combatir la inflación, o que se expresara que estamos de acuerdo en que no hay crecimiento válido si no es con cierta o mínima estabilidad monetaria y que para lograrlo, en lugar de las medidas que

propone el Poder Ejecutivo, proponemos tales o cuales, que consideramos mejores.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Le agradezco mucho la intervención al señor senador Solari Yrigoyen, pero me mantengo en lo que dije anteriormente.

Yo he propuesto medidas. Lo que pasa es que, precisamente, en los últimos dos años aparentemente no se ha tenido éxito o no ha habido la voluntad política requerida. No me corresponde entrar a analizar las circunstancias del caso, pero es evidente que la reducción del déficit fiscal no puede promoverse siempre aumentando invariablemente la presión impositiva sino que también debe hacerse un acto de contribución inicial por parte del Estado reduciendo sus gastos.

No quiero entrar en un análisis de tipo político porque no me impulsa en la exposición que estoy haciendo una intención de ese tipo. No quiero entrar al análisis que, sin duda alguna, tendremos que hacer cuando consideremos el presupuesto para saber si se pueden hacer reducciones en el gasto público o no. Lo real es que estamos pretendiendo solucionar el problema aumentando los impuestos, haciendo que lo extraordinario se convierta en ordinario y no dando una respuesta válida que, sin duda alguna, la espera y la necesita todo el pueblo argentino.

He dicho, y lo reitero ahora, que nosotros, los senadores por Corrientes, al igual que ayer, vamos a tener hoy también la voluntad política para acompañar todas aquellas medidas que realmente entendamos que buscan responder al anhelo de todos los senadores aquí presentes, que es el de buscar una instancia más feliz para la República.

Sr. Solari Yrigoyen. — Con la indulgencia del señor senador, ¿me permitiría una última interrupción?

Sr. Aguirre Lanari. — Con todo gusto.

Sr. Solari Yrigoyen. — Estoy de acuerdo con usted en que no sólo hay que aumentar los ingresos sino también hay que bajar el gasto público. En tal sentido, quisiera señalarle que si uno compara 1986 con 1983, advertirá que la caída del gasto público se ubica en torno de los 6 puntos del Producto Bruto Interno, lo cual representa alrededor de 4 mil millones de dólares anuales menos que se gastan hoy en relación con lo que se eroga en 1983.

De manera que el anhelo del señor senador en gran parte se ha hecho realidad porque el gasto público ha bajado. De un nivel del 35 por

ciento ha bajado al 29 por ciento hoy, lo cual es sustancial. Son 6 puntos de un producto bruto de 70.000 millones de dólares aproximadamente. No fue una baja abrupta, sino que ha ido ocurriendo a través de los años 1984, 1985, 1986 y aun 1987.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Le agradezco nuevamente la interrupción y le digo que no quiero entrar a un debate político, porque habría que ver en qué forma está determinado ese gasto público. Pero no quiero entrar en el análisis porque tendríamos que examinar muchas urgencias del Estado, que a todos nos golpean, y seguramente y en primer lugar, al señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — Respeto al señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Voy a analizar este tema recordando la opinión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Horta c/Harguindeguy, donde se estableció que "la ley puede alterar o anular... un derecho en expectativa ya existente, pero no puede modificar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación vigente al momento de su incorporación. En tal caso, la irretróactividad tiene jerarquía constitucional cuando la aplicación de una nueva ley altera algún derecho ya incorporado al patrimonio como consecuencia de la inviolabilidad de la propiedad" (según lo establecen el doctor Linares Quintana y también el profesor Bidart Campos, en su libro "La Corte Suprema").

"Este principio —finaliza— es aplicable en materia fiscal siempre que se trate de derechos legítimamente adquiridos por contribuyente de los cuales pudo disponer libremente. Si bien por una criticable práctica legislativa se ha admitido la aplicación de contribuciones con efecto retroactivo al inicio del año fiscal correspondiente, su instrumentación no puede materializarse superando la cuantificación de la renta y patrimonio correspondiente a los años anteriores al del último año fiscal; así, en el caso Chiesa c/Nación Argentina, la Corte sostuvo que el pago de un gravamen conforme a las disposiciones vigentes, libera de la obligación fiscal al contribuyente que incorpora a su patrimonio un derecho adquirido amparado por el artículo 17 de la Constitución".

Voy a referirme también, señor presidente, a algunos aspectos de la reforma a la ley de impuesto a las ganancias.

En el punto 16 del proyecto, dentro del título III, se incluyen siete artículos que se incorporan como disposiciones transitorias a continua-

ción del artículo 115 de la ley 23.260. En homenaje a la brevedad, voy a omitir su lectura, pero debo decir que estas disposiciones alteran sustancialmente el régimen vigente en materia de compensación de quebrantos impositivos.

Aun cuando, como lo ha expresado el miembro informante en la Cámara de Diputados, dichas disposiciones no derogan sino suspenden el derecho de los contribuyentes para ejercitarlo durante dos ejercicios, los efectos perjudiciales y arbitrarios son indiscutiblemente ciertos.

Considero justificadas las críticas que se han esgrimido sobre las disposiciones en cuestión. Es que, como lo destacara el doctor García Belsunce: "La compensación de los beneficios con los quebrantos responde a la necesidad de ajustar la imposición al ciclo productivo de la empresa y hay autores que admiten la compensación aun cuando las leyes nada indican al respecto."

"Por ello, así lo admite la legislación comparada en general (Francia, 5 años; Italia, 5 años; Brasil, 3 años; Inglaterra, 6 años; y los Estados Unidos, 2 años precedentes o 5 siguientes)".

Yendo al fondo del asunto y sin considerar diversas críticas de índole técnica, lo que resulta claro es que al prohibirse a partir de ahora que se compensen, durante los dos primeros ejercicios fiscales quebrantos de años anteriores, se va a perjudicar notoriamente a los proyectos de inversión, algunos de los cuales correrán el riesgo de ser abandonados. Esto resultará al no admitirse la compensación de los gastos con los ingresos posteriores a la etapa de instalación, la que a veces puede durar dos, tres o varios años más.

Igualmente injusta es la disposición que se proyecta por la que se permite compensar sólo hasta el 50 por ciento de la utilidad del ejercicio con los quebrantos anteriores, a partir del tercer ejercicio cerrado con posterioridad a la vigencia del artículo que se proyecta. Esta última disposición puede significar en muchos casos extender en exceso el plazo requerido para la absorción de los quebrantos.

Creo oportuno señalar, entre otras críticas, lo que ha destacado el informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Sostiene dicha entidad que la modificación proyectada en el tratamiento de los quebrantos impositivos no se compatibiliza con la estructura teórica que adopta un impuesto a la renta, según la doctrina más caracterizada, ni con la legislación comparada ni con la actual tendencia mundial de reducción de tasas en este tipo de gravamen. Todo ello, agrega di-

cho informe, sin perjuicio de las probables acciones judiciales basadas en la inconstitucionalidad de la norma en razón de la conculcación de derechos legítimamente adquiridos por los contribuyentes.

Veamos un ejemplo práctico de lo nocivo y arbitrario que puede resultar la aplicación de las normas proyectadas. Un contribuyente individual o empresa que en tres ejercicios sucesivos no obtiene ganancias o éstas son insignificantes, no paga impuestos o los pagos no son cuantitativamente importantes. En cambio, en emprendimientos donde luego de agotado el capital resulta un quebranto por los elevados gastos que exige la naturaleza de la inversión, durante dos años ellos no son compensables. Durante esos dos años la empresa deberá asumir aquellos quebrantos sin compensarlos y pagar al fisco una ganancia que es ficticia en el contexto real de su situación económica.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, aparte de otras consideraciones, al impedirse la compensación de los quebrantos, se vulnera tanto el principio de igualdad como el derecho de propiedad, ya que el gravamen dejará de ser un impuesto sobre las ganancias para convertirse, en ciertos casos, en un impuesto sobre beneficios o ganancias nominales.

La situación comentada y sus consecuencias jurídicas se agravan en empresas que pueden haber contratado servicios o prestaciones con el Estado, el que a través de disposiciones como éstas vendría a romper una ecuación económica de manera injusta y arbitraria. No es difícil suponer que, de sancionarse estas disposiciones, inspiradas en un propósito meramente fiscalista y contrario a la equidad, el Estado debe soportar cuantiosas demandas, con resultado previsible, con lo que a la postre será el erario, al que se quiere beneficiar, el que soporte las consecuencias de esta absurda disposición. Todo ello sin perjuicio del error de política legislativa en un momento en que se reclama que los empresarios asuman los riesgos en empresas de largo aliento que serán fuente de trabajo y riqueza para el país. Pareciera que, por el contrario, disposiciones como la presente habrán de inducirlos a que se sitúen y se mantengan solamente en políticas más conservadoras, de simple coyuntura, uniformando en la chatura y en el recelo al desenvolvimiento de nuestra economía.

Otra modificación importante es la que deroga el artículo 98 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que autoriza a diferir las ganancias producidas por ajuste por inflación por tres ejercicios, por partes iguales. Sobre el particu-

lar, sucintamente me permitiré leer lo que opina el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal: "La norma actualmente vigente encuentra su fundamento en el principio teórico según el cual las ganancias por inflación no van acompañadas por la disponibilidad financiera para hacer frente al gravamen. La derogación propuesta incidirá negativamente en las empresas más endeudadas y se hace más gravosa aún si se tiene en cuenta la restricción al cómputo de quebrantos, tal como se señalará".

Otra modificación es la de la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se refiere a la tasa que deben abonar las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas. Como comentario diré que coincido también en este caso con lo expresado por la entidad profesional antes citada, que destaca que "en comparación con la escala actualmente vigente, la modificación propuesta en la escala progresiva del gravamen determina una fuerte presión especialmente sobre las rentas medias, que son detenidas por una clase social suficientemente castigada."

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Jorge D. Solana.

Sr. Aguirre Lanari. — Con el proyecto que modifica el régimen del cheque se introduce una nueva limitación a la libertad económica reconocida por el artículo 14 de la Constitución, sin que se adviertan elementos de razonabilidad que justifiquen su reglamentación en los términos del artículo 28 de la Ley Fundamental.

En efecto, no se advierte cuáles son las razones de orden público que justifican esta intromisión estatal en una materia que se ha desarrollado espontáneamente por obra de las costumbres mercantiles, que han sido y son el factor desencadenante del progreso comercial.

Todos sabemos que la circulación es la esencia y fin de los títulos comerciales. Todos conocemos la indudable importancia económica que tiene la circulación de los cheques como consecuencia de su uso continuo.

La finalidad de los títulos comerciales es la circulación, ya que importan la creación de una obligación que circulará para dar vida a los negocios y a la actividad mercantil amparada, en el caso de los cheques, por la seriedad y seguridad que ofrecen las operaciones bancarias.

En igual sentido, en su Código de Comercio Comentado, Raymundo Fernández sostiene que "los títulos de crédito, creados por los usos y

costumbres del comercio y cuya disciplina impuesta por las necesidades de la vida real se ha adelantado siempre a las especulaciones de la doctrina y a la acción del legislador, realizan una gran función económica en la sociedad moderna, pues movilizan los valores facilitando su circulación".

Los antecedentes citados, unidos a nuestras prácticas mercantiles, revelan que no existe una razón valedera para prohibir la circulación de los cheques mediante el endoso.

Se trata de una práctica mercantil sumamente arraigada que no ocasiona perjuicios económicos ni es contraria a la moral o al orden público. Por el contrario, facilita la instrumentación del resultado de la actividad productiva, brindándole agilidad y celeridad a las transacciones comerciales como consecuencia de un uso espontáneo que es el fruto del ejercicio de la libertad de comercio.

En síntesis, diré que frente a los perjuicios que el sistema le ocasionará a la libre circulación comercial trabando su celeridad, y a los perjuicios que le ocasionará a los Bancos como consecuencia de una reducción que se operará en la emisión de los cheques, no se advierte la existencia de una contraprestación representada por un provecho o beneficio razonable y justo para la comunidad. Tal circunstancia me conduce a pronunciarme por el rechazo del proyecto, que estimo nocivo.

Finalmente, diré unas pocas palabras respecto de impuesto sobre los débitos bancarios. Una crítica que puede hacerse sobre este incremento general de las tasas es que limitará el uso del cheque y hará incrementar la tenencia de efectivo de parte del público y de las empresas.

Asimismo, facilitará la actividad subterránea en el sistema económico y la posibilidad de un menor control de la evasión de parte de la Dirección General Impositiva, que tiene en el cheque de las cuentas bancarias un instrumento idóneo para efectuar dicho control.

En el inciso 13 del artículo 42 se faculta al Banco Central para actualizar el monto máximo de 700 australes cada 1º de enero en base a los índices de variación de precios. Pero la actualización será anual, lo que es incorrecto, ya que en pocos meses más la inflación hará irrelevante el monto establecido de 700 australes. La actualización del Banco Central debería ser mensual o trimestral para subsanar los problemas que hoy se mencionan.

Quiero también señalar que los senadores por Corrientes —presumo que también debe haber ocurrido con representantes de otras provincias

que tienen producción de tabaco— hemos recibido una nota de la Cámara de la Industria del Tabaco, en la que se hacen consideraciones sumamente angustiosas, basadas en el cálculo de los precios de los paquetes de cigarrillos y los perjuicios muy grandes que se van a ocasionar con esta disposición legal que seguramente va a sancionar la Cámara en esta oportunidad.

En homenaje a la brevedad solicito que se inserte esta nota en el apéndice del Diario de Sesiones.

—Asentimiento¹.

Sr. Aguirre Lanari.— Por último, deseo formular algunas consideraciones sobre el impuesto a los combustibles, el que no obstante el loable fin que persigue tendrá una inevitable repercusión en los costos y, por ende, en la escalada inflacionaria.

Me preocupa en especial la incidencia sobre los costos industriales y los productos del campo, que exigen eficiencia y economía para afrontar la competencia externa, además de la repercusión que van a tener sobre los costos internos.

Quiero referirme también al fin perseguido, que sin duda es loable porque busca solucionar un problema que a todos nos angustia, como es la situación de los jubilados. Todos sentidos la aflicción que azota a la clase pasiva y que es como una pesada deuda o un déficit que tiene la sociedad con personas que han aportado durante años y que hoy encuentran que sus ingresos están menguados. Es de desear entonces que paliando los males económicos como consecuencia de este impuesto, la recaudación que del mismo resulte sea aplicada para disminuir esta deuda social que a todos nos concierne y que todos sin duda alguna debemos solucionar.

Sé que existe un proyecto que va a presentar el señor senador Britos, que se ha hecho conocer esta noche a todos los bloques. En el nombre del nuestro vamos a prestar adhesión para que el mismo sea considerado como una interpretación auténtica de la norma que se habrá de sancionar.

Agradezco la benevolencia de mis colegas para escuchar esta exposición fatigosa pero realmente la considerábamos necesaria para dejar sentada una cuestión de principios. Sin ninguna duda, respetamos las urgencias que han sido invocadas aquí, pero solicitamos consideración para la opinión que emitimos, que está desprovista de mo-

tivaciones políticas y responde a una necesidad espiritual que tenemos en este instante, con lo que doy por finalizada mi exposición.

Sr. Presidente (Solana).— Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amodeo.— Señor presidente: nuevamente el Senado considera un paquete impositivo que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados y que tiene el raro privilegio de haber concitado la repulsa de todas las organizaciones representativas del país, desde las corporaciones, grandes, pequeñas o medianas, la prensa en general, y hasta los propios partidos políticos, que señalan que en este país castigado por una crisis económica, el gobierno ha logrado una democracia política pero ha negado una democracia económica, base esencial y sustancial para la existencia de la primera.

En 1985, en oportunidad de haberse tratado el régimen de ahorro obligatorio me opuse, a su sanción juntamente con mis distinguidos colegas, los señores senadores por Jujuy y La Rioja, entre otros.

La extensión de este debate y lo avanzado de la hora harán que abrevie mi exposición remitiéndome a las razones que expusiera en ocasión de su primer tratamiento.

Pero debo decir, señor presidente, que las expresiones "ahorro forzoso" o "ahorro obligatorio" constituyen una negación gramatical desechada por la Real Academia Española, desde el momento en que "ahorrar"—según ese diccionario— significa "...reservar alguna parte del gasto ordinario"; "Guardar dinero como provisión para necesidades futuras"; "Evitar un gasto o consumo mayor". En todas las acepciones se trata de un acto voluntario.

Desde el punto de vista jurídico también es una incongruencia. El señor senador por Corrientes, en una ilustrada exposición, me ha ahorrado repetir ante este Honorable Senado los argumentos que él ha expuesto brillantemente.

La inconstitucionalidad de este proyecto de ley es manifiesta. El señor senador que me procedió en el uso de la palabra ha dicho y con razón, que no es un ahorro, por las razones que acaba de explicar. No es tampoco un impuesto porque no existe una contraprestación a cambio de esa coacción que el Estado ejerce sobre el bolsillo de los contribuyentes.

¿Es entonces una requisición? Yo entiendo que sí —lo que es inconstitucional—, a pesar de que en algunos casos enumerados y recordados por el señor senador por Corrientes se admite la requisición cuando la integridad territorial o la

¹ Ver el Apéndice.

soberanía del país lo hace necesario. En este caso, no, señor presidente. En este caso es al revés. Se trata de una requisición económica provocada por un mal manejo de los fondos públicos, que lleva a la República casi al estado de cesación de pagos, tal como acaban de señalar las más altas autoridades de la Nación.

Fronte a las citas que ha formulado el señor senador por Corrientes sería inútil que yo cansara al Honorable Senado repitiendo idénticos argumentos.

Como he dicho, la medulosa exposición del colega y amigo, el señor senador por Corrientes obvia la necesidad de insistir en el aspecto constitucional que, evidentemente, esta norma jurídica viola abierta e impudicamente.

De manera que, señor presidente, para no cansar a mis colegas, dada la alta hora en que se está desenvolviendo el debate, me referiré expresamente a la opinión de algunas de las entidades representativas del país, que acaban de manifestar sus objeciones serias y medulosas a este proyecto.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires elevó una nota a la Cámara de Diputados de la Nación para transmitir sus observaciones al proyecto de marras. Entre otras cosas afirma que "ya sea que se asimile a un empréstito forzoso o a un impuesto, en ambos casos se trasgreden principios constitucionales... Como impuesto, por tener carácter retroactivo y desconocer excepciones del régimen de promoción industrial; como empréstito forzoso, por no estar previsto en la Constitución".

Lo dice también, en una forma clara y terminante, la Sociedad Rural Argentina que, en una nota enviada a la Honorable Cámara de Diputados dice expresamente en su título: "Hacia un cambio estructural de la Economía. Lineamientos de una propuesta posible". En dicho informe, analizando el paquete de medidas impositivas, hace crítica y aporta sus opiniones. En lo que hace al ahorro forzoso, si bien comprende la necesidad de recaudar que tiene el Estado, critica su voracidad fiscalista y su falta de control hacia el evasor, premiando así a éste y castigando consecuentemente a quien cumple con sus obligaciones. Esta política —señala— no hará más que agravar la evasión, impulsar la rebelión fiscal producida ya en varios casos y condenar a la productividad.

A su vez, el señor presidente de la Asociación de Estudios Fiscales nos dice con absoluta claridad que la proyectada reforma fiscal carece de sustento ético y constitucional. La actividad financiera tiene carácter instrumental di-

rigida a la obtención, gestión y empleo de los recursos públicos, condicionando su legalidad a la racionalidad, eficiencia y mejoramiento cuantitativo del gasto público, aspectos ignorados por el actual gobierno. Es decir que la constitucionalidad del tributo está íntimamente unida a la del gasto público. Se produce una violación del principio de legalidad, porque las obligaciones tributarias no sólo deben ser establecidas por ley, sino que ello debe ser anterior a los hechos que lo originaron. La inconstitucionalidad viene dada porque el Estado defrauda a sus administrados cuando el contribuyente mantiene una conducta de acuerdo con las normas vigentes y luego éstas tienen otros efectos impositivos.

Va de suyo que al señalar estas opiniones, no hago más que hacer mías las mismas. Están en la línea de mi pensamiento de hoy y de siempre y, como tales, las traigo, apuntalando mi punto de vista.

De tal manera, señor presidente, como lo expresara al comienzo de mi exposición, esta ley de ahorro forzoso ha concitado la reacción de los distintos sectores de la sociedad en que vivimos.

Por otra parte, hay un hecho claro que los señores senadores no deben haber olvidado. Cuando tratamos en la otra oportunidad el proyecto de ley de ahorro forzoso se dijo que era por única vez. A los dos años se vuelve a traer a la consideración del Congreso de la Nación una ley similar con vigencia por dos años más.

Además, yo pregunto lo siguiente: ¿se ha rendido cuentas o se ha explicado al país dónde han ido esos fondos? ¿Qué renta se ha pagado a los que sí, forzosamente, se les metió la mano en el bolsillo, obligándolos a hacer un ahorro que, como he dicho en el comienzo, no se justifica ni gramatical ni jurídicamente?

Salvando así mi posición personal y ratificando las palabras que pronunciara en oportunidad del primer tratamiento de este proyecto de ley, debo expresar que esta ley constituye un atentado jurídico y un desliz gramatical por la aceptación que se le ha querido dar. El señor senador Aguirre Lanari ha explicado esto, lo que me evita repetir lo ya dicho y a lo que yo adhiero en todos sus términos.

Creo entonces, señor presidente, que podría decirse lo que le sucede al pueblo argentino con este paquete impositivo. Para ello voy a hacer referencia a una obra clásica de la literatura inglesa. Shakespeare pone en boca de Ham-

let estas palabras: "Nunca exhaló el rey a solas un suspiro sin que gimiera con él la Nación entera".

Este es el mismo caso, señor presidente, ya que se trata de una ley cuyos visos de legalidad no se pueden sostener y que, además, constituye una afrenta al pueblo argentino. En las elecciones del 6 de septiembre, a pesar del rezo laico con que inició una campaña victoriosa el oficialismo, ese mismo pueblo, burlado en sus intereses económicos y en otros, produjo el resultado electoral que todos conocemos, dando así espaldas al burlador.

Señor presidente: podría extenderme en el análisis minucioso de este proyecto, pero en homenaje al Honorable Senado voy a dar por terminada esta exposición, ratificando así una postura ideológica y legalista que caracteriza mi actuación en este honorable cuerpo.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — (Lee) "Señor presidente: la necesidad de la reforma tributaria que nos vemos compelidos a votar deja al descubierto algo que venimos preanunciando desde nuestras bancas sin ser escuchados, que es el fracaso de una política económica puesta en práctica por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de Plan Austral.

Dicho plan nació en 1985 ante la urgencia de frenar a la economía nacional, que se dirigía hacia la hiperinflación. Pero el apremio del momento y el buen resultado obtenido en lo inmediato con respecto al proceso inflacionario confundió a las autoridades económicas del gobierno y les hizo creer que estaban en presencia de un programa económico que tendía al cambio estructural del sistema.

Pero hoy queda en evidencia la falacia de aquella creencia y el verdadero alcance del Plan Austral, es decir, su naturaleza coyuntural, la inmediatez de sus objetivos y la falsedad de sus presupuestos.

Los autores del Plan Austral han creído ingenuamente que combatiendo a la inflación se resolverían todos los problemas de la economía y apuntaron entonces a corregir los efectos en vez de modificar las causas. Se combatió la fiebre perdiendo de vista la enfermedad que la generaba. Por ello era inevitable que aquella fiebre reapareciera como manifestación empujada de un mal que se agrava con el tiempo.

Los responsables del Plan Austral creyeron que contenida la inflación por mecanismos antinaturales del proceso económico, como lo es el congelamiento de precios y salarios, se producirían por añadidura el crecimiento económi-

co, el aumento de la recaudación tributaria, la reducción del déficit fiscal, la mejoría del saldo comercial y el incremento de la inversión. Pero ninguno de estos resultados pudo verificarse en los hechos porque, sencillamente, la magia no tiene ningún papel en materia de política económica.

El gobierno alteró los términos de causa y efecto, se ocupó de éste y olvidó aquélla, se olvidó de atacar las causas de la enfermedad y no hizo lo que es imperioso hacer, es decir, encarar la reforma del sistema financiero y eliminar la cultura de la especulación, modificar la estructura exportadora del país, reactivar el mercado de capitales, instaurar un régimen racional de promoción industrial, optimizar el sistema tributario, fortalecer las economías regionales, eliminar la economía subterránea y reorganizar el sector público. Nada de esto que he mencionado se ha hecho, no hay un solo ejemplo de iniciativa legislativa oficial seria en los aspectos que he nombrado, todo sigue igual que en 1983.

La cruda realidad es que el Plan Austral fue un plan de corto plazo, antiinflacionario, basado en el congelamiento de precios y salarios, que no podía y no pudo ir más allá de sus limitadas metas y por el reducido tiempo en que las deficiencias estructurales vuelven a exteriorizar sus manifestaciones negativas.

Es así como nos encontramos hoy en un contexto de desinversión tanto pública como privada; con una inflación que no ha sido dominada y que alcanzó más del 170 por ciento en los doce meses del pasado año; con una especulación financiera alentada desde el Banco Central que ha llevado las tasas de interés a guarismos superiores al 20 por ciento mensual; con una contracción sustancial del superávit comercial que no alcanza a los 1.000 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad que el saldo de 1986; y con un déficit fiscal caracterizado por un incontrolable gasto público y al que nos vemos obligados a cubrir con este conjunto de medidas impositivas que son recesivas, inflacionarias e inequitativas.

Si miramos hacia atrás y vemos hoy los resultados obtenidos no hay riesgo de equivocarse si decimos que el Plan Austral ha fracasado, que el esquema de medidas que propuso e implantó está agotado.

El mensaje presidencial que acompañó al presupuesto de 1987 tenía un título que decía: "Crecimiento con estabilidad; el Plan Austral y la reforma estructural de la econo-

mía". Frente a este ambicioso enunciado cabe acotar que el sueño del Plan Austral ha concluido, la única verdad es la realidad.

Sin embargo, en materia económica, la Argentina ha obtenido un logro, ha podido pagar los intereses de la deuda externa y cumplir con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que ésta ha crecido.

El sistema tributario que analizamos se inscribe en un sistema tributario caracterizado por las siguientes notas: primero, la finalidad del sistema es exclusivamente fiscalista, es decir, que persigue la obtención de recursos sin otro objetivo. Se renuncia así a la utilización del impuesto como herramienta de política económica. Si bien conceptualmente los impuestos responden a cánones aceptados de equidad y justicia, estos valores se ven tergiversados por las excesivas alícuotas de los tributos. La ineficiencia en la recaudación conduce a niveles elevadísimos de evasión y por ende a la inequidad en la manera de soportar la carga tributaria.

Las modificaciones que se han ido instrumentando en el sistema tributario tienden a aumentar la presión sobre los agentes que no pueden evadir la obligación en vez de perseguir a quienes eluden el pago de los impuestos.

Hay una tendencia al aumento de los impuestos indirectos con respecto a los directos, con lo cual el sistema se torna regresivo pues recae en sectores de menores recursos.

El conjunto de medidas que se nos remite para su sanción, lejos de mejorar los datos negativos apuntados, los agrava, y aunque las aprobemos presionados por un estado de necesidad, no podemos eludir su crítica.

El impropriamente llamado ahorro forzoso reúne características de impuesto, tanto por su impacto macroeconómico inmediato como por el efecto de la pérdida de su poder adquisitivo en el plan de devolución. Se sustenta en los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y al patrimonio neto y, por lo tanto, le son atribuibles sus mismas deformaciones, principalmente la alta evasión e inequitativa distribución de la carga. Por otra parte, implica un agregado extraordinario al ya elevado endeudamiento interno en que viene incurriendo el gobierno nacional, lo que significa seguir difiriendo los problemas para el futuro, aunque en este caso la carga se atenúa por la pérdida de su valor real en su devolución.

La reforma proyectada para el impuesto a las ganancias contraviene a la preservación de la fuente de las ganancias y a los derechos adquiridos con el tratamiento dado a los quebrantos impositivos. Por otra parte, la forma en

que ha sido reelaborada la escala para el cálculo del impuesto, no obstante el aumento de las deducciones de carácter personal, hace crecer significativamente la contribución de los sectores de ingresos medios y bajos alcanzados por el tributo, en el orden del 20 al 40 por ciento respectivamente, si se consideran rentas netas imponibles; y del 12 al 26 por ciento, si se computan las rentas netas de un contribuyente con familia tipo. En los niveles de altos ingresos, la contribución aumenta en un promedio del 4 por ciento, con lo que se evidencia claramente la regresividad de la reforma propuesta.

Asimismo la reducción de las deducciones posibles por quebrantos impositivos anteriores introduce una diferencia entre quienes rotan su capital rápidamente dentro del ejercicio y quienes tienen un ciclo más largo de recuperación de capital. Se produce así un desaliento de la inversión pues ésta puede conducir a un quebranto que luego no se recuperará en términos impositivos.

La modificación del impuesto sobre los débitos bancarios es otra derivación de la incapacidad para hacer funcionar una administración tributaria racional. En los hechos se constituye en un impuesto sobre las transacciones —análogo al impuesto sobre los ingresos brutos— en el que se ha cambiado al sujeto pasivo, con el agravante de que, entre las adquisiciones gravadas, se encuentran los salarios y las obligaciones emergentes de leyes sociales e impositivas. Tiene las mejores virtudes que el Poder Ejecutivo atribuye a un impuesto: fácil de recaudar, fácil de controlar, difícil de evadir.

El justicialismo logró a través de la sanción de la Cámara de Diputados que se elevara al 70 por ciento el porcentual de este tributo como crédito computable contra el impuesto a las ganancias, con lo cual se reduce el margen de doble imposición que puede significar el gravamen.

También la bancada de diputados justicialistas elevó a 700 australes el importe de los cheques eximidos en este impuesto, que el Poder Ejecutivo había fijado en 300 australes.

No puede dejar de destacarse que por una razón puramente fiscalista y coyuntural se haya afectado el fin básico y fundamental del cheque, que es su circulación, lo que se ha logrado con eliminación de los endosos y la necesidad de que los cheques sean extendidos a la orden de personas determinadas.

Tengo la culpable sensación de estar tergiversando un instituto del derecho y la práctica comerciales, universalmente aceptados y establecidos desde hace años. Creo que debemos

hacer la formal promesa de restablecer al cheque su capacidad circulatoria cuando mejoren las circunstancias que hoy determinan su abrogación.

Mientras el Poder Ejecutivo nacional propuso un impuesto del 33 por ciento sobre el precio de los combustibles para allegar fondos al sistema de previsión nacional, el justicialismo ha tratado de morigerar sus efectos reduciendo el porcentual entre el 17 y el 24 por ciento, según los casos, imputando a la mencionada finalidad impuestos internos que recaen sobre ciertos productos e incorporando un impuesto sobre el consumo de gas y del servicio telefónico.

Finalmente, el justicialismo se opuso con éxito a la mayor presión fiscal que hubiesen significado los impuestos no sancionados, como el destinado a la asistencia de los afectados por la emergencia agropecuaria, el impuesto a la propiedad inmueble y las modificaciones al impuesto sobre el patrimonio neto.

Resulta ineludible señalar que esta reforma impositiva debió ser incluida en la ley de presupuesto, en la cual los recursos encuentran su correcta y explícita asignación. El pueblo no sabe, salvo en un solo caso, cuál será el destino de esta nueva carga que se impone.

La discusión apresurada del paquete impositivo no debe ocultar la realidad en cuanto a que el desequilibrio fiscal ha alcanzado una magnitud más que significativa durante el año que acaba de finalizar y ello ha sido consecuencia tanto del agotamiento de una política económica que sólo privilegia el ajuste permanente como de una actitud excesivamente laxa —cuando no irresponsable— en el manejo del gasto público, en particular cuando se supone que él podría derivar en algún tipo de rédito político electoral.

En su oportunidad esta Honorable Cámara aprobó el presupuesto 1987, en el cual se establecía un déficit fiscal equivalente a 2,5 puntos del Producto Bruto Interno, guarismo que implicaba una mejora frente al 3,6 del año pasado. Una realidad caracterizada por el desmanejo de las cuentas públicas se ha encargado, sin embargo, de desmentir categóricamente tal objetivo, a tal punto que en los últimos días el propio equipo económico ha debido expresar públicamente que el déficit fiscal no será inferior a 6,5 puntos del PBI.

La ampliación desmesurada del déficit fiscal obedeció por un lado a una contracción de los ingresos que está vinculada con el deterioro de las actividades productivas —que induce, además, un incremento permanente de la economía subterránea—, con la creciente falta de eficiencia en la administración tributaria y, en última ins-

tancia, también con la aceleración del proceso inflacionario, el cual —a pesar de subordinar prácticamente toda la economía a su control— más que se duplicó durante el año pasado.

Por otro lado, el conjunto de los gastos públicos se incrementó como consecuencia de una mayor necesidad de transferencias a empresas públicas cuya eficacia en la administración deja mucho que desear y en las cuales, además, la práctica de la adquisición de bienes y servicios debe ser abiertamente cuestionada no sólo por los montos involucrados sino, en particular, por la exagerada utilización del sistema de contratación directa que resta transparencia a la acción del Estado en este campo.

En definitiva, queremos poner en claro que el descontrol fiscal que ha caracterizado la gestión oficial durante los últimos años exclusivamente es responsabilidad del gobierno nacional y prueba la inviabilidad de una política económica que se reduce a imponer el ajuste interno como requisito básico para facilitar las negociaciones con los acreedores externos.

Por último, señor presidente, en el mensaje que acompañó al proyecto de presupuesto 1987 se hacía una larga defensa de la reforma impositiva sancionada entre 1985 y 1986. Dicha argumentación concluía que para alcanzar los objetivos de crecimiento debía hacerse una reforma integral y profunda del sistema impositivo. En consecuencia, estar discutiendo a pocos meses de la sanción de dicho presupuesto una nueva reforma al sistema impositivo, urgidos por la existencia de un déficit fiscal incontrolable, demuestra no sólo la falacia de las argumentaciones oficiales sino además el agotamiento de una política económica que, hoy por hoy, lo único que está en condiciones de ofrecer a la sociedad argentina es un círculo vicioso cuyo recorrido conduce cada vez más rápidamente a la reiteración de un contexto recesivo sin oportunidades de inversión, con salarios deteriorados y, en definitiva, a la acumulación de un sentimiento de frustración que inhibe sistemáticamente el desarrollo de las potencialidades que aún conserva nuestro país.

Por todo lo expresado, entonces, anticipo mi voto afirmativo para el paquete tributario que estamos debatiendo, pero solamente en consideración a la situación límite a la que nos ha llevado una política económica que debe cambiar en el tiempo cercano.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: el señor senador Trilla ha caracterizado la iniciativa que estamos considerando como un proyecto "óm-

nibus". Esta técnica legislativa de incluir en un solo proyecto materias disímiles crea en el debate una situación verdaderamente singular. Cuando abordamos el tratamiento en general, nos cuesta decidir si vamos a hacer consideraciones generales sobre las materias de que trata todo el proyecto o si vamos a hacer referencia a cada una de las situaciones que se han incluido en sus diversos títulos.

Hasta este momento se ha entendido que las consideraciones en general involucran los temas en particular. Yo protesto y reclamo contra esta manera de abordar el caso y de proponerlo al Poder Legislativo. Es una más de las desconsideraciones que el Poder Ejecutivo tiene hacia el Parlamento argentino. Esto no es admisible. No está bien.

Y no está bien porque los legisladores tenemos el derecho de expedirnos sobre cada uno de estos temas, haciendo nuestras argumentaciones, sin estar constreñidos a realizar exposiciones "ómnibus" porque se le ocurrió al Poder Ejecutivo plantear una ley "ómnibus".

Esto conspira contra la tranquilidad de un debate que es necesario realizar con todas las garantías parlamentarias. Pero así están planteadas las cosas, y voy a pedir excusas a los señores senadores por tener que omitir argumentos o dilatar mi exposición tal vez más allá de lo que hubiera sido mi deseo.

Inicialmente tengo que referirme al mensaje con que el Poder Ejecutivo ha acompañado este proyecto de ley "ómnibus", para decir que pocas veces hemos visto un mensaje tan esquemático, tan falto de razonamientos, tan falto de elementos para formar un juicio, tan totalmente vacío de referencias numéricas y estadísticas, que en este caso considero indispensables para evaluar las propuestas que se hacen para cada uno de los tributos que el proyecto desarrolla.

Desde luego, se ha limitado a decir que con estos instrumentos da adecuada respuesta a diversos problemas que plantea la actual situación que vive el país, y que corresponde calificar de virtual emergencia. No es la primera vez que el presidente Alfonsín se dirige al Parlamento, como se dirigió a veces al propio pueblo de la República, hablando de la virtual emergencia económica y fiscal. Pero el argumento desvaído y simplista que estas palabras expresan no tiene ya el valor impactante que tenía cuando, desde el balcón de la Casa de Gobierno, dijo que estábamos viviendo una economía de guerra. En efecto, han pasado cuatro años de gestión de su equipo económico y de su propia gestión, y entonces aparece una licuada referencia a esta situación de emergencia, que escuda al proyec-

to "ómnibus". Hay, sí, una situación de emergencia que vivimos todos, pero no puede servir al presidente de la República para plantear este proyecto "ómnibus", que no indica soluciones sino que simplemente traduce un espíritu y un propósito fiscalista para cubrir el llamado déficit fiscal, que tampoco expresa en qué consiste, a cuánto asciende y si comprende el déficit fiscal total o el de la administración pública por una parte y el llamado cuasi fiscal, por la otra.

Estamos en condiciones de entrar a considerar este proyecto, prácticamente en Babia, sobre las circunstancias que sirven de fundamento para esta solicitud que hace el Poder Ejecutivo al Parlamento argentino a fin de que nosotros levantemos nuestras manos, como representantes de las provincias argentinas y del pueblo de la Nación para votar tributos, inclusive modificaciones a leyes que antes habíamos sancionado, en tren de colaboración, para dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos que se presentan ante nosotros como suficientes y necesarios para cubrir el déficit fiscal y la maldita inflación, que agobia verdaderamente a la República y sobre la que no se nos indica en ningún momento algún remedio efectivo.

El mensaje del Poder Ejecutivo dice que se va a encarar la disminución del gasto público y que ello se hará con energía. Nosotros no creemos que eso sea así. Se ha dicho en el recinto que efectivamente se ha encarado la disminución del gasto público y que se lo ha hecho de una manera paulatina.

No sabemos cuánto es el gasto público. Tengo que decir que la comisión que examina por mandato del Congreso la cuenta de ejecución del presupuesto, la cuenta anual, se ha visto obligada a emitir un dictamen, que tuvo entrada en la sesión del 12 de noviembre último y está en el Orden del Día N° 167, en el que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración ponía en conocimiento del cuerpo la omisión en que había incurrido la Secretaría de Hacienda de la Nación al no remitir la Cuenta General del Ejercicio 1986 dentro del término que fija el artículo 40 de la Ley de Contabilidad.

Recordarán los señores senadores que en ese momento propuse que se expresara el desagrado del Senado de la Nación por la omisión de la que daba cuenta la Comisión Parlamentaria Mixta, que debía informarnos sobre la cuenta de gastos del ejercicio 1986. No se aceptó mi temperamento e indebidamente, según mi concepto, se votó el dictamen de la comisión.

Como el dictamen solamente establecía que se nos ponía en conocimiento de las circunstan-

cias, yo entendía que no se lo debía votar y entonces, juntamente con mi colega el señor senador Benítez, presentamos el 24 de noviembre un proyecto de resolución por el que nos dirigíamos al Poder Ejecutivo expresándole aquel desagrado por esa omisión en la que había incurrido la Secretaría de Hacienda al no remitir la Cuenta General del Ejercicio 1986.

Observen los señores senadores que nos encontramos en 1988 tratando este paquete tributario y no sabemos qué ha ocurrido con las cuentas del ejercicio 1986.

No pretendo que sepamos qué ha pasado con las cuentas del ejercicio 1987 pero ni siquiera conocemos lo ocurrido con las del año 1986.

Se nos propone que votemos tributos que necesariamente van a afectar la economía de la República, que perjudicarán las economías individuales de los que están más desprotegidos en el país —como lo voy a demostrar— y se nos propone todo esto que tenemos que entrar a considerar sin saber qué pasó con las cuentas de 1986 y sin que se nos diga cuál es el déficit que según el mensaje del Poder Ejecutivo se tiende a cubrir con estas medidas y cuál es el gasto público que determina al gobierno a plantear esto con una cuestión de emergencia nuevamente.

El señor presidente dice en su mensaje que cabe conceptuar que el carácter excepcional de esta emergencia da sustento y justificación a las medidas proyectadas.

Se ha recordado bien aquí que ya se nos ha dicho varias veces esto mismo, con otras palabras, con parecidas o con iguales palabras. Transcurridos cuatro años de gobierno nos encontramos con que nuevamente el déficit fiscal —declara el Poder Ejecutivo— nos constituye en situación de emergencia. Nos obliga a crear tributos y no nos explica cuáles son los montos a cubrir, ni tampoco nos dice en qué se han invertido las cifras provenientes de los anteriores regímenes sancionados con este Congreso, ni cuáles son las perspectivas que vamos a tener.

En la Cámara de Diputados ha manifestado el miembro informante, diputado por la Unión Cívica Radical, que con esta iniciativa se va a combatir la inflación. Esta es una frase. No tengo motivos para hacer apreciaciones personales con relación al diputado Rodríguez; pero creo que decir que con esto se va a acabar la inflación —según su afirmación— nos está dando una apreciación equivocada del tema o bien él mismo tiene una idea errónea.

Se ha hecho mérito de que estas medidas vienen amparadas por un consenso político. Se dice

que este consenso político es el gran mérito del proyecto que estamos considerando. Yo no participo de esta opinión aun cuando algunos correligionarios míos hayan participado del consenso y crean que realmente es la base fundamental para la solución de estos problemas económicos.

No estoy de acuerdo porque carezco de información y porque en los cuatro años que llevamos trajinando con estos proyectos de ley que nos remite el Poder Ejecutivo hemos advertido que no hay soluciones propuestas.

Se ha hablado de la inflación y del Plan Austral. Me permito recordar que este último fue el más grande de los menosprecios al Parlamento argentino. Se estableció por decreto, y en el "decretazo" se decía que se iba a acabar con la inflación, una inflación que había encontrado este gobierno hace cuatro años en un nivel superior al 400 por ciento y que fue llevada bajo la administración económica del señor Grinspun en torno al 1.200 o 1.400 por ciento anual, hacia el mes de junio de 1985. Después de ese momento, es cierto que la inflación bajó enormemente.

Pero, ¿qué sucedió? El Plan Austral, que causó entusiasmo en tantos sectores de la opinión pública argentina, comenzó a andar, y la inflación, esa inflación que el Plan Austral prácticamente redujo al 4, 5 u 8 por ciento, se ha ido nuevamente acumulando, a tal punto que —según una publicación que si es necesario voy a traer a colación con todo detalle— en cuarenta y cinco meses de la gestión del actual gobierno constitucional, ha llegado a acumular la suma de 16.600. Muchas veces se dice que en otra época, bajo otro gobierno, bajo el gobierno peronista hubo una inflación exorbitante. Eso fue duramente criticado. Todavía se habla del "rodrigazo" y sus consecuencias. Yo digo que vivimos otra época y que no es bueno que lo que se criticó como malo se reproduzca peor.

Por eso creo que no es verdad, según mi criterio, que con estas medidas se vaya a aniquilar y a evitar el proceso inflacionario. La inflación no es un hecho que resulte impuesto por la naturaleza de las cosas, sino que es el producto de actos de los hombres y de los gobiernos. Y si esta inflación existe, se desarrolla y obliga a considerar situaciones de emergencia y a repetir "paquetazos" impositivos —que ya se han dado con anterioridad— para ver si esta vez resulta, el mayor de los escepticismos marca, en mi caso, la apreciación de estas afirmaciones.

Se ha recordado en la Cámara de Diputados, por parte de un compañero de mi partido, que

nosotros hemos sancionado y prestado la mayor colaboración para aprobar distintas leyes, a veces con algunas discrepancias y disidencias, pero acompañando siempre el propósito del Poder Ejecutivo que creímos fructífero.

En ese sentido, debo señalar que hemos acompañado la sanción de diversas leyes de carácter financiero. Entre ellas, el impuesto a los débitos bancarios, el referido a títulos valores, a los sellos, a los beneficios eventuales, a las ganancias, la medida sobre el secreto financiero y bursátil, el impuesto a los capitales, las modificaciones al patrimonio neto, las modificaciones a la ley de procedimiento fiscal, al valor agregado, a los impuestos internos; el impuesto a las cooperativas, el blanqueo de capitales.

Siempre hemos estado colaborando, convencidos y creyentes de que era necesario e indispensable que puséramos el hombro a las iniciativas del Poder Ejecutivo para lograr la recuperación económica y financiera de la República.

Pero ahora nos llega otro "paquetazo" de nuevo; y ante este "paquetazo" yo les digo: ¿qué le ofrecemos nosotros al pueblo argentino como para sancionar esto? El presidente de la República nos hace la misma promesa de que con esto se va a eliminar la inflación. Esto ya no es creíble, ha perdido credibilidad. El pueblo argentino, en cualquiera de sus categorías sociales, ya no lo cree, porque está viviendo la angustia de la situación económica que no encuentra una solución que haga que esta democracia sobreviva también con un margen de bienestar. Todos los días hay un deterioro de ese bienestar que, peligrosamente, está induciendo a algunos sectores a querer aprovechar de esta situación y a cierta gente a caer en el descreimiento.

Esto ya no es creíble porque los resultados no son positivos, porque lo que se nos dice a nosotros para convencernos de que votemos afirmativamente, se le afirma también al hombre de la calle y éste advierte que las soluciones que se proponen no son reales ni verdaderas.

¿Qué vamos a decirle nosotros al pueblo argentino cuando votemos nuevamente este "paquetazo"? ¿Vamos a decirle que creemos nuevamente en la eficiencia y en la eficacia del equipo económico que acompaña al presidente de la República, cuando más de la mitad de la población del país ha puesto ya en duda profunda y severa esto de confiar en ese equipo económico, cuando los resultados del fracaso de ese equipo están siendo evaluados por el propio partido gobernante, hecho sobre el que no quiero introducirme sino solamente hacer una referencia pasajera?

¿Qué vamos a decirle nosotros al pueblo argentino? ¿Que acompañamos estas medidas fiscales impositivas, porque con esto vamos a lograr terminar con el déficit fiscal, afrontando el gasto público hasta el punto de poder cancelarlo para iniciar una etapa de recuperación económica en el país?

Si no podemos contestar a la gente cuál es el déficit fiscal, si no tenemos información sobre el gasto público, ¿cómo vamos a decir nosotros que porque se ha logrado un consenso entre los bloques de la Cámara de Diputados tenemos que someternos a ese consenso, tengo yo que someterme a ese consenso y votar también aquí este "paquetazo" impositivo? Anticipo mi voto en contra en general. Y si fuera aprobado en general, voy a proponer modificaciones y hacer comentarios en el tratamiento en particular.

Pero dejo bien sentado que esto no es una indisciplina partidaria: me interesa dejarlo bien establecido para mis compañeros porque después de cuarenta y tantos años de lucha en el peronismo no voy a aparecer violando la confianza y el criterio de quienes ejercen algún género de autoridad dentro del movimiento justicialista.

Tengo razones fundadas para no creer que con esto vamos a solucionar los problemas del país, que los vamos a atemperar o a colocar en situación de que no haya que repetir recetas de este tipo en el próximo período ordinario, de aquí a seis meses tal vez.

Se ha dicho bien —y yo lo acepto y lo repito— que falta aquí el instrumento fundamental para la consideración de este tema, que es el proyecto de presupuesto general de la Nación.

El presupuesto del año pasado, el correspondiente a 1987, ha sido un fracaso —lo habíamos previsto cada uno de nosotros en nuestras exposiciones cuando se trató en este recinto el proyecto venido en revisión—, empezando porque se había calculado una brecha inflacionaria del cuarenta y dos por ciento y ahora que ha terminado 1987 cada uno de nosotros sabe que eso ha sido superado de una manera rotunda y nefasta para el país. Lo prevenimos.

Se sancionó tardíamente, como se han sancionado tardíamente los presupuestos en esta administración del presidente Alfonsín. Y nosotros dijimos: si ya está superada la brecha inflacionaria, ¿por qué insistimos en que ese cálculo debe hacerse con esa base? No se nos quiso escuchar. Se impuso la mayoría y se aprobó el presupuesto en esa forma. Y el fracaso está pa-

tente. No sé con cuánto va a cerrar el déficit del presupuesto de 1987, pero seguramente alcanzará el orden del doscientos por ciento.

Se ha dicho también aquí —y yo lo hago mío— que en algunos aspectos este paquete impositivo reitera medidas sobre las cuales ya nos hemos expedido.

Pero hay una falla fundamental, que es esa falta de información a que yo me refería. No nos ha dicho nadie cuánto se piensa recaudar. Cuando se envió el proyecto a la Cámara de Diputados, incluyendo otros gravámenes además de los que están contenidos en éste que ahora consideramos porque muchos fueron eliminados a instancias del Partido Justicialista, se habló de varios miles de millones de dólares de recaudación. No sabemos cuál es el cálculo, la estimación de lo que se va a recaudar con esto que se nos pide que votemos. Y esto es fundamental, porque si no sabemos cuál es el déficit que se va a cubrir, cuáles son los gastos en que se ha incurrido y que provocaron ese déficit y cuánto va a producir tentativamente estos impuestos que quieren que votemos, ésta es una ley totalmente anormal, por no decir otro adjetivo que puede parecer más fuerte.

Me queda la duda, leyendo y estudiando este proyecto que consideramos acerca de la forma en que va a afectar la inversión y si no va a tener un efecto francamente inflacionario. Más que a una duda creo que he llegado a la certeza de que va a impedir la inversión porque está afectando intereses de inversionistas que, ante la alternativa de tener que declarar ahorros o hacer emprendimientos empresarios nuevos, se plegarán a esta filosofía de la especulación desatada nuevamente en el país, según la cual mejor que trabajar es poner el dinero en préstamo y convertir nuevamente a la República en el paraíso de los usureros.

Creo, además, que cada una de estas medidas que se someten hoy a nuestra consideración aumentarán la evasión impositiva.

El señor senador Aguirre Lanari ha tenido la consideración de no abrumarnos con manifestaciones procedentes del propio secretario de Hacienda sobre este asunto de la evasión. Yo voy a hacer uso de otro criterio: voy a hablar de la evasión según las manifestaciones recogidas de declaraciones del propio secretario de Hacienda, Brodersohn.

En un informe que recogió el diario "La Nación" el 20 de noviembre de 1987 el señor Brodersohn dijo que en este país paga el que quiere y el que no quiere no paga. En ese sentido, dijo algo por el estilo.

Pero en lo concreto expresó que con respecto al impuesto a las ganancias, los contribuyentes inscritos como sociedades anónimas en 1986 eran 214.521; que presentaron declaraciones juradas solamente 75.869 y que sólo pagaron el gravamen 10.381. El mismo calculó el porcentaje de los contribuyentes que pagaron el impuesto: el 4,8 por ciento de los inscritos.

Si esto pasó con el impuesto a las ganancias en 1986, año en el que debe haber habido déficit fiscal, me pregunto que pasó en 1987. Decía Brodersohn que en ese período presentaron declaraciones juradas 30.523 contribuyentes —recordemos que el año anterior habían presentado declaración jurada algo más de 75.800 contribuyentes—, y el 80 por ciento de lo recaudado lo aportaron 291 contribuyentes solamente.

Yo he dicho, al tratar la ley que consideramos antes, que dábamos un voto de confianza y que la administración de Hacienda del país tenía que esforzarse para lograr disminuir esta evasión fiscal, porque de ello dependerá lo que recibían nuestras provincias. Y ahora afirmo que si en el impuesto a las ganancias el 80 por ciento de lo recaudado en 1987 lo han aportado sólo 291 firmas, ahí está la raíz del fracaso en que está inserto el país en materia de economía y de sistema financiero.

El secretario de Hacienda habló también del impuesto al patrimonio neto y dijo que el total de los inscritos ascendía a 78 mil. ¿Se concibe que en este país —lo comentó el propio Brodersohn— solamente haya 78 mil inscritos en el impuesto al patrimonio neto? Eso significa que éste es el país del pobrerio; no hay nadie que tenga patrimonio que sea registrable.

Sobre el IVA, nos refirió el señor Brodersohn que el total de los contribuyentes es de 1.146.000; que presentaron declaraciones juradas sólo 423 mil y que, de ellos, 200 mil no pagaron nada. Es decir que sólo pagaron el IVA 223 mil contribuyentes sobre 1.146.000 inscritos y conocidos. El mismo señor Brodersohn ha atribuido a la promoción industrial un motivo de la caída de los ingresos fiscales. Dijo que en 1985 el costo fiscal de la promoción fue de 500 millones de australes y en 1987 será de 2.000 millones de australes, porque se investiga pero hay grandes dificultades para ubicar el lugar de asentamiento de muchas empresas favorecidas por la promoción. Esto que tiene un origen incuestionable —es el propio secretario de Hacienda quien lo manifiesta—, creo que es de una enorme gravedad. ¿Cómo nos van a plantear a los legisladores de la Nación que votemos aumentos de impuestos, tributos nuevos, ahorro obligatorio

nuevamente y todo esto que contiene el paquete que estamos considerando, si resulta que la evasión es tan fantástica que realmente, como decía el propio Brodersohn, en este país paga el que quiere?

Yo pregunto: si él sabe esto y lo sabe la administración financiera del país desde hace cuatro años, ¿no se ha podido hacer nada? Se ha indicado por ahí, en algún comentario, que el sistema de computación va a dar solución a este asunto. Es decir, el sistema de computación muy complejo, que nos cuesta muchos millones de australes se ha instalado, se está por instalar o se va a instalar, con la suposición de que van a cargar las máquinas con el millón y pico de inscriptos en el IVA y con eso se va a solucionar la falta de pago del impuesto. Creo que si esto no fuera trágico, sería cómico.

Inclusive nos hablan del déficit y de que con esto se va conjurar, como si fuéramos a empezar una cuenta nueva. Pero yo —conocen ustedes perfectamente cuál ha sido mi posición en la discusión del traslado de la Capital— no he podido dejar de recordar al presidente Alfonsín en el discurso con que inauguró la Mesa del Consenso. Me parece que fue en esa oportunidad o en una parecida, pero el hecho es que terminó su alocución, llena de bonhomía, de sencillez en la forma de expresión, diciendo que pedía a los argentinos que lo acompañaran en la realización del traslado de la Capital.

Nosotros hemos comprobado que en los números oficiales estaba calculado entonces en 4.600 millones de dólares el costo para el traslado de la Capital, sin contar defensas ni los aportes a las provincias de Río Negro y Buenos Aires para que ellas dieran solución a sus propios problemas edilicios. Esa cifra en realidad ha sido deliberadamente disminuida, porque gente que estimó con más precisión los gastos del traslado de la Capital determinó entre 10 y 12 mil millones de dólares.

Con el dólar ha ocurrido un caso muy patético. Cuando en junio de 1985 se estableció el Plan Austral, el dólar se fijó a la paridad de 80 centavos de austral. Es decir, alguien iba con un austral, compraba un dólar y le daban veinte centavos de austral de vuelto. Pero ya ha pasado los cinco australes, está rondando los cinco y medio y, desgraciadamente, infortunadamente, va hacia los 6.

Entonces, cuando nosotros calculamos que el traslado de la Capital podría significar una erogación de 10 a 12 mil millones de dólares, comprendimos que sería una cifra tan representativa que, por sí sola, fundiría al país.

Yo no quiero ser agorero, pero digo que si no hay disposición para frenar el gasto público y controlarlo, estableciendo perfectamente cuál es el déficit fiscal y el cuasi-fiscal, del que no se habla, el problema no se va a solucionar. En los argumentos y proyectos que nos remiten no se dice cuál es ese déficit cuasi-fiscal, pero sabemos por otros medios, por ejemplo a través de la declaración de un fiscal de la justicia del crimen, que hay en el país alrededor de noventa presidentes y directores de bancos procesados, algunos de ellos —pocos— están presos, pero el impacto que han producido en el Banco Central, que es quien debe responder por las maniobras dolosas de esas personas, asciende a unos cuatro mil quinientos millones de dólares.

Sabemos que esto es parte del déficit cuasi-fiscal que se origina en el Banco Central de la República Argentina por medio de los redescuentos generosos a bancos quebrados y por los aportes también generosamente entregados a empresas del Estado. Esto ha llegado a un punto tal que el propio gobierno se ha visto obligado a anunciar que pondrá coto y término al redescuento y a la emisión con destino a las empresas del Estado, cosa que no sabemos si realmente se cumple. Debemos creer que sí porque hay que tener un poco de fe remanente en nuestra conciencia sobre quienes gobiernan nuestro país, que han merecido la confianza del voto popular.

Sin embargo, no sabemos lo que sucede y conocemos que existe además una larga lista de entidades financieras puestas en observación por el Banco Central que, en definitiva, termina por intervenirlas y hacerse cargo de sus pasivos. Una situación semejante se da con este asunto de las privatizaciones, por medio del cual se mantienen a cargo del Estado las deudas de las empresas privatizadas, como ha ocurrido con Austral.

Esto es lo que está sucediendo en el país y lo que me lleva a considerar que no está bien y que no es justo que nos coloquen en la situación de votar estos proyectos de leyes que van a traer recesión, inflación, que van a hacer ajustar la inversión pública, que van a provocar mayor evasión de los impuestos y que están produciendo, aunque resulte un poco burdo, hechos como el ocurrido recientemente, donde se llegó hasta la ridiculez de tener que pagar pollos que habían sido importados por una momentánea iniciativa de un funcionario, la que produjo un endeudamiento al país de alrededor de 40 millones de dólares; esto significa no considerar adecuadamente el sacrificio del pueblo argentino.

Mientras tanto, las tasas de interés son extraordinarias, como en los mejores tiempos del país más desaprensivo. El Estado, para cubrir sus gastos, emite títulos y bonos, lo que bien se ha dado en llamar "festival de bonos", los que tienen nombre de insecticida o de remedio, como Tídol, Barra, y no sé qué otras denominaciones, los que dan un rédito de hasta el 25 por ciento mensual. Ese es dinero de los ahorritas argentinos que recoge el Estado a ese tipo de interés porque no recuada los impuestos en la forma que debiera. El gobierno confía en que el Parlamento le va a votar leyes impositivas que, además de los aumentos que por sí mismo determina el Poder Ejecutivo, importan el incremento de impuestos, teléfonos, precios de gas, de alcofina y de otros rubros.

Todo esto para dar satisfacción a este verano tranquilo que permitirá disponer de fondos para cubrir el déficit fiscal; también esto en una situación muy infortunada para la República, bajo la amenaza del señor secretario de Hacienda de que si no se aprueba el paquete tributario no va a girar nada a las provincias argentinas porque no tiene qué girar, ya que mientras nosotros no aprobemos este proyecto no existirán fondos para girar a las provincias argentinas. Y esto no es razonable, no es admisible.

Alguien, en los comentarios de diarios y revistas sobre estos temas, tal vez con cierta intención traviesa, ha dicho que esto puede mover a la desobediencia civil. Y ustedes saben cómo es este asunto de la difusión de un eslogan: empieza a crecer y crecer, se repite, y finalmente llega a alguien que antes de tener que pagar el ahorro obligatorio prefiere evadir, resistir y no pagar, dejando que se venga la maroma encima, ya que, entre tantos miles y millones de contribuyentes su caso puede pasar inadvertido y, si se detecta, hasta que se inicie el juicio y la justicia actúe —aun la justicia administrativa—, podrá realizar cualquier género de maniobras para evitar el impacto económico en su patrimonio.

Considero posible que ocurra esto a la desobediencia civil, porque hay sectores —no ya de comentaristas accidentales en diarios, en búsqueda de lectores, sino de organizaciones gremiales— que han hablado de que el impuesto sobre la nafta que se nos propone ocasionará en el sector rural un gasto del orden de los 600 millones de australes, por lo que están alarmados. Inclusive, están alarmados en un sector que ha manifestado seriamente que ese tipo de tributos y los demás de este paquete van a provocar una

situación de quebranto al sector agropecuario, hasta el punto de obligarlo a incumplir con sus obligaciones tributarias.

Mientras tanto, no se dice nada. Nunca se ha dicho nada salvo una expresión muy genérica en el sentido de modificar las estructuras. Pero, ¿qué se va a hacer con el régimen financiero argentino? ¿Qué pasa con esto de que el Banco Central maneja privilegios para el capital financiero y los bancos?

Yo no estoy en contra de los bancos. Sé que se trata de una institución indispensable en la sociedad de todos los tiempos, y más aún en la actualidad. Pero el negocio del dinero, la acumulación del capital y el manejo del capital a través del crédito real o ficticio de que disponen muchos bancos, crea una situación que no sólo es grave sino que afecta incluso a los principios morales más importantes en el manejo de las finanzas públicas.

Mientras tanto —y es un supuesto que no estimo barato, porque la realidad del país lo está indicando—, debe haber alguien que se aprovecha de la inflación.

La inflación no es un hecho natural —repito— sino que es provocado, creado por las medidas oficiales y generado por el sistema especulativo. Y alguien se aprovecha; y no se busca a los aprovechadores y a los usureros para imponerles el rigor de la ley.

Este paquete de medidas tributarias va dirigido falsamente a que paguen los que tienen más, como se dijo propagandísticamente. Pero está dirigido de tal modo que los tributos repercutirán fatalmente y llegarán a que los paguen los que tienen menos, porque los que se ven privados de una supuesta o real ganancia se las van a arreglar de algún modo para que la producción que siguen realizando cargue en sus costos el precio del tributo.

Quien tenga que pagar, además del precio aumentado de la nafta por decisión propia del Poder Ejecutivo, el 24 por ciento que se nos propone que votemos, lo va a pagar porque necesita transportar y usar el combustible, pero fatalmente lo va a descargar en el que usa sus servicios o en el que tenga que recurrir a él por cualquier motivo económico.

En definitiva, sabemos lo que pasa: la cuerda se corta por lo más delgado, y fatalmente resulta ser el pueblo trabajador, la clase media baja argentina, los consumidores, los destinatarios de estas medidas impositivas que podrían tener otro remedio. Lo digo recogiendo la indicación que aquí se ha hecho por algunos de los señores senadores de que no proponemos alternativas. La alternativa más simple es la de que el sistema

impositivo que está creado, las leyes dictadas que existen, se hagan efectivas para que de una buena vez exista el control impositivo suficiente, para que las recaudaciones cubran el gasto público como en cualquier economía doméstica o estatal debidamente organizada.

Por las circunstancias que he expuesto al comienzo, voy a referirme a algunos de los títulos que forman este paquete tributario y no a todos, porque no quiero extenderme tanto. Pero existen algunos que despiertan mi interés especial como es el caso del ahorro obligatorio.

El señor senador por Corrientes ha recordado lo que votamos anteriormente sobre este tema. Ha tenido la gentileza de señalar que también yo entonces participé en el debate y me opuse al tributo. Adhiero totalmente al estudio jurídico que ha hecho el citado señor senador y que es lo que nosotros habíamos expresado en aquella oportunidad, con respecto a lo cual no hay que cambiar ni siquiera una coma. Se trata de una exacción inconstitucional, ilegal e injustificada.

No existen en el mensaje del Poder Ejecutivo siquiera expresiones para dar una explicación que nos permita variar en algo el criterio apuntado. Dice: "Se establece un régimen de ahorro obligatorio para los períodos 1988 y 1989, cuya estructura no difiere mayormente de la establecida en el año 1985 y que mereciera sanción legislativa como ley 23.526, fijándose en consecuencia la capacidad de ahorro en función de la renta y patrimonio de determinados ejercicios fiscales.

"Asimismo se prevé un sistema de reintegro de las sumas ahorradas...".

A los argumentos jurídicos habría que agregar los de orden práctico. Es tan injusta esa acción, que sin admitir prueba en contrario, por el sistema de la renta presunta, la ley supone que en tal ejercicio un determinado empresario ha obtenido una cierta ganancia y que la ha ahorrado.

Lo exime si el hombre ha tenido la desgracia de resultar totalmente afectado por una invalidez o si ha quedado en situación de quiebra. Pero no lo exime si su mujer o sus hijos han tenido la desgracia de enfermar y se ha gastado todos sus ahorros y su ganancia en una curación. Tampoco lo exime si las pérdidas se han debido a que en esta época de latrocinio de muchas clases han entrado reiteradamente ladrones a su departamento y lo han desvalijado.

Con mucha simplicidad establece un parámetro de posibilidades de ganancias y otros de posibles descuentos. Asimismo prevé una suma sobre la cual fija una tasa, y obliga a pagar. Y si

no paga, entonces automáticamente entra a regir el sistema de la ley especial que existe para los impuestos.

Disiento con algunas expresiones que se han vertido aquí porque esto no es un impuesto. Ni siquiera es una requisición. Es el equivalente a un empréstito forzoso, terminantemente prohibido por nuestra Constitución Nacional. No puede hacerse.

Voy a repertir la apreciación que formulé en 1985 cuando nos fue remitido el proyecto de ley de ahorro obligatorio. ¿Es que el gobierno de la Nación no tiene confianza en que el pueblo argentino y los sectores del trabajo puedan contribuir si se les dice la verdad, si se les habla con palabras que den crédito a sus afirmaciones? ¿No tiene confianza para emitir un empréstito como tantas veces se ha hecho en la historia del país, como es necesario hacer muchas veces en la historia de los países en que se recurre al crédito público, a los sectores de la producción, del trabajo y se emiten títulos porque se pide prestado para cubrir situaciones de verdadera emergencia?

No, no tiene confianza. No puede tenerla porque ha repetido la receta y no ha informado al pueblo de cuál ha sido el resultado y por qué nuevamente plantea la situación de emergencia, la cuestión del déficit fiscal y la imposibilidad de cerrar el balance del lado del gasto público con los recursos que nosotros hemos votado.

Esto es una repetición. Mientras las anteriores exposiciones hacían uso de la palabra me daba la impresión de estar viendo por segunda vez una película con algún cambio en los protagonistas pero con el mismo argumento. Esto no es lo que corresponde que se haga en una materia tan importante como es cubrir las necesidades financieras del país y manejar y administrar la cosa pública.

Se retraen fondos de toda la República para cubrir gastos del Estado nacional. No se hace de esto un impuesto, porque tendría que darse coparticipación a las provincias. Entonces, se inventa el ahorro obligatorio que no es una contribución, pero sí una obligación, impuesta —como ha dicho el señor senador por Corrientes—, desvirtuando el principio del ahorro que es natural y necesariamente voluntario.

Se afecta también la libertad y la propiedad y no se dice qué destino va a tener ese ahorro que se obliga a poner en manos del Estado, porque decir genéricamente que es para cubrir el déficit fiscal es como no decir nada, porque nadie sabe en la República cuáles son los rubros o componentes del déficit fiscal y del déficit

cuasi fiscal. Lo primero —y debo repetirlo— que el poder administrador debe hacer con el Parlamento y con el pueblo argentino, es decir en qué gasta, en qué invierte y en qué se propone gastar e invertir, para qué pide fondos, cuándo los emplea, por qué y en qué los ocupa.

Pero esto no sucede y, entonces, recurre al Parlamento para que nosotros digamos nuevamente que es ley de la Nación saquear a los que tienen un ahorro, bien o mal obtenido, pero que se los saquea contra su voluntad.

No voy a hacer el repaso del proyecto de ley, porque éste es, sin ningún escrúpulo —cualquiera que lo lea, aunque no tenga la más mínima formación jurídica tiene que coincidir en que esto es una herejía, porque es violatorio de los derechos del hombre—, violatorio de los derechos de los ciudadanos y de sus patrimonios; es violatorio de su derecho de guardar el fruto de su esfuerzo y de emplearlo como lo desee. Es violatorio porque lo trasladan no a cinco años sino a siete con una cláusula que faculta al Poder Ejecutivo para hacer una devolución en ocho cuotas trimestrales, después de los cinco años, con un interés —sobre el cual está equivocado el señor senador por el Chubut— que no va a cubrir de ninguna manera la descapitalización que a lo largo de siete años puede sufrir esa exacción que se ha hecho sobre el patrimonio de los ciudadanos.

También me voy a referir a la situación que nos plantea este proyecto a quienes venimos insistiendo durante mucho tiempo sobre la necesidad de resolver la angustia económica de los jubilados y pensionados. Se establece un tributo especial sobre las motonaftas y las alconaftas, el kerosene, gas oil, diesel oil, fuel oil, gas y pulsos telefónicos.

Con todo esto se pretende integrar un fondo que, según dice el proyecto, se destinará al "financiamiento del Sistema Nacional de Previsión Social" y a los "régimenes previsionales existentes en las provincias y en las municipalidades". Nunca me han gustado estas expresiones vagas en los textos de las leyes. La ley debe decir, concretamente, qué se va a hacer con ese dinero y no lo dice este proyecto, en donde se habla del "financiamiento del Sistema Nacional de Previsión Social"; ello puede dar lugar a cualquier clase de manejo de los fondos autorizados implícitamente por este proyecto de ley.

En ese sentido, el señor senador Britos me ha anticipado que va a proponer un texto que sería modificatorio de ese concepto, pero que frente a la necesidad de que este proyecto se sancione, constituiría una especie de interpre-

tación auténtica en el sentido de que los recursos que se obtengan deben ser exclusivamente destinados para el pago de jubilaciones y pensiones.

Si este proyecto de ley se aprueba en general y llegamos al tratamiento en particular, quiero anticipar que voy a proponer el siguiente artículo: "Cada 60 días el Poder Ejecutivo por el organismo competente, deberá informar al Congreso de la Nación sobre lo siguiente: a) Monto de las recaudaciones efectuadas en virtud de las disposiciones anteriores, discriminado por gravámenes; b) Aplicación que se haya efectuado de lo recaudado, con indicación de las sumas transferidas a los organismos previsionales provinciales y municipales, y con indicación de los montos incrementados y pagados a jubilados y pensionados de los régimenes previsionales beneficiarios de esta ley.

"En ningún caso y por ningún motivo, las sumas recaudadas podrán ser desviadas de los fines señalados en esta ley, ni utilizadas para otra cosa que no sea el acrecentamiento de los haberes de jubilados y pensionados.

"Las provincias y municipalidades que reciban fondos provenientes de las recaudaciones de referencia, deberán formular en el mismo tiempo los informes indicados en el inciso b) de este artículo. Rige también para ellas lo dispuesto en el párrafo precedente."

He pensado que podría suponerse que esto es un abuso de desconfianza en el manejo de la administración pública. Pero es que resulta que en esta materia previsional el Estado nacional no cumple. Ha tomado a su cargo aportes cuando se modificó el sistema previsional, y no cumple. Tiene la obligación de aportar un porcentaje y no lo hace; aporta menos.

Esto induce, entonces, a que tengamos el recelo de que alguna angustia momentánea de la administración haga que algún funcionario desaprensivo, sabiendo que existen fondos allí para los jubilados, los tome para cubrir otras necesidades que no son las que nosotros queremos que se cubran.

En esto, la historia legal del país tiene muchos antecedentes, no sólo en la Nación sino también en las provincias, donde los aportes jubilatorios son muchas veces utilizados para cubrir necesidades inmediatas o simplemente no son efectuados por los poderes ejecutivos a los institutos de previsión.

Entonces, no está de más que nosotros prevengamos y digamos esto de que se debe informar sobre los montos, sobre los pagos, que éstos han sido efectivamente realizados a los

jubilados y pensionados y que las sumas recaudadas no pueden ser desviadas ni distraídas. Esto de la "distracción" no es una expresión literaria, porque el hombre se distrae de muchas formas: a veces con los espectáculos, pero otras llevando los recursos de una parte a otra para cubrir necesidades que no son las que se quiere cubrir con la letra de la ley.

Se sabe y se conoce —lo sabe toda la República— que no se cumplen las leyes que reconocen a los jubilados y pensionados la retroactividad que corresponde al 70 y el 82 por ciento móvil.

Se sabe y conoce en toda la República que gente angustiada por esta situación, desesperada porque los haberes jubilatorios son ínfimos frente al proceso inflacionario y la necesidad de sobrevivencia, ha planteado juicios.

Se sabe y conoce en la República que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho de los jubilados. Y se sabe y conoce también que el Poder Ejecutivo, por vía de decreto, ha declarado una emergencia provisional, que prácticamente impide por otra parte la promoción de otros juicios, y que aquellos sobre los que ha recaído sentencia no los cumple. Ha dispuesto mediante el decreto 648 un sistema por el que fija a su arbitrio, para ciertas categorías de jubilados, la posibilidad de cobrar un haber retroactivo, y ha establecido que dicho haber se podrá cobrar en cuotas, salvo en el caso de que se tenga más de ochenta años. Entonces, a punto de abandonar ya este valle de lágrimas, el hombre puede juntarse con ese monto retroactivo que, según su propio criterio, fija ese decreto.

No es ésta la solución para los jubilados. Entonces, recogiendo nuevamente lo que se ha dicho en este recinto sobre cual es la alternativa, diré que es que los aportes jubilatorios se paguen, no que se permita que se evada; que los pague también el Estado en la proporción en que la ley lo indica y que, en definitiva, la ética de la solidaridad que tanto se pregonaba y sobre la que tanto se habla, se cumpla estableciendo todos nosotros —si no alcanzan los fondos— la ley que los aporte en cantidad suficiente para que los jubilados y pensionados cobren lo que deben cobrar. Entonces, se superará este criterio, que yo no admito, de que las cajas están en imposibilidad de pagar; que antes eran cinco activos por cada pasivo, después la relación pasó a ser de tres activos por un pasivo, que ahora es de uno por uno, y así vamos a la debacle.

Este no es el criterio de la ética de la solidaridad. La solidaridad indica que cuando un

hombre ha trabajado durante los setenta años de su vida —haya trabajado poco, regular o mucho— tiene derecho a la asistencia solidaria de los demás habitantes de la República, y que cuando se automaticen las fábricas y sea uno solo el que maneje, igualmente los que están jubilados tendrán que recibir lo que les corresponde como el precio que paga el Estado, el pueblo todo de la República, para compensar el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida transcurrida al servicio y como perteneciente a esta comunidad.

No voy a hacer otros comentarios sobre las restantes disposiciones porque creo que sería un poco excesivo. Solamente voy a decir que coincido con lo que se ha dicho en cuanto a la oposición al sistema del cheque.

Advierto que es una necesidad del Estado la de suprimir el endoso de la legislación argentina y de convertir al cheque en un instrumento para detectar evasión. Si éste es el resultado de la medida que se proyecta, en buena hora que se haga.

No estoy en oposición al sistema porque, en definitiva, cuando alguien reciba un cheque, no pueda endosarlo y tenga necesariamente que depositarlo, va a quedar la huella del que le pagó y por qué le pagó. Esto va a servir al señor Brodersohn para aventar en parte este fantasma de la evasión impositiva. Aunque no hay que hacerse tantas ilusiones, porque ya está circulando la información acerca de los recursos y los medios de que se piensan valer algunos para violar esta ley. ¡Antes de que esté dictada, ya se está pensando en cómo violarla!

En este sentido, se piensa que podrá violarse acoplando al cheque una simple manifestación debidamente certificada de que el emisor se hará responsable del pago ante cualquier tomador que lo presente al cobro a la fecha que se fije como vencimiento. También se piensa que en lugar del cheque —puesto que éste dejará de circular por muchas manos— volverá a usarse el viejo pagaré y con él se irán arreglando. Después de todo el cheque está conminado con pena del Código Penal, pero son tan pocos los casos en que se hace efectiva esa conminación que frente a esta disposición habrá quien prescinda del cheque y vuelva a usar el pagaré.

No voy a extenderme más. Creo haber dado los motivos —por lo menos los he dado para tranquilidad de mi conciencia— por los cuales no voy a votar por la afirmativa la aprobación en general de este proyecto. Pero si se aprueba en general, voy a plantear en particular las cuestiones relativas a los puntos que he indicado.

Deseo que estas palabras que esta noche pronunciamos en el recinto sean verdaderamente recogidas por el Poder Ejecutivo como la interpretación que nosotros hacemos de una realidad que vivimos en la calle, que captamos todos los días en la vida cotidiana, que es la angustia y la desesperanza que va ganando la conciencia de los argentinos frente al fracaso de las medidas que se vienen tomando.

No me importa si Fulano o Zutano terminan siendo ministros de Economía, pero que alguien afronte desde el Poder Ejecutivo —y nosotros le vamos a prestar apoyo— esa renovación y cambio de estructuras que el país necesita imprescindiblemente para enderezar su rumbo, a fin de que nosotros logremos ese viejo eslogan de los peronistas que aquí pocas veces se dice: que tengamos la patria grande y el pueblo feliz.

Sr. Presidente (Solana). — ¿Ha terminado, señor senador?

Sr. Martiarena. — Sí, gracias.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: hace mucho tiempo, cuando iniciamos esta nueva etapa constitucional, ya estábamos preocupados por el sistema previsional. Es decir, este bloque trataba de alguna manera de interpretar a más de dos millones de compañeros que habían dado tanto por el país y a quienes lamentablemente la legislación los estaba dejando de lado. Hoy, a cuatro años, nos encontramos con que tenemos casi 2.900.000 jubilados y pensionados, más 300.000 dentro de las provincias argentinas, lo que hace un total de más de 3 millones de compañeros.

Y hoy vamos a tratar, como bien decía el compañero Martiarena, una ley omnibus en cuyo título VI se ha buscado la forma de compensar la mala administración del gobierno radical en lo que respecta al sistema previsional. Se ha buscado compensar esto mediante un "tarifazo" una ley de tipo regresivo que finalmente van a pagar los menos pudientes. Porque los que tienen mucho saben ingeniárselas bien y van a hacer la evasión correspondiente. Pero para aquellos que tienen poco, los que trabajan, finalmente esta ley se va a convertir en un bumerán que va a volver y caerá sobre sus espaldas.

Esta ley omnibus, señor presidente, este paquete, no es más que el fruto de lo que tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional, a esos señores que han llegado en el día de ayer a inspeccionar, a ver cómo están las

cuentas nuestras, para ver si podemos cumplir. Y pareciera que siempre se la han tomado con esta área, la de Seguridad Social, un área que a nosotros, los justicialistas, los peronistas, nos ha tenido preocupados. Porque fue justamente donde el general Perón, después de la revolución del 4 de junio, trató de insertarse totalmente.

Pero no era una cosa únicamente de Perón, sino que nosotros lo vimos ya con Yrigoyen, cuando después de la huelga de los ferroviarios del 17, nos daba un proyecto de ley que después fue la ley 10.650, que fue a la Cámara de Diputados y estuvo muy demorada aquí, en el Senado de la Nación. Y recuerdo aquel mensaje porque lo hemos tomado; en su primera parte dice, el 22 de agosto de 1918: "Al Honorable Senado de la Nación: Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad interesando su atención sobre la conveniencia de sancionar preferentemente los proyectos sobre jubilación y trabajo de los empleados y obreros ferroviarios que, con sanción de la Honorable Cámara de Diputados, se hallan pendientes de la ilustrada consideración de vuestra honorabilidad".

Es decir, era un hombre que interpretaba el sentir de su pueblo y entendía que únicamente mediante una ley se podía contemplar el trabajo de una vida. Lo dice después más adelante Yrigoyen en otro mensaje, cuando sanciona la ley de jubilación de los empleados públicos y de los periodistas.

Hay una parte acá también que es doctrinaria, que tenemos que tomar, a pesar de los tiempos. Este mensaje del 4 de agosto de 1922 decía, en la parte final, —no lo voy a leer todo porque es muy largo, pues está vinculado a la jubilación de empleados de comercio, obreros y periodistas— que: "El interés de esta ley no radica en sus cláusulas aisladas sino en la consagración del concepto de justicia reparadora que la inspira y en el alto deseo de asegurar el bienestar de los hogares, que forman la base esencial de la vida toda de la República y que el Poder Ejecutivo, desea llevar, si fuera posible, a todos los habitantes del país que por su posición de modestos obreros del bien nacional, deban ser justamente resguardados por el concurso permanente de la alta razón de Estado". Así se expresaba Yrigoyen al referirse a las obligaciones del Estado, que nunca debió abandonar a estos hombres y mujeres.

En vísperas del 31 de octubre de 1983, el propio doctor Alfonsín hablaba en el Luna Park, ante más o menos quince mil jubilados, diciendo

que "...con la democracia se come, con la democracia se vive, con la democracia se educa, con la democracia..."

Sr. Trilla. — Esto es cierto.

Sr. Britos. — ...Lamentablemente, han pasado los años y los pobres viejos, por más que consumen democracia, tienen mal la salud y se los ha herido en su dignidad humana, que es lo más caro para estos hombres, a quienes les cuesta aceptar que sus propios hijos los ayuden porque ellos han dado una vida al trabajo y no les gusta recibir un peso en forma aliviada. Ellos hicieron todo lo que disfrutamos nosotros, a pesar de las crisis, pero lo hicieron para bien nuestro y hemos administrado mal ese gran capital.

Pasaron los tiempos y vino Perón, y allá por el año 44, la revolución del 4 de junio —se decía en un documento— "...tiene la ardua tarea de crear y renovar la estructura jurídica, social y económica. Para ello, ha ido creando órganos estatales y nuevos cuerpos legales, de tal modo que las necesidades de la Nación sean atendidas con la rapidez e idoneidad necesarias... Por eso, es auspicioso que una de las grandes creaciones con que se cierra el ciclo de este intenso año de labor, sea el Instituto Nacional de Previsión, que ha de ser la cúpula del gran edificio que estamos levantando a la justicia social".

No vamos a seguir con esto porque es largo y lo que dijo Perón en parte lo tomó de Yrigoyen y de otros prohombres que hicieron tanto por nuestro país. Pero más adelante, hablando ya de la previsión social, Perón decía "...que el gremio tiene la obligación de vigilar y defender en bien de sus asociados... para que ella se haga cargo de los problemas que el hombre por sus propios medios, individualmente, no puede resolver..."

Perón decía también que "...la previsión social organizada por el Estado, para satisfacer las necesidades a que el individuo o la mutualidad no puede hacer frente. Con ello, se trata de asegurar que el hombre, al terminar el trabajo de su vida, por incapacidad o vejez, no se halle abandonado a sus propios medios y tenga su jubilación para continuar subsistiendo".

Nuestra doctrina tiene un principio que está por sobre todo y es el de preservar al hombre. Aquí, en los últimos tiempos, de acuerdo con la seguridad social que tenemos, estamos dejando al hombre de lado. Parece que es más importante el hecho de que cada uno se arregle como pueda porque al hombre, cuando ya está viejo, cuando ya lo ha dado todo, lo abandonamos.

¿Por qué abandonamos al hombre, si nosotros estamos en la etapa más importante de nues-

tra vida, que es la etapa democrática? Cuando entramos en esta época nosotros, los justicialistas, y algún otro amigo de otro partido político, tuvimos algunas inquietudes que fueron elevadas tanto en Diputado como en el Senado, considerando las necesidades de los compañeros de la clase pasiva. Presentamos aquí un proyecto por ejemplo, para la jubilación y fue sancionado por este cuerpo; recuerdo que ese proyecto lo tratamos en 1984. Me estoy refiriendo al derecho de los concubinos cuyos compañeros fallecieron antes de la vigencia de la ley 23.226. Todavía hay alrededor de veinte mil mujeres que están esperando que hagamos justicia con ellas, que han convivido quince, veinte o veinticinco años con sus hombres y finalmente no han podido lograr aún la pensión que les corresponde. Nosotros sancionamos una ley de divorcio y, no obstante, estamos demorando a las compañeras que a veces cerraron los ojos de sus hombres, luego de toda una vida en común, en la que han tenido hijos, que son fruto del amor, naturalmente. Sin embargo, este proyecto fue allá y lo "cajonearon". No salió más.

No se quiere hacer justicia con esas mujeres que fueron fieles compañeras de un jubilado o de un pensionado. En nuestro proyecto pedíamos también que la jubilación mínima fuera igual al salario mínimo.

Voy mencionando estas cosas, porque se dijo: ¿cuál era la solución? ¿Cómo no iba a haber solución? Todos estos problemas la tenían en tanto y en cuanto participaran los propios afectados.

Yo también tengo amigos en la unidad básica, en el partido. Pude haber conocido a un pintor que me haya ayudado en la campaña electoral, pero no lo puedo mandar a administrar una caja, porque quizás no tiene vocación para la solidaridad, para ayudar a los viejos, a esos hombres que, como señalábamos recién, lo dieron todo.

Cuando vimos que había una mala administración de las cajas, la denunciábamos, y empezamos a pedir información. Este Poder Ejecutivo no contestó nunca. Y hay que decirlo así: nunca, en cuatro años, contestó un solo pedido de informes referente a la seguridad social. Y aquí está la prueba evidente, porque en caso contrario la secretaría parlamentaria de este Honorable Senado habría recibido la nota correspondiente.

Aquel proyecto de ley con el que intentábamos llegar en un plazo de cinco años al 70 y al 82 por ciento se "cajoneó". Pero en 1984 seguimos insistiendo con un proyecto de derogación de la ley 20.864, que es una ley muy vieja

que le permite al Estado aplicar multas a evasores. Pero son las multas del pasado, pues no se actualizaron los montos. A algunos les conviene pasarse cuatro o cinco años sin pagar la jubilación, ya que en este país los tontos son los que pagan y cumplen y los vivos son los que no trabajan. De aquí la estadística que leía el compañero senador de Jujuy.

El secretario de Hacienda recién advierte que ya nadie quiere pagar. Ocurre que el individuo se da cuenta de que cuanto más tiempo pase, menos multa pagará. Por eso le conviene ser evasor. Aquí los evasores son premiados. Hay que sacrificar a los que cumplen; a éstos el Estado los tiene perfectamente controlados.

Pero seguíamos trabajando. En 1986 pedíamos la creación del instituto, un poco como parangón de lo que pedía el general Perón. La idea era incluir en el instituto de las cajas existentes con la participación de quienes iban a defender sus derechos, es decir los jubilados, el Estado y los trabajadores activos.

Tampoco logramos nada. Estas cosas no sirven dentro de la democracia. Como parece que siempre, se nos amenazaba con el proyecto que se estaba haciendo en Seguridad Social. Yo no sé quién será el que está haciendo este proyecto porque no lo hemos visto nunca lamentablemente.

Han venido a visitarnos un par de secretarios de Seguridad Social y circunstancialmente tuve la suerte de ser invitado junto con otros senadores, entre ellos los senadores Sapag y Leconte, y estuvimos con el doctor Alfonsín en Olivos. Allí le manifesté mi preocupación por la clase pasiva. Le dije: "Mire, señor presidente, lamentablemente no se nos han elevado proyectos en este aspecto y hay gran cantidad de compañeros que están preocupados por eso". El señor presidente me dijo que él también estaba preocupado porque había adquirido un compromiso muy grande con la clase pasiva. Lo recuerdo porque cuando él habló a la clase pasiva por televisión, fue en el Luna Park, y nosotros ofrecimos amablemente nuestra colaboración. Quedó en llamarnos. Todavía estamos esperando el llamado. Evidentemente, en el país andan mal las comunicaciones.

En 1984 nos ocupamos del reconocimiento de la antigüedad a los efectos jubilatorios de los cesanteados y prescindidos por razones políticas y gremiales. Era una medida auspiciosa para nosotros porque a los compañeros que habían sufrido cárceles y persecuciones les daba tranquilidad, pero el Poder Ejecutivo la vetó. No obtuvimos el reconocimiento que queríamos, pero seguimos luchando.

En el año 1984 le pedimos el pago del aguinaldo para los compañeros jubilados, igual que para los compañeros trabajadores, y en este caso nos escuchó, porque ese proyecto se sancionó y la ley consecuente se aplicó.

Mientras tanto, con respecto a otra caja que no pertenecía a este sistema, como era la de subsidios familiares, había llegado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para retirar fondos por 104 millones de australes de ese entonces y nosotros aquí lo votamos. Sancionamos la ley pero después vinieron como "decretazos" y sacaron 500 millones de australes más. Ya no pidieron más la participación del Congreso; era más difícil por decreto sacar ese dinero de la Caja de Subsidios Familiares.

Yo no digo que ese dinero haya sido malgastado pero evidentemente tenía el fin de preservar a la familia; podría haberse pagado más por hijo, por mujer, por nacimiento, etcétera, pero no ocurrió; se le dio otro fin.

Entonces, seguíamos buscando la forma, con el rol natural que tenía que jugar el Parlamento, para dictar las medidas que entendíamos que le podíamos dar —nuestra idea, como la de otros colegas— para ver si podíamos sacar a los jubilados de esa situación.

Y llegamos así a otro proyecto del que yo era autor. Se refería al derecho del penado en libertad condicional a percibir su jubilación. Queríamos considerarlo pero caducó porque no lo querían tratar.

Luego nos encontramos con la resolución sobre el cese de la intervención y normalización del PAMI, que es lo más importante para los jubilados. Nunca tuvimos respuesta. El proyecto de resolución preguntaba qué pasaba con el PAMI, porque cuando nos incorporamos al Parlamento advertimos que se había aprobado en el gobierno de la dictadura una licitación monstruosa para aquellos tiempos, que era de casi 4 millones de dólares.

A este edificio, que si no me equivoco se encuentra en Avenida de Mayo y Chacabuco, se le cambió todo el mobiliario.

¿Me podría decir algún señor senador de la bancada oficial si sabe cuánto ganan los directores del PAMI? ¿Saben que ganan más del doble de los señores senadores? Parece que es importante en este país ser director del PAMI. Se ve que son importantes estos cargos en los que nadie controla cuánto es el dinero que van a ganar.

Digo esto no porque piense que un legislador tenga que ganar más. Quizá deba ganar menos. Pero debemos convenir en que un jubilado no

puede ganar como mínimo 176 australes. ¿Cómo podemos pretender que un viejo nuestro viva con 176 australes?

Pero también debo decir que hemos presentado un proyecto declarando inconstitucional el decreto 648. Fíjese, señor presidente, que con este decreto mi padre, que tiene ochenta y cinco años va a cobrar 5 mil australes. Casi me mata mi viejo cuando le dije que este decreto es inconstitucional. No lo pueden pagar porque le deben a todos. Quieren arreglar a los de ochenta años para arriba dándoles todo el dinero. A los que tengan entre 70 y 79 años quieren darles el 30 por ciento; a quienes se encuentren entre 60 y 69 años, el 15 por ciento, y entre 55 y 59 años, el 5 por ciento. Eso es lo que establece el decreto 648. Todo eso significa una cifra de 2.320 millones de australes.

¿Saben lo que quería hacer Brodersohn ahora? Tomar este dinero. Por eso tiene esa redacción con respecto al sistema previsional, según se redactó el proyecto en la Cámara baja.

Fíjense qué inteligentes fueron en esa Cámara que modificaron la redacción para las provincias y no lo hicieron para el orden nacional. Es decir que fueron previsores porque quien efectuó la modificación era de una provincia y quería que ella tuviera ese destino. Cuidó a sus compañeros, a sus amigos, pero no lo hizo con los 2 millones 700 mil jubilados y pensionados del país.

Entonces, esta redacción genérica que dice "para el sistema previsional" nos indica que ahora podemos mandar 3.000, 4.000, 4.500 ó 5.000 millones de australes, pero tampoco nos dice cuánto es el dinero que vamos a recaudar. Como la norma dice "para el sistema previsional", es un mal uso que se pague con ese dinero esa deuda que tenemos para este año, porque de acuerdo con el decreto 648, en 1988 hay que pagarla, pero no con este dinero.

¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué va a hacer el señor ministro de Economía o el señor secretario de Hacienda con los aportes que recibe por otro decreto?

Nosotros pedimos la modificación del decreto que durante el gobierno de la dictadura que manejaba Martínez de Hoz hizo que los empresarios no pagaran más el 15 por ciento como lo hacían anteriormente, pero que mediante el IVA y otros impuestos se obtenía la recaudación necesaria y se efectuaba el aporte correspondiente a las cajas.

Trancurrió un año, nosotros lo habíamos dicho antes y por suerte nos entendieron los ami-

gos radicales. Así vino ese proyecto en el que se establecía el 7,5 por ciento de aporte para los empresarios. El resto se tenía que seguir aportando —por esa ley aprobada por la dictadura militar— mediante el IVA y otros impuestos. Lo recaudado se giraba a la Secretaría de Hacienda, y luego ésta tenía que dárselo a la caja.

Por ello, cada vez que vemos en los diarios que dicen que el Estado está subsidiando, yo digo que el Estado no subsidia nada. Está cumpliendo con sus obligaciones. Y si subsidia es porque hay evasores y porque el Estado no los ha sabido perseguir, corregir o multar correctamente. Pero no tienen la culpa los jubilados. Ellos han aportado durante toda una vida. Si los pensionados han recibido ese beneficio, ya sea la esposa o el hombre el que lo recibió, es porque realmente lo merecían. Estas cosas ya las habían hecho Yrigoyen o Perón.

He tomado otro mensaje más, correspondiente a Balbín; un discurso de 1947. Yo sabía estar enojado con Balbín; y le decía a los amigos radicales días pasados que después de que conocí la forma en que transcurrió el final de su vida, me di cuenta de que era un gran hombre, más allá de nuestras discrepancias políticas, porque había muerto en la pobreza, defendiendo sus ideas.

Entonces, tomé el mensaje de Balbín del Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1947, que figura en las páginas 592 a 595 de tomo III. Hay una parte tan linda, que parecía que Balbín hablara como Perón. Dice: "El Estado no otorga una jubilación como premio, sino que la da como obligación de subsistencia a ese individuo que, a su juicio, ya ha rendido todo lo necesario para la Nación." Este es un concepto de Balbín, quien cuando hubo que defender el sistema previsional de seguridad social, lo hizo con la altura que correspondía.

En la parte final habla de los maestros, de la necesidad de considerar mejor a los educadores mediante una ley. Esto lo dice en 1947. Expresa: "... porque el Congreso habría de preocuparse de la estabilización definitiva del jubilado. Si así no hubiera sido el propósito de la Cámara..."

Pero lo más importante figura al final: "Ese es el concepto fundamental de esta modificación. La Cámara va a volver sobre estas cuestiones al tratarse los otros sistemas jubilatorios, y habremos de continuar este debate. Si entra en preocupación la Cámara, si comprende el sentido de justicia que tiene la disposición, si com-

prende, en definitiva, que su financiación será posible y que a posteriori se tendrá la certeza para todo el mundo de que la retribución o el salario es la compensación de un esfuerzo en relación con el costo de vida de un instante, habremos entrado todos en razón y veremos que en un futuro próximo el hombre sabrá que gana en relación a su trabajo y al medio donde trabaja..."

A veces me pregunto por qué no se quiere reconocer la actualización de los sueldos que nosotros pedimos. Si un hombre trabajó como oficial, ¿por qué no reconocérselo?

Balbín, en la parte final de ese discurso, decía: "...pero la compensación tendrá siempre un solo destino: hacer vivir decorosamente dentro del medio que sirvió para que prosperara o se educara. Ese es el sentido de esta ley, porque ahora, los que estamos en actividad, trabajando y tenemos fuerzas para hacer el trabajo real, vemos con profunda pena que otros hombres golpean a nuestra puerta todos los días y a todas las horas, porque, amantes de un mejoramiento que ellos vislumbraron cuando daban su esfuerzo al Estado, comprenden que son las únicas víctimas del progreso de la Nación".

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Adolfo Gass.

Sr. Britos. — Es decir, nosotros progresamos y las víctimas son todos aquellos que trabajaron por nuestra patria. Y en este sentido, señores senadores, compañeros, ha llegado el momento de que hagamos Justicia. Tenemos esa gran responsabilidad, que no la podemos seguir delegando, diciendo que nuestros hijos o nietos podrán arreglar la situación. No. Nos tocó este momento de crisis y no lo podemos pasar ligeramente con una ley que se volverá sobre los que tienen menos, porque las recaudaciones correspondientes a las leyes 22.293 de 1980 y 23.081, que sancionamos aquí, siguen yendo para la Secretaría de Hacienda.

Entonces, tenemos que a este monto que se aplicará ahora se le dé otro destino, que no necesariamente será irregular, ya que también es para la seguridad social, pero con él no coincidimos.

Nosotros queremos actualizar los sueldos. El salario actualizado de un jubilado, tomando como base diciembre de 1983, sería de 464 australes en diciembre de 1987. Los jubilados en este momento están percibiendo alrededor de 180 australes mensuales. ¿En qué estamos? Debemos pensar que en la administración pública

hay sueldos que pasan los 10.000 australes. Porque los tenemos; nosotros los avalamos cuando levantamos la mano aquí y aprobamos el presupuesto. Frente a estos sueldos debemos pensar que nuestros jubilados tienen que vivir, como acabo de decir, con 180 australes.

Reconozco, como manifesté más de una vez, la crisis. Pero debemos tratar de equilibrar esto un poco, de distribuir mejor la riqueza. Debe haber más equidad. Y no es culpa solamente de ustedes los radicales. Nosotros también tenemos una corresponsabilidad.

Todos los días, cuando vengo caminando, me encuentro en la Caja con la gente; hay muchos ferroviarios. Me preguntan, siempre esperanzados, y yo me siento con la impotencia de no poder cambiar las cosas; me siento mal. Porque, como decía Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se ha realizado. Yo no me puedo sentir bien mientras tantos hombres andan golpeando puertas.

Cada vez que me encuentro con el compañero De Salvo, que tiene ochenta y cinco años y que era del Partido Comunista y dirigente mío en la Unión Ferroviaria, y con Scipione, de la Unión Cívica Radical, por quien tengo el más grande de los respetos y a quien veo todavía trabajando por sus pares, por los jubilados, me llena de emoción, me conmueve su fuerza espiritual. Más allá de que yo no comparta sus ideologías, debo rendir homenaje a esos hombres porque siguen trabajando. Hace poco moría una vieja compañera, Fanny, que tampoco era peronista; ella misma decía que era socialista. Murió trabajando por ese grupo de compañeros.

Pedimos también una declaración sobre los coeficientes porque apareció un coeficiente para pagar a los jubilados; no sé con qué máquina lo hicieron. Pedíamos información sobre los coeficientes de actualización utilizados para abonar los haberes jubilatorios, que reducen a menos de la mitad lo que establece la ley previsional. Sin respuesta.

Solicitamos un informe sobre la gestión del sistema de recaudación previsional; es lo más importante porque allí va todo el dinero. Sin respuesta. Anda mal el correo...

Pedimos un informe sobre el cumplimiento de los convenios de corresponsabilidad de los trabajadores rurales, del tabaco, algodón, etcétera. Sin respuesta. Antes pagaban por alrededor de quinientos mil compañeros. Actualmente no se paga ni por treinta y cinco mil. Es más o menos la estadística que estaba haciendo el compañero por Jujuy. Y la corresponsabilidad es fácil de sacar,

¿No sabemos, acaso, que ninguna de las estaciones televisoras del Estado paga? Lo sabemos; todos los años levantamos la mano y damos la autorización para ello. Ninguna paga. Los amigos de algún equipo de fútbol también lo hacen, y pasa.

Vivo solicitando la normalización definitiva del PAMI. Nos hicieron el teatro de que se había normalizado. Pero no se normalizó, señor presidente. Los jubilados no participaron para nada.

Hay un aporte del uno por ciento para el PAMI, que hacemos todos; un aporte del 3 por ciento y, finalmente, un aporte de todo este sistema previsional. En este impuesto que se pretende sacar deber ir el 10 por ciento para el PAMI. Si no, no existiría. Sin embargo, en este proyecto que han estudiado tan bien han omitido dar el 10 por ciento para el PAMI. Entonces, ¿cómo lo vamos a sostener?

Por eso, los viejos andan en el interior golpeándole al farmacéutico para ver si les entrega un remedio y el farmacéutico no se lo da porque PAMI no paga.

Cuando se consideran estas grandes leyes parece que, inteligentemente, se evitan estos artículos. Entonces, de esta ley PAMI no recibe nada. Hay una ley nacional que establece que de cualquier entrada de esta naturaleza, un 10 por ciento es para PAMI. Pero por este proyecto no hay ni cinco centavos para PAMI. ¿Cómo va estar preservada la salud de nuestros abuelos si nosotros no lo contemplamos?

Cuando se dictó el decreto 648, dentro de las ilusiones que a veces uno tiene cuando es legislador, había preparado un proyecto por el que se rechazaban los decretos 2.198/86 y 648/87, de emergencia previsional, por inconstitucionales. Este es el proyecto del que le hablaba hoy, que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales pero todavía no tengo una respuesta.

Y hay más, señor presidente. En 1986 pedimos la presencia del señor ministro de Economía para que informara sobre el estado del sistema previsional. Ese pedido está desde el año 1986 en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

O sea que nosotros, como senadores de la Nación, no pudimos traer nunca al ministro para que informara. Sin embargo, estos días hemos tenido la visita permanente del señor secretario de Hacienda, doctor Brodersohn, que cuida naturalmente los intereses que a él le importan. Pero cuando tiene que informar sobre lo que se hace con los bienes del Estado, no

viene. Nosotros queríamos preguntarle —la Constitución nos permite hacerlo como legisladores de la Nación— qué es lo que pasa con esa participación. Pero no lo hemos conseguido, señor presidente.

Tengan en cuenta que cuando nosotros decíamos que los decretos de emergencia previsional eran inconstitucionales, la Corte ya había determinado que los jubilados tenían razón. En ese momento se publicó en la prensa que si la Corte le daba la razón a los jubilados el Estado tenía que pagarles casi 6 mil millones de dólares. En ese momento la deuda externa era de alrededor de 50 mil millones de dólares y se decía que iba a ascender a 56 mil millones porque a los jubilados había que pagarles 6 mil millones.

Esa no era la verdad. Eran alrededor de 600 millones de dólares los que había que pagar, cuando nosotros anunciamos esto.

En un diario de la mañana del día de ayer —"Clarín", para más datos— se publicó un titular que decía que se reemplazarían decretos y se derogaría la emergencia previsional. En uno de los puntos dice lo siguiente: "De hecho, el nuevo régimen transitorio tendría que incorporar algunas características con suficiente 'gancho' como para ponerlo en condiciones de superar con éxito la oposición que encontrará naturalmente en el Congreso. Hay que borrar ciertas desprolijidades que existen en los decretos". Habla de cierta desprolijidad cuando los decretos son inconstitucionales. ¿De qué desprolijidad me hablan?

Yo no soy constitucionalista, no soy un hombre de derecho, pero dije que el decreto de emergencia previsional era inconstitucional porque la Corte, que representa a otro poder, así lo había determinado.

Parecería que el Poder Ejecutivo pensara que este gobierno está constituido solamente por ese poder. Así, no existiría Congreso y no existiría Poder Judicial. Pero los poderes de la Nación son tres. Y si nosotros sacamos a la dictadura militar era justamente para que estos tres poderes funcionaran.

Entonces, cuando nosotros desconozcamos a uno de esos poderes, va a ser inconstitucional. Cuando desconozcamos al Parlamento por supuesto que será inconstitucional.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Britos. — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — Yo valoro mucho lo que está diciendo el señor senador por San Luis y en muchos aspectos lo comprendo.

Si el bloque justicialista tiene el deseo o la necesidad de que concurra al Senado algún ministro o algún secretario de Estado, conversémoslo y lo vamos a lograr, porque en el corto período que hace que soy senador ya he visto desfilar a varios ministros y secretarios de Estado que vinieron al recinto para ser interpelados.

Quisiera recordarlo al amigo, colega y compañero Britos que, cuando compartimos la labor en la Comisión de Trabajo, en el período 1973-76, siendo yo vicepresidente de la misma, jamás llegué a conocer al ministro del área, ni de visita. Lo conocía solamente por las fotos de los diarios. Nunca pude lograr que fuera invitado tan solo a una reunión de la Comisión de Trabajo, no a una interpelación.

Y eso fue a pesar de que, como recordará el señor senador por San Luis, en aquel entonces se trataron leyes importantes como la 20.615 y otras que no recuerdo ahora.

De manera que superemos esos problemas. Evitemos esos errores. Considero que lo pasado en aquel entonces, que la oposición no pudiera acceder al diálogo con los hombres de gobierno, era un error.

Si ahora nosotros estamos cometiendo el mismo error, creo que podemos ponernos de acuerdo. Porque nuestro bloque no tiene problemas de que cuando los demás señores senadores tienen necesidad de conversar con algún ministro, se lo invite a venir. Han venido muchas veces, y si realmente el señor senador Britos desea que venga un ministro, no creo que haya problemas en nuestro bloque para invitarlo a que venga acá al recinto y dialogue y nos dé los informes que la oposición considere necesarios.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Gass). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Sí, señor senador, y le agradezco. Pero yo me dirigí solicitando la presencia de acuerdo al sistema parlamentario. Yo no necesito de amigos para llamar al ministro.

De ninguna manera puedo declinar los derechos que tengo como legislador. Si me voy a manejar con los amigos, no sería senador. Creo que se cometía un error en nuestro gobierno, que puede haber sido como bien lo decía el señor senador; pero no volvamos a incurrir en esos errores.

Quería finalmente, señor presidente, decir que en lo que respecta a la participación de Hacienda, el año pasado votamos en el presupuesto para seguridad social teniendo en cuenta lo que

se preveía iba a ser el aumento de las cosas: un 42 por ciento. Hace un rato decía el señor senador Martiarena que él estimaba que el desfasaje era de alrededor del 200 por ciento. Nosotros hemos logrado la información: el 172 por ciento en 1987.

Lo que ocurre es que el Estado cuando hace la propuesta del presupuesto dice el 42 por ciento, y después la Secretaría de Hacienda le da a los jubilados lo que corresponde al 42 por ciento que ha presupuestado; no les reconoce el desfasaje, y esto finalmente durante el año no alcanza a cubrir ni el 4 por ciento del 7,5 que tiene que proveer el Estado a las cajas.

En esas condiciones las cajas han quedado en un estado en que todos los empleados se quieren ir; se han ido casi 3.700 empleados del Estado. Entonces, ahora cuando uno lleva un certificado para agregar al expediente a la Caja del Estado, el certificado llega probablemente a los seis o siete meses, porque no hay empleados.

Las cajas perciben mal porque se paga en negro. Las cajas perciben mal porque en este país de las evasiones, esto es lo primero que los contadores, con mucha picardía, naturalmente, enseñan a los empresarios.

Yo le decía al ministro de Trabajo, doctor Tonelli, que ustedes, los radicales, pagaron una factura que no les correspondía el 6 de septiembre pasado. La paga el radicalismo porque tiene un ministro de Economía de lujo, muy capaz, el doctor Sourrouille; es muy capaz porque está tratando de cumplir con el Fondo... Pero yo le daría de comer primero a mis hijos y después, si queda, a los gringos del Norte...

Entonces, nos encontramos con que estas cajas están sufriendo las consecuencias de la evasión por los pagos "en negro", porque no teníamos la ley que votamos el otro día, la que modificó la 14.250, por la cual los convenios se pueden discutir libremente.

Le decía al ministro de Trabajo que para mantener a un buen operario los empresarios le están pagando "por debajo de la mesa", en negro. Es decir, le pagan lo que decía el Estado en función de la facultad que le otorgaba la ley para fijar los salarios y el resto va "en negro". Le dan 220 australes —todos sabemos que nadie puede vivir con eso— y "por debajo de la mesa" le pagan otros 280 australes; entonces, el aporte a la Caja es sólo por la primera cifra. Esas son las condiciones en que se encuentran las cajas.

Ahora, metemos este "tarifazo" y van a ver que cada vez que alguien se acerque a una estación de servicio se van a acordar de noso-

tros, radicales y peronistas, y de toda nuestra familia. (Risas.) Dicen que nosotros hemos arreglado con ustedes este asunto. Por eso temo que en junio tengamos que hacer otro ajuste para ver si nos acercamos a un aumento real. Tal vez en diciembre haga falta hacer otro más y así no se puede seguir.

No interesa que aquí vengan a hablar de los que aportan. ¿Y los dos millones y medio de personas que no aportan, por qué no lo hacen? ¿Es culpa de los jubilados esta evasión? ¿Qué es lo que está pasando? Todos sabemos la cantidad de personas que trabajan en el país y también sabemos que hay un millón doscientos mil desocupados. ¿Por qué aquellos que tienen más aportan tan poco? Sabemos que hay señores profesionales que dicen: "Acá tengo el recibo", pero aportan el mínimo, lo mismo que un peón de albañil, y se justifican plenamente ante la sociedad diciendo que ellos también aportan. La única diferencia es que ellos ganan ocho o diez mil australes por mes y los otros, los compañeros obreros, ganan doscientos australes por quincena, lo que es mucho decir.

Entonces, todo esto es lo que tenemos que tratar de salvar y no lo haremos mediante estas leyes, que pretenden juntarnos con un montón de dinero. Esto es lo que nos ha dado no digo bronca pero sí la necesidad de sincerarnos. Creo que nosotros, ustedes y los partidos provinciales tenemos que buscar la forma de solucionar estos problemas y darle participación a los compañeros jubilados. Ellos están esperanzados en nosotros, y no es porque sean peronistas, socialistas o radicales los jubilados. Los hay de todos los colores políticos. Pero están esperanzados en que nosotros les demos respuestas.

Yo ya no sé qué decirle a mi viejo. "Vos hace cuatro años me dijiste que hiciste una ley." "Bueno, papá, pero esto lleva un tiempo parlamentario." "Pero la ley es la ley", y me enseña la boleta. Tantos años trabajando, y no le puedo poner a mi viejo cien australes en el bolsillo, por más que lo quiera hacer; tiene dignidad el viejo, todos los viejos son así. Parece que no quieren ser una carga para los hijos. Y es el deber nuestro, como políticos, interpretar el sentido con que trabajaron los hombres que hicieron este país.

Por eso, no estoy para nada de acuerdo con esto. Ibamos a pedir una modificación, pero sabemos también de las necesidades del momento en que se vive, y solicitamos la introducción de una redacción interpretativa para asegurar que la Secretaría de Hacienda no tome estos recursos para pagar la deuda del decreto 648, y se los dé a los jubilados. Si esto sucediera, los

jubilados alcanzarían unos 340 o 350 australes por mes. Con esto apenas llegaríamos al salario mínimo, pero por lo menos mostraríamos que estamos preocupados por la situación de este sector, y tendremos que seguir trabajando hasta que alcancen niveles aceptables.

Tenemos que comprometernos a esto los cuarenta y seis senadores. Ellos están esperanzados en nosotros, en los doscientos cincuenta y cuatro diputados, en el Ejecutivo que preside el doctor Alfonsín, en los ministros y en el secretario de Seguridad Social. Precisamente, hace pocos días estuvimos con el secretario de Seguridad Social, quien nos invitó a una reunión.

Queríamos hablar con él porque se estaba redactando un proyecto. Eran las diez de la mañana de un jueves, hace tres meses. Postergaron la reunión para la semana siguiente, luego para la otra, y así sucesivamente, de modo que no pudimos reunirnos nunca. Y esto pasó con el secretario de Seguridad Social, un amigo, el doctor Bigatti. Entonces, la cosa no va por ahí.

Ahora publican los diarios que se estaría elaborando otro proyecto. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Queremos participar, ayudar, colaborar. Queremos pedirles a los amigos de las provincias, al MID, que también colaboren, para ver si entre todos podemos dar una solución.

Yo no quiero venir dentro de seis meses a levantar la mano por un decreto. Hoy lo voy a hacer. Ustedes no saben las diferencias que hemos tenido entre nosotros, los peronistas, sobre el tratamiento de este proyecto. Tal vez como ha sucedido también entre ustedes, hemos discutido en profundidad. Sabemos que ustedes tomaron un país en crisis, que no han podido superar el problema de la enorme deuda externa. Pero esperábamos que, de una u otra forma, sincerándonos, pudiéramos salir de esta situación.

Yo voy a estar hoy con ustedes, pero quiero que juntos hagamos lo otro. Les propongo eso. Que en nuestra comisión podamos trabajar. Si nos equivocamos con correligionarios del Chubut en el período anterior, no quiero que ahora se equivoquen ustedes. No quiero errores para mis hijos y nietos. Mis viejos me han entregado un país, y quiero pasárselo a mis nietos sin errores. (¡Muy bien!)

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía. — (Lee) "Señor presidente: una recaudación impositiva sensiblemente menor a la esperada para este año, y consecuentemente un déficit fiscal fuera de control, han llevado a las autoridades económicas a proponer la instrumentación de un paquete fiscal que, modi-

ficado por la Honorable Cámara de Diputados, es el que debemos tratar y aprobar en la sesión de hoy.

Debemos señalar nuestra convicción de que las medidas propuestas en este paquete —excluyendo el acuerdo de coparticipación federal— son de carácter ambiguo. En primer lugar, tenemos algunas de ellas, como la modificación en el impuesto a las ganancias, que eliminará gradualmente la posibilidad de acumular quebrantos, que muestran un sentido de justicia.

En segundo lugar, aparecen los impuestos a los combustibles, cuyos incrementos permitirán sobrellevar temporalmente la dramática situación que atraviesa la clase pasiva del país, como resultado de una política de destrucción de las cajas de servicios sociales que se instrumentó durante la última dictadura militar.

En tercer lugar, la mayor recaudación que se espera lograr con estas medidas, incluyendo la posibilidad de que ahora se considere coparticipable el impuesto a los combustibles, aparece como un respiro transitorio para las provincias, que podrán así percibir los montos de impuestos que les pertenecen para afrontar salarios y otras obligaciones.

Pero el carácter ambiguo de estas medidas surge del hecho de que, tras su aparente justicia, se trata nada más que de un parche que estamos aplicando en las finanzas del país para sobrellevar una situación de emergencia, y tenemos la dura convicción de que estos recursos se escurrirán como arena seca de entre las manos sin una contrapartida productiva, dejándonos un regusto amargo al comprobar que este nuevo esfuerzo que le estamos imponiendo al país será totalmente infructuoso. Es por ello que nuestro mensaje no es optimista.

No puede serlo porque hace pocos meses en el momento en que aprobamos el presupuesto nacional para 1987, advertimos con total claridad a este honorable cuerpo que la pauta de inflación del 42 por ciento iba a ser desbordada y que el déficit del 4 por ciento estimado, seguramente terminaría siendo un número que serviría solamente para compararlo con el déficit real, que lo duplica holgadamente al finalizar el año. Todo esto porque, según lo señalamos en su momento, las causas reales de la crisis no fueron atacadas.

Denunciamos entonces nuestra dependencia de las condiciones que nos imponen los acreedores externos, verdaderas imposiciones recesivas que nos llevan a una emergencia creciente que termina siempre resolviéndose con devaluaciones que abaratan el trabajo argentino para los com-

pradores extranjeros, a la vez que deterioran el nivel de vida de nuestros compatriotas y revierten en una creciente espiral inflacionaria.

Señalamos en ese momento que con un sistema que privilegia a la especulación financiera por sobre la producción, esta última no es posible. ¿Y qué respuesta encontramos a todos estos planteos? Iniciativas de desregulación de las empresas nacionales, mayores embates en torno a las ideas de privatización y capitalización de la deuda externa y, finalmente, tasas de interés impulsadas por las autoridades económicas que se han situado casi en un 30 por ciento mensual, hace pocos días, mientras sigue decayendo la actividad económica.

Es por todo esto que cuando se nos pone en la disyuntiva de votar este paquete impositivo diciéndonos que en caso contrario no habrá fondos coparticipables ni solución para el drama de los jubilados, pero no se nos ofrece un nuevo plan económico, tenemos la sensación de que los representantes de una parte importante del país, quienes plantean las medidas económicas, han perdido el rumbo.

Cuando se nos dice, desde una posición de poder, que generar empleos en las provincias es un error, sentimos que se ha perdido el rumbo. Y cuando se nos pone en la disyuntiva de hierro de votar este paquete de medidas o no tener soluciones, pero no se escuchan nuestros razonamientos ni el clamor de un pueblo que el 6 de septiembre último elevó una queja ilevantable, se ha perdido el rumbo. Porque la respuesta a ese clamor queda reflejada en medidas de carácter recaudatorio que excluyen un plan económico que aliente la producción, que incremente las posibilidades de trabajo y produzca una distribución más justa de la riqueza, que es fruto del esfuerzo conjunto.

Presionado por la disyuntiva de hierro a que hice referencia, voy a votar por la afirmativa este paquete, pero quisiera tener por lo menos un indicio de que todos los legisladores aquí presentes, a quienes respeto y aprecio personalmente y como representantes del pueblo de las provincias, vamos a discutir algún día, que espero cercano, algo más que resignadas medidas de emergencia, algo más que simples ajustes a un plan de retroceso, porque tengo la íntima convicción de que ese día habremos dado un paso sin retroceso. El respeto y la gratitud de la mayoría de nuestros sufridos compatriotas, así lo requiere".

Sr. Presidente (Gass).— Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — Señor presidente: he recortado sustancialmente lo que pensaba exponer, dado lo avanzado de la hora y, además, porque ciertos puntos relacionados con la parte jurídica y constitucional han sido brillantemente desarrollados por los senadores por Corrientes, Catamarca y Jujuy. En algunos temas, quizás, sea reiterativo.

(Lee) "A pesar de esto, ingreso a este debate con una profunda preocupación. Una vez más nos vemos obligados a tratar temas de singular importancia bajo la presión de la urgencia y en función de acuerdos de los que no hemos participado y acerca de los cuales ni siquiera hemos sido consultados.

Entendemos que no es sano para la vida de la democracia y para la transparencia que debe rodear al funcionamiento institucional que el correcto trámite parlamentario sea reemplazado por esta práctica que se está convirtiendo en hábito, de introducir los temas entre gallos y medianoche, para decirlo con una expresión coloquial.

Señor presidente: lo digo con todo respeto pero también con total responsabilidad; no es serio considerar sin despacho de comisión y sin que hayamos podido enterarnos y ser asesorados con la debida antelación del texto sancionado por Diputados, un paquete impositivo que implique una transferencia de ingresos del orden de los tres mil millones de dólares.

Es una anomalía más de las que rodean todo lo relacionado con las finanzas públicas.

En ocasión de la tardía discusión del proyecto de presupuesto para el ejercicio 1987, denunciábamos que debía ser rechazado de plano pues, en rigor de verdad, no era un presupuesto. Los hechos nos dieron la razón. La arquitectura dibujada en la Secretaría de Hacienda se desmoronó estrepitosamente.

A pesar de la falsa información oficial precisa, es sabido que el déficit presupuestario oscila alrededor de los siete puntos del producto bruto interno, porcentaje al que debe agregarse el déficit cuasifiscal del Banco Central, con lo cual arribamos a valores que se acercan peligrosamente a los dos dígitos, siempre en relación al producto bruto interno. En cualquier país del mundo esto significa un verdadero desastre.

Sin embargo, no hay un solo reconocimiento de responsabilidad, no hay un solo gesto autocrítico. Por el contrario, la conducción económica que nos llevó a este callejón sin salida y que mereciera el repudio popular en los comi-

cios del 6 de septiembre, recibe un insólito respaldo presidencial y es premiada ante el asombro de propios y extraños, con la calificación de equipo de lujo. No niego su capacidad técnica, pero sí un desconocimiento casi total de la realidad política, económica y social de las distintas regiones del país.

Señor presidente: como legislador de la Nación, representante de una provincia, me pregunto lo siguiente: ¿podemos aceptar que el Poder Ejecutivo no cumpla con la ley votada por el Parlamento y que ni siquiera haya enviado un proyecto de reformulación del presupuesto de 1987 con el consiguiente detalle de la ejecución? ¿No hiere esto insalvablemente el espíritu y la letra de las instituciones republicanas? ¿No implica un grave atentado contra la Constitución y las leyes básicas que hacen al ordenamiento del Estado y al funcionamiento de sus poderes? ¿No significa acaso un preocupante demérito de nuestra condición de legisladores de la Nación?

Tampoco sabemos, señor presidente, cuánto y cómo va a recaudar y a gastar el Poder Ejecutivo y mucho menos en qué sumas va a seguir endeudándose, pues no contamos aún con el proyecto de presupuesto para 1988. A pesar de todo ello se nos pide que autoricemos una transferencia de ingresos que equivale a unos tres mil millones de dólares. Tres mil millones de dólares que serán restados a la inversión productiva y al ya alicaído consumo, para volcarlos a la atención del gasto improductivo de un Estado, tanto más ineficaz cuanto más adiposo.

Mucho podría decirse, y seguramente nada bueno, acerca de los instrumentos tributarios que se disponen, comenzando por la grave deficiencia de técnica legislativa que implica incluir en una sola ley, con carácter de ley ómnibus —que yo más bien la llamaría de un tren fantasma, con varios vagones, por lo terrorífica—, varios tributos que son de naturaleza sustancialmente distinta.

Entendemos que la escasa seriedad que rodea a esta propuesta es razón suficiente para descalificarla sin entrar en su discusión técnica pormenorizada.

Estamos, lisa y llanamente, frente a otra evidencia del fracaso de la política económica oficial, reiteradamente denunciado por el desarrollismo y hoy por encumbradas figuras del partido gobernante; todo esto frente a la pasividad de un gobierno cuya capacidad de respuesta parece agotada, limitándose en conse-

cuencia a responder mecánica y resignadamente a los problemas que sus propios errores provocan.

Se usaron todas las recetas de la farmacopea monetarista, combinadas con instrumentos del peor arsenal estatista, entre ellos los controles de precios y salarios, sin que se haya logrado éxito alguno contra la inflación. Lejos de eso, la experiencia de los últimos meses demuestra que ella mantiene su pertinaz recurrencia, pues están intactas y agravadas las causas de fondo que la provocan.

Entre tanto, la actividad económica languidece. Todas las cifras relativas a la producción de las diversas ramas de la economía indican una fuerte caída, especialmente pronunciada en noviembre y diciembre.

Se nos había dicho a fines del ejercicio 1986 que 1987 sería el año del crecimiento —fue el propio presidente de la República quien insistió en este tópico. Sin embargo, ingresamos a 1988 inmersos en una onda recesiva, cuya expansión amenaza con un colapso que, en rigor de verdad, venimos bordeando permanentemente a la manera de quien transita por un camino de cornisa orillado por dos precipicios.

Estas medidas no harán más que acentuar la recesión, reducir el consumo, agravar el crítico cuadro de las finanzas empresarias y ahuyentar a la ya casi inexistente inversión. Todo ello ni siquiera será suficiente. Tal como lo anticipamos cuando se discutió el presupuesto del año 1987 nos animamos a vaticinar ahora que en plazos seguramente cortos se nos volverán a plantear nuevas transferencias.

Estamos girando en torno a un círculo vicioso. Si no hay crecimiento será imposible reducir el gasto público, pues no habrá empleo productivo para los brazos vacantes y las privatizaciones no podrán prosperar por más que la retórica oficial insista en batir el parche sobre ellas. Nadie tendrá interés en comprar activos estatales desvalorizados en un país en el que el mercado interno se achica, las tasas de interés devoran patrimonios y la inversión productiva es penalizada. Si no hay reducción del gasto, el Estado, a su vez, seguirá arrebatando fondos a la actividad privada para esterilizarlos en su dispendio improductivo.

El círculo se cerrará por vía de la reducción de la recaudación fiscal. Por más que la imaginación de los técnicos de la Secretaría de Hacienda siga trabajando a destajo para generar nuevos tributos, hay una realidad de hierro que no puede solayarse. La tributación se reduce cuando se achica la base imponible. El caso de las naftas es ilustrativo. En los últimos tiempos es notorio que frente a cada nuevo aumento

tiende a disminuir su consumo. Un fenómeno que se agravará en la medida en que las condiciones económicas generales se hacen más duras y difíciles.

Mientras tanto, cabe preguntarse: ¿qué medidas efectivas propone el gobierno para el crecimiento? Una palabra que solamente figura en los discursos presidenciales pero que, aparentemente, no existe en el léxico de la conducción económica. De crecimiento sólo se habla a la hora de la retórica, cuando se pretende hacer comulgar al país con planes fantasiosos acerca de futuros desarrollos de industrias de punta, en una economía que ni siquiera puede solventar aquellas actividades tradicionales para las cuales contó alguna vez con las ventajas comparativas derivadas de la excelencia de los suelos y la bonanza del clima.

El paquete impositivo que se somete al tratamiento de este cuerpo es parte de una errada política; pero es algo más: representa el testimonio de la incapacidad de las dirigencias para asumir el sentido esencial de la crisis y elaborar soluciones acordes con las posibilidades del país, las aspiraciones de su pueblo y las urgencias de los tiempos de aceleración que vivimos.

Por estas razones, señor presidente, votaré contra el proyecto en discusión. No es que nos neguemos los desarrollistas a darle salida al gobierno ni que no compartamos el objetivo de afianzar la gobernabilidad del sistema. Pero sostenemos que no es con medidas de este tipo como lo lograremos. Por el contrario, lo único que haremos será pretender tapar con medidas de alcances cortos y largo efectos negativos, la evidencia de una crisis que se expresa en todos los órdenes de la vida nacional y que reconoce su epicentro en el campo de lo económico social.

Se aduce, por ejemplo, que parte de la recaudación será afectada especialmente al sistema previsional, pero se articula un dispositivo perverso. Los magros incrementos que se aplicarán a los ingresos de la clase pasiva serán rápidamente devorados por el efecto combinado de los aumentos de los combustibles y de las tarifas públicas, con sus repercusiones sobre la vida cotidiana y las estructuras de costos de las empresas.

El llamado ahorro obligatorio o forzoso, conforme a la terminología más en boga, implementado en su momento por única vez, reaparece ahora en una versión aumentada y corregida, cuyo efecto será el de restar credibilidad al go-

bierno y a su política económica y generar inseguridad entre los agentes económicos, pues afecta el derecho de propiedad al disponer el Estado, por un acto unilateral, de la transferencia autoritaria de recursos desde los patrimonios particulares a sus arcas.

Idénticas consideraciones podrían formularse acerca de los demás tributos incluidos en este paquete. Ninguno de ellos responde a los principios clásicos de la buena política impositiva. Se trata de meras improvisaciones urgidas por las circunstancias; improvisaciones que tienden a transformar, cada vez más, a la estructura impositiva nacional en un gigantesco galimatías, sin otra inspiración ni otra racionalidad que la vocación fiscalista.

Por lo tanto, vale la pena recordar en este punto que en 1984 presenté un proyecto de creación de una comisión bicameral con asesores propios y de la Dirección General Impositiva para el estudio y racionalización del sistema impositivo conforme la realidad económica de todo el país, el que a pesar de haber recibido aprobación de este cuerpo, nunca fue implementado.

Gobierno y oposición, partidos políticos y sectores sociales deben comprender definitivamente que la solución de los problemas argentinos requiere de una reversión global de la política económica en vigencia.

Ya no hay margen para nuevos emparches o remiendos. Tampoco para negociaciones que sus traigan la cuestión de los temas de fondo y se agoten en el abordaje de situaciones precariamente coyunturales.

La democracia argentina requiere de su Parlamento, de sus hombres políticos y de sus dirigentes sociales, actitudes que los pongan a la altura de la circunstancia dramática que enfrenta la Nación. Las soluciones existen. Frente a la resignación, frente al atraso, frente al peligro cierto de graves enfrentamientos sociales, frente al riesgo de la disgregación nacional hay una alternativa posible: movilizar el amplio catálogo de riquezas que posee nuestro territorio. Hace falta solamente la decisión política y la lucidez para implementar un programa coherente que ponga sobre sus pies a una economía que hoy está parada sobre su cabeza. Mientras ello no ocurra, seguiremos encerrados en el falso brote de las contradicciones y las incoherencias. Los desarrollistas lo decimos con la responsabilidad con que siempre hemos formulado nuestros juicios; también con nuestro razonado optimismo acerca de las posibilidades del país y como un aporte constructivo y sin resentimientos

para que podamos encontrar los caminos adecuados para superar la crisis que nos agobia."

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Gass). — Perdón. Señor senador Conchez: ¿usted pide la palabra para hacer una propuesta?

Sr. Conchez. — Deseo hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Gass). — Está bien; está anotado.

Sr. Menem. — Señor presidente: a esta altura del debate parecen haberse esgrimido ya prácticamente todos los argumentos en favor o en contra de esta ley impositiva. De todos modos, como manera de fundamentar mi voto, voy a reducir sensiblemente la exposición que tenía pensado hacer.

Me voy a limitar simplemente a efectuar algunas reflexiones que me motiva este paquete impositivo, reflexiones que van a parecer un poco desgranadas pero que, de todos modos, creo que servirán para traducir mi pensamiento sobre el tema.

(Lee): "El sometimiento de este paquete impositivo al Congreso es el reconocimiento más categórico del fracaso total y rotundo de la política económica del gobierno nacional. La subordinación a los esquemas del Fondo Monetario Internacional, la conservación de la hegemonía del sector financiero en detrimento de la producción, la orientación exclusiva hacia las exportaciones, entre otras causas, han traído este resultado. Y las consecuencias sociales de tal política —desocupación, crecimiento irrisorio del producto, distribución regresiva del ingreso, incremento de la economía negra— han adquirido dimensiones que convierten a estos rasgos en características casi estructurales.

Cuando se lee el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el denominado paquete impositivo, se advierte que se habla de virtual emergencia y de arbitrar soluciones perentorias; pero tales conceptos no están referidos a la marcha global de la economía sino sólo al déficit presupuestario.

Es que el gobierno nacional parece que sabe escuchar muy bien a los funcionarios internacionales que se alarman por las proporciones crecientes del déficit estatal, pero no tiene igual capacidad auditiva cuando las voces que se alzan son las de los sectores populares cuyo pronunciamiento fue categórico el pasado 6 de septiembre.

Uno de los objetivos perseguidos es reducir el déficit fiscal. A través del presupuesto aprobado para el presente ejercicio éste había sido estimado en un cuatro por ciento del Producto Bruto Interno, sin embargo, los cálculos oficiales sostienen que la ejecución revela que el déficit ha sido más que duplicado.

¿Cuáles fueron las razones para este incremento? En alguna medida, los gresos fueron superiores a los previstos, pero el elemento fundamental está dado en los ingresos, muy inferiores a los que se habían calculado. Y el paquete impositivo trata de cerrar esta brecha.

El señor presidente de la Nación y su ministro de Economía se han encargado de reiterar la inelasticidad de los ingresos fiscales en el corto plazo, y para ello la han ejemplificado con los gastos en personal. El argumento es verdadero pero el ejemplo no es del todo certero. Recuérdese que casi el 10 por ciento de los gastos del Estado están destinados a los servicios de la deuda. Estos, pactados a tasa variable y con cláusula de reajuste, frente al proceso devaluatorio constituye el verdadero factor inmodificable del gasto público.

En cuanto a los gastos en personal no vale la pena acercar cifras para reconocer lo que todos saben: el continuo deterioro salarial de los agentes públicos y, como afirma el señor ministro de Economía en un reportaje concedido a un matutino local llamado "Página 12" del día 27 de diciembre próximo pasado, "mucho menos probable un destino venturoso para alguien que trabaja en Ferrocarriles Argentinos".

Quedan, así, por ajustar los ingresos fiscales. En el debate producido en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre se aportaron algunos datos muy ilustrativos acerca de la distancia entre el cálculo de lo que se recaudaría y lo efectivamente ingresado.

Tanto el blanqueo como la simplicación del IVA han aportado mucho menos de lo estimado.

Lo cierto es que, en valores constantes, los recursos tributarios del presente ejercicio son inferiores a los del anterior. Se tiene, pues, que la política económica no es factible discutirla, que la disminución del déficit es sólo una premisa, que los egresos fiscales no pueden alterarse y, entonces, lo único que queda es incrementar los ingresos.

Ahora bien, el tema de los ingresos fiscales puede abordarse desde la perspectiva de una política redistributiva o meramente fiscalista. Y no cabe duda alguna acerca del punto de vista predominante: las cuentas tienen que cerrar. Es la consigna implícita en los proyectos en con-

sideración. La preocupación no es la progresividad de los tributos sino la facilidad de su percepción, y esta línea del menor esfuerzo configura un excelente símbolo de la política económica; excesivamente sensible a las relaciones de fuerza imperantes, nada se hace por efectuar modificaciones estructurales.

Con total sinceridad un dirigente radical bonaerense ha reconocido hace poco que la política del gobierno nacional es un modo de salir coyuntural de la crisis, pero sin tener perspectivas de crecimiento. A confesión de parte se dice que hay relevo de prueba.

Llega entonces al Parlamento esta propuesta sin ser acompañada de una explicación oficial de la reducción de los ingresos fiscales, sin una sugerencia de redistribución de los egresos, sin un análisis serio del presupuesto en ejecución, sin fijar los grandes lineamientos del próximo, y en estas condiciones se pide la aprobación del paquete impositivo.

Más aún: el pedido llega junto con comentarios catastróficos acerca de lo que ocurriría si no se lo aprueba. O impuestos o "tarifazo", dicen, cuando todos sabemos que la partícula adversativa será reemplazada en los hechos por la conjunción "y". Si no hay tributos, los empleados de los estados provinciales no podrán cobrar. Es otro de los argumentos, adjudicando a estos impuestos una capacidad de recepción inmediata, que el sentido común niega.

Y hoy mismo, el día en que se sabía que estábamos por tratar este paquete impositivo, nos enteramos por el diario precisamente de nuevos aumentos en las tarifas, en los combustibles, etcétera.

A través de este paquete, la tradicional evasión impositiva no será corregida. Ello habla de una profunda malformación en cuanto a como los sectores con capacidad contributiva perciben al Estado; por sí los organismos fiscales son incapaces de corregir tal situación, y si la presión impositiva se aumenta, crecientes franjas de la actividad económica serán empujadas hacia los denominados sectores informales, pero además este incremento tributario redundará en cierta retracción, lo que disminuirá el monto total sujeto a impuesto.

De ahí que imaginar que dentro de pocos meses estaremos nuevamente en este recinto discutiendo sobre nuevos impuestos no es prueba de una imaginación exacerbada.

Pero este paquete tampoco reducirá el proceso inflacionario. Algunos sectores atribuyen la inflación al déficit. Sin embargo, los teóricos norteamericanos sobre la crisis fiscal más bien

estiman que ambos factores son síntomas de una puja no resuelta por el ingreso. No hay relación de causalidad entre ambos y al respecto cabe observar las cifras astronómicas del déficit fiscal estadounidense, de 148 mil millones de dólares, y compararlas con su inflación relativamente moderada, lo que nos da la pauta de que no hay una relación directa entre ambos. Pero si ambos elementos son efectos, cabe preguntarse si este paquete corrige en algo la puja distributiva. Y la respuesta es un rotundo no. De ahí que las cifras sobre la marcha de la economía argentina deberían colocarnos en una actitud de extrema alarma. Las exportaciones se han reducido, la balanza comercial ha disminuido su superávit, el producto bruto por habitante se mantiene prácticamente estancado, la pública es baja pero la privada es casi inexistente; desde hace más de un lustro somos exportadores netos de capitales; nuestra pobreza creciente financia la recomposición productiva de las potencias hegemónicas. La política de integración pasiva encuentra un marco económico internacional cada vez más desfavorable.

Mientras tanto, se perpetúa una política económica que sigue subsidiando a quienes contrajeron la deuda que, a través de mecanismos como la capitalización de ella, financia a los acreedores internacionales, que sigue garantizando las ganancias de la especulación mientras que somete a todo tipo de riesgo a los que quieren producir.

Estas son las cuestiones que ponen en peligro la gobernabilidad del sistema. En este sentido, pactos o mesas de consenso sólo tienen un significado positivo en la medida en que coadyuvan a democratizar el poder económico con un estado popular y federal.

Podríamos seguir analizando con detenimiento todas estas falencias de una política que se ha revelado desastrosa y que nos ha llevado a esta situación, donde los hechos consumados nos están obligando a adoptar medidas como las que ahora se someten a nuestra consideración.

La circunstancia de que hoy, ya 8 de enero de 1988, en este Senado hayamos tenido que reunirnos en una sesión especial para tratar con tanta urgencia este paquete impositivo, en el marco de una situación angustiosa tanto para las finanzas nacionales como para las provinciales, revela una vez más el fracaso categórico y absoluto de la gestión económica del gobierno nacional que ha demostrado reiteradamente su incapacidad para dirigir la economía de país.

Estas medidas impositivas que hoy tratamos revelan de parte de la conducción económica su notable capacidad de inventiva para generar nuevos tributos, aunque para ello deban hacer tabla rasa con algunos preceptos constitucionales —como en el caso del denominado ahorro forzoso— o desvirtuar principios y conceptos fundamentales en materia de papeles de comercio, como ocurre con el caso del cheque donde se distorsiona hasta la función de este importante instrumento comercial para poder detectar el hecho imponible y determinar al responsable del pago.

Recuerdo que en una oportunidad, hace un par de años, el miembro informante de la bancada radical, cuando se ocupó del presupuesto de la Nación, dijo que lamentablemente, ante la escasez de recursos, no disponíamos de ese poder al que hace referencia la Biblia, consistente en la multiplicación de los panes y de los peces; afirmó que los recursos eran limitados. Pero, al parecer, este ejemplo sólo vale para los recursos genuinos, porque en lo que se refiere a la creación de nuevos impuestos observamos que algún poder de multiplicación tiene los funcionarios encargados de dirigir nuestra economía, porque siempre están inventando nuevos impuestos y tienen una capacidad tremenda de descubrir nuevas cargas para imponer a la ciudadanía.

Si este nuevo esfuerzo que hoy se exige a la población fuera para apuntalar algún proceso de crecimiento, para fomentar la producción o contribuir a un ambicioso plan de obras públicas, tendríamos que votar gustosamente este "paquete" impositivo. Pero si tenemos en cuenta que es únicamente, como dice el vulgo, para "tapar agujeros", para paliar el déficit fiscal, entonces, votar de esta forma este paquete impositivo es, desde luego, realmente lamentable.

Pero estamos —como dije anteriormente— ante una política de hechos consumados, en una situación de extrema necesidad; entonces, los legisladores, los representantes de las provincias, nos enfrentamos a esta disyuntiva. Ya sabemos qué está pasando en ellas; en estos momentos, en la mayoría de nuestros estados no se han podido pagar ni siquiera los sueldos de diciembre, ni qué decir de los proveedores y de los contratistas del Estado. Es decir, se ha llegado a un estado virtual de cesación de pagos.

Es manifiesto, entonces, que estas medidas de administración de la economía que aumentan el intervencionismo estatal y los comportamientos dirigistas no tienen fácil cabida en la estruc-

tura constitucional argentina, al menos a tenor del modelo liberal de 1853.

Es cierto que todos los derechos de los ciudadanos se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, pero estas leyes como las que estamos por sancionar no tienen cobertura adecuada en la dogmática formal de la Constitución.

¿Cómo explicarnos el ahorro forzoso si sabemos que en esencia es una requisición de dinero? ¿Cómo explicarnos el impuesto a la transmisión del cheque si es en esencia un gravamen meramente formal sobre los papeles circulatorios? ¿Cómo explicarnos la regravación de los combustibles? ¿Cómo explicarnos todo ello si no es acudiendo a la *ultima ratio* de la juridicidad, que es el estado de necesidad? Yo pienso que esta invocación del estado de necesidad es el único modo jurídico de justificar la sanción de al menos algunos de los impuestos que hoy estamos tratando.

Porque así como el estado de necesidad es la cornisa para el infractor entre el delito y la inocencia, para el Estado esa cornisa es el límite de la confiscación y el arbitrio que agravia o puede agravar derechos vitales del sistema: libertad, igualdad, propiedad, legalidad.

Ante la situación de hecho invocada por quienes administran las finanzas de la Nación, sólo el estado de necesidad, de aplicación e invocación también por el Estado, es el que puede darles marco de juridicidad y constitucionalidad a estas medidas pues a secas denuncian *in extremis* una gruesa incompatibilidad con los derechos individuales. Pero si por los hechos la necesidad es un estado, una situación constante y generalizada que afecta al Estado para cumplir con sus cometidos, es legítimo autorizar su invocación siempre que esa razón del Estado satisfaga la tutela de situaciones, derechos e intereses de jerarquía superior respecto del bien común, en comparación con el sacrificio que por excepción se le impone a otros derechos individuales.

En suma, la necesidad financiera como estado, situación generalizada que invoca el gobierno, es título jurídico suficiente para dictar normas de policía de la economía de emergencia, como las que contiene el paquete impositivo.

Esta emergencia está subsumida en la constitucionalidad en la medida en que con este sacrificio de los contribuyentes se procura salvaguardar los principios básicos de nuestro sistema de gobierno; la democracia federal y el sistema previsional.

A la democracia federal hacen referencia los artículos 1º y 5º de la Constitución. El artículo 1º es el que establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Si nosotros nos vemos en la disyuntiva de esta cesación de pagos de nuestras provincias, de que no se puede sostener prácticamente el sistema federal al cual ellas están obligadas en virtud del artículo 5º de la Constitución Nacional, indudablemente no queda otro remedio que arbitrar estas medidas de emergencia que revelan un verdadero estado de necesidad, que es el único fundamento que puede darle algún título, alguna juridicidad a aquéllas.

Por estas razones es que anticipo mi voto favorable en general a este proyecto de ley invocando, como dije anteriormente, este verdadero estado de necesidad en que se encuentra la Nación en lo que hace a sus finanzas nacionales y provinciales, sin perjuicio de las observaciones que pueda formular respecto de algunos tributos en particular en el momento en que se llegue a esta instancia en la consideración de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: esta noche estamos tratando el llamado paquete impositivo que, como una especie de fantasma, está rondando este recinto desde hace varias horas.

He seguido atentamente la exposición de todos los señores senadores que me han antecedido en el uso de la palabra y pude observar que este dramático tema que aqueja a los argentinos sirvió para que cada uno, con la mayor lealtad a la Nación, exponga su propia idea y afirme su pensamiento; algunos, más desde el campo constitucional que desde el económico, y otros, más desde el campo económico o financiero que desde el constitucional.

Esta tarde hemos debatido sobre el proyecto de ley de coparticipación. Hablaron casi todos los señores senadores y todos afirmaron su concepción federal en defensa de esa nación pequeña, vernácula, que significan nuestras provincias para cada uno de nosotros. Y cuando se estaba haciendo el debate pensé que en algunas circunstancias de la historia los parlamentarios y los políticos aparecemos un poco responsables de algunas de las deformaciones del federalismo, pues en muchas ocasiones ponemos la idea de nuestros propios partidos por encima de la concepción de funcionamiento federal que hace a la nación.

Con ese espíritu escuchaba aquí las críticas y las dificultades. También, mirando un poco para atrás —como quería mi querido amigo el senador Britos— observaba cómo todos juntos podríamos ver si somos capaces de descubrir un camino mejor. Descarto que todos lo busquemos y que todos lo deseamos en el marco plural que expresa este Senado y pensaba que alguna de las cosas que hoy nos dice la respetable bancada del justicialismo antes las decíamos nosotros.

Recuerdo que el diputado Degreef informaba en el Congreso de la Nación el presupuesto de la República, hace ya mucho tiempo, utilizando casi como partidas normales los fondos de las cajas de jubilaciones.

Ahora estamos haciendo la crítica a nuestro déficit y tenemos que aceptar, después de cuatro años, que a lo mejor nos faltó imaginación o buscar mejores solidaridades entre todos para dar respuesta y propuestas más eficaces.

Recuerdo que en el debate del presupuesto del año 1975 le decía al doctor Gómez Morales, gran ciudadano de nuestra Nación: mire, si usted logra conseguir el déficit del presupuesto que anuncia para fin de año, la Unión Cívica Radical lo va a condecorar; si consigue llegar a fin de año duplicando el déficit que anuncia, el radicalismo le va a poner sobresaliente y si consigue elevarlo al doble de esta cifra, todavía el radicalismo le va a poner bueno. Lo que ocurre es que el país venía caminando apresuradamente hacia un proceso de hiperinflación que terminó en el "rodrigazo".

Esa es una lección que me parece buena para todos, porque después de todo lo que nos pasó en nuestro querido país en estos últimos largos años de dificultades, ésa es una lección que el debate de esta noche en el Senado está demostrando —creo yo— que la aprendimos.

Es decir que más que buscar quién tiene razón, mi idea es que desde el Parlamento tendríamos que tratar de observar si es posible que podamos fabricar un tipo de respuesta que no dependa tanto del Ejecutivo. Yo creo que el Parlamento de hoy —por lo menos el oficialismo de hoy— se ha dejado llevar mucho por la legislación que vino del Ejecutivo, de la misma forma que el Parlamento de ayer.

Estoy convencido de que si en el presupuesto que va a venir a la Cámara nos juntamos los senadores y revisamos exacta, generosa y patrióticamente rubro por rubro, nosotros podríamos hacer muchas economías, ya que seguramente no va a venir de los estratos de la buro-

cracia que trabaja, la organización del presupuesto nacional.

Estoy convencido de que dentro del marco burocrático hay muchas estructuras totalmente caducas para el funcionamiento que nosotros queremos de la Argentina de nuestro tiempo.

Pensaba que en el marco de nuestra pretensión de responsabilidad política o corresponsabilidad —como decía hoy el señor senador Martiarena de todo este proceso— sería una buena estrategia que el Parlamento, en un ámbito de desafíos económicos y políticos, no trabajara tanto sobre lo que viene del Poder Ejecutivo —lógicamente, al presupuesto lo remite el Poder Ejecutivo— ni dependiera de los ministros sino que realizara una especie de contraofensiva, no para derrotar a nadie sino para ayudar a veces si podemos mejorar, desde nuestra interpretación política, algunas de las circunstancias.

Este paquete impositivo es para mí una especie de choque entre un ministro que tiene todos los atropellamientos de su propio cargo y de su propia circunstancia —que tiene que conseguir dinero de cualquier manera, ya que se lo reclaman las provincias, los ministros y el funcionamiento general de la administración y, al que recurre coyunturalmente y con urgencia tanto él como el señor secretario de Hacienda— y nuestra sociedad. Tenemos que definirnos: si llegamos a la disciplina y nos decidimos por lo que necesita el país, el estado de necesidad al que hacía referencia el señor senador Menem y las urgencias a que aludieron otros señores senadores, o si queremos sentirnos ausentes del reclamo de nuestra sociedad.

Tanto yo como todos ustedes estamos llenos de los papeles que nos envían todos los sectores argentinos, en los que nos dicen que este paquete tiene mucho de pecado para ellos.

Sé que cada uno reclama lo relacionado con su propio funcionamiento y que nosotros tenemos la obligación de ser intérpretes de respuestas globales para una sociedad, y que no servimos a un sector sino al conjunto de los argentinos.

Creo que en algunas circunstancias históricas éste ha sido un déficit de los gobiernos democráticos, que tal vez hemos aparecido como ineficaces para dar dentro del campo democrático, civil, respuestas tan importantes y eficaces que sirvan para achicar un poco las corporaciones. Aquí es donde nos mostramos débiles y las

corporaciones —que a veces expresan el feudalismo, la acumulación, la actitud que piensa en el sector y no en la Nación— en alguna medida van rompiendo, aflojando, los mejores moldes con que tiene que manejarse una democracia que, lógicamente, como acá se ha dicho, trae libertad.

Pero la libertad, seguramente, para ninguno de nosotros es ya abstracta. De esa manera no sirve. Debe tener pan, debe tener techo y debe tener libros.

Por eso voy a votar por la negativa este proyecto, fundamentalmente en lo que respecta al capítulo VI. Esto se lo he dicho con especial respeto a mi propio bloque, porque creo que, dadas las circunstancias económicas de la Nación, este aumento que vamos a aplicar a los combustibles implica el riesgo de acentuar un proceso inflacionario, que es lo que yo creo que en el fondo todos queremos evitar.

No creo en su eficacia —lo digo lealmente, con la misma lealtad con que han hablado cada uno de los señores senadores— y tengo miedo de que esto se transforme en una derrota de lo que estamos buscando. Esta es mi interpretación.

Con respecto a los otros capítulos insertos en este proyecto de ley —y así le decía al señor senador Berhongaray, hace unos instantes—, tengo miedo de que la política que lleva al 7 por mil, el impuesto al cheque —por ejemplo— pueda significar una desmonetización de nuestra economía. El señor senador Berhongaray me decía que tal vez no resulte así, porque esto puede frenar un poco la evolución y la dinámica del propio dinero.

Es decir, doy este ejemplo de nuestras propias conversaciones porque creo que en el fondo todos estamos trabajando con factores muy difíciles. Esto es como una masilla, que parece que la apretamos de un lado y se nos afloja del otro.

Nosotros queremos ver si podemos controlar esta situación para demostrar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad —que preservan la esperanza en el sistema— que nuestro sistema funciona con mayor eficacia.

Y no voy a votar de esa forma porque pretenda molestar a los señores jubilados. A tal punto, que aprovecho esta circunstancia para pedir a la respectiva comisión que produzca dictamen sobre el proyecto de ley que presenté aquí hace tres meses, que está orientado a que las empresas del Estado le cobren solamente el

50 por ciento de las tarifas de servicios a la clase pasiva de nuestro país.

Se trata de empresas que están demostrando ahora que se pierde dinero, que son deficitarias. Entonces, pienso que ese Estado, que todos deseamos cuidar, tiene que mostrarse sensible frente a ese hombre que trabajó toda su vida y quiere tener la dignidad de no recibir la limosna, caminando hoy en el abismo de su propia despedida biológica. Este es un proyecto que podría ser útil; no sé muy bien —como pueden saberlo algunos— cuánto podría significar en el mejoramiento de los ingresos de los compatriotas jubilados.

Si aumentamos la nafta súper puede ser que a alguien que posee un Mercedes Benz no lo afecte, pero no entiendo cómo vamos a ayudar a los jubilados aumentando el 24 por ciento el kerosene. No comprendo cómo vamos a hacer para que no incida violentamente en una política de inflación el aumento del gas oil, que se inserta en amplísimos aspectos del funcionamiento económico de nuestra Nación.

Creo que a esta altura no estamos ya para escuchar largos discursos; otros señores senadores han hablado brillantemente, pero yo quería intervenir para decir que creo que hay un esqueleto sobre el que tendríamos que trabajar alrededor de este problema, de este fantasma —como decía yo—, que es el déficit fiscal.

Deseo mencionar que el Estado debe ir a corregir el problema de la evasión fiscal.

Las cifras que dio el señor senador Martiarena, lo que dijo nuestra propia Secretaría de Hacienda, nos muestran que pareciera que eso tendría que ser más fácil que elaborar un tipo de impuesto que, evidentemente, puede lesionar a factores de la producción que aparecen recesivos porque podemos quitar, en función de la inflación o de los nuevos impuestos, poder de compra a quienes ya tienen ingresos menudados y pequeños.

Sabemos que hay impuestos de estos que pueden servir a frenar también la inversión impositergable que necesita nuestra economía. ¿Y entonces?

Seguramente tendrá que venir el presupuesto. Vamos a seguir discutiendo las estructuras económicas, las que funcionan bien, las que andan regular y las que andan mal.

Esto no es nuevo. Lamentablemente, venimos caminando estas arenas en la Argentina desde hace mucho tiempo.

Pero creo que hay que achicar el déficit fiscal. No debemos dejar que esto lo manejen los burocratas. Tenemos que trabajar, senador Trilla, presidente de la Comisión de Presupuesto, a fondo para recortar partidas. Y si después nos vienen a decir que no modifiquemos lo que llega de Diputados porque hay urgencias, tendremos que responder: no nos apuren porque ya debería estar aquí el presupuesto de este año.

Me parece que la dificultad hace que tengamos que trabajar no tanto como hombres del partido sino como senadores de la Nación. Creo que esto jerarquizaría nuestra propia humilde militancia y podría ser útil al país.

Considero que una de las cosas que deforma al país es la burocracia y a veces por los factores que nos mandan, las medidas son elaboradas en una democracia que está trabajando con técnicas, no digo ya de segunda mano, sino de tercera, porque ya en muchos casos están custodiando una axiología, una escala de valores que no tiene nada que ver con la Nación ni con la República que nosotros andamos pretendiendo.

Por eso, señor presidente, creo que habría que trabajar —es una humilde idea— sobre un impuesto de emergencia, uno solo y no todos estos tan confusos. Y fundamentalmente, como también hablábamos con el senador Berhongaray, ¿por qué no buscar un impuesto que sacuda un poco a la patria financiera que por ahí no paga impuestos? ¿Por qué no buscar también desde el Parlamento achicar el déficit fiscal, bien, en serio, trabajando nosotros desde aquí en una contraofensiva saludable y cordial que no quiere vencer a nadie sino custodiar al país, poniéndonos también en una actitud que esté al servicio de la Dirección General Impositiva para ayudar a combatir desde aquí la evasión, no sólo no cobrando tanto a los que ya pagan siempre, o cobrando a los que no pagan nunca, sino también sacando de esa Dirección a algún inspector coimero que trabaja contra las aspiraciones de nuestro propio país?

Por ello, señor presidente, y sin entrar en un debate económico, considero que el aumento de los combustibles, de los teléfonos y de otros bienes puede acarrear un efecto contrario al que se está buscando en el título VI de este proyecto que sería ayudar a los jubilados.

Yo voy a votar en contra. Me parece que este paquete es asépticamente impositivo y que el país está necesitando también otro tipo de ingredientes. Creo que nosotros que andamos por la calle, que tocamos las cicatrices y sentimos algunos dolores, tenemos que ponernos a trabajar sobre esas cicatrices.

Aquí se habló de la mala distribución del ingreso. Desde el presidente de la República hasta el más humilde de los radicales hubiéramos querido producir mucha mayor igualdad en la distribución de los ingresos entre los sectores del capital y del trabajo. Pero no hemos podido mejorar la situación en la forma como deseamos. Y creo que nadie puede dudar de que la Unión Cívica Radical lo pretende porque creo que siempre aparecimos solidarios con el pueblo, en la definición de las grandes políticas nacionales.

Termino, señor presidente, expresando que este paquete nos duele por las circunstancias, por la coyuntura y por lo que ataca sin dar respuestas concretas; tal vez sirva para que esta autocritica que hacemos en función de esta actitud legislativa determine si somos capaces desde el Parlamento de elaborar las políticas de mejor participación legislativa para corregir algunos de los factores que crean esta declinación y esta deformación.

Con estas palabras, señor presidente, dejo fundada mi actitud en este desafío que tenemos los senadores de votar este proyecto, lo que se nos hace muy difícil. Digo esto porque todos queremos acertar en esta ruleta, porque como aquí se ha dicho hay factores que nosotros no controlamos, que están jugando en el marco económico de nuestro país.

El señor senador Menem hablaba de factores externos que lesionan las posibilidades de manejar nuestras propias palancas. También hay factores internos que a veces conforman una estructura que es resultante de la propia actitud internacional.

Alguien habló —creo que fue el senador Saadi— de que había que buscar nuevas estructuras. Así como hay que buscar en el campo internacional un nuevo orden, no hay nadie en el mundo que crea que la sociedad de nuestro tiempo, que tiene que ser más justa, pueda subsistir observando cómo de un lado se acumula toda la riqueza y del otro lado toda la miseria.

Y así como esto se da en el campo internacional, es posible que tengamos que lograr un nuevo orden con mejor distribución dentro del país. Y a mí no me convencer de que sirva para una mejor distribución esta coyuntural actitud legislativa que nosotros estamos teniendo.

Nada más.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — (Lee) "Señor presidente: el proyecto de ley en materia im-

positiva que estamos tratando se enmarca en una crisis económica y financiera que, al decir del propio señor presidente de la Nación, es quizá la más grave por la que ha atravesado la Argentina desde sus albores, siendo calificada en su mismo mensaje de elevación como situación de virtual emergencia.

Con algunos matices diferenciales convenimos con la calificación que el Poder Ejecutivo hace de la actual situación. Pero, señor presidente, no podemos dejar de subrayar la responsabilidad que a él le cabe en relación a la misma.

En los últimos cuatro años y en reiteradas oportunidades le hemos llamado la atención en relación con la política económica sostenida, a la que muchas veces hemos denunciado como recesiva. Asimismo, creemos que efectuamos múltiples reclamos por el desconocimiento que el Poder Ejecutivo ha hecho de las facultades constitucionales que les son propias a este Congreso. Así se hizo en relación con la negociación de la deuda externa y con el cambio de moneda que introdujo el Plan Austral, por mencionar los ejemplos más acabados en la materia y que han puesto en entredicho expresas normas constitucionales.

Pero el Poder Ejecutivo nacional no sólo desoyó las voces que se alzaron desde el Congreso nacional pidiendo rectificaciones a la política económica, sino que tampoco prestó atención a los reclamos que hicieron desde distintos ángulos diversas organizaciones sociales, económicas y del trabajo, tanto nacionales como aquellas que expresan las problemáticas económicas regionales.

Así llegamos al 6 de septiembre, donde a través de las urnas se expresó la voluntad popular en un sentido inequívoco en cuanto a la necesidad de efectuar la corrección del rumbo seguido por la conducción económica.

Esta interpretación del voto popular también la han formulado conocidas figuras políticas del oficialismo, lo que hace innecesario fundamentarla.

Pero este pronunciamiento también es desoído. Es por ello que debemos afirmar el alto grado de responsabilidad que le cabe al actual gobierno por esta situación financiera, que reclama la adopción de estas medidas tributarias en el más breve plazo, al decir del propio Poder Ejecutivo en su mensaje, para superar la grave coyuntura denunciada.

En otro orden de cosas se manifiesta la situación que se ha planteado a los gobiernos provinciales por la falta de envío de los fondos que

les corresponden como coparticipación federal de los impuestos nacionales.

En algunos casos, señor presidente, se ha llegado a la falta de pago de los sueldos del mes de diciembre y a realizar restricciones que ponen a dichos gobiernos ante la imposibilidad de cumplir con otras obligaciones esenciales a su cometido.

Señor presidente: la conveniencia de evitar males mayores encuentra cauce en la necesidad perentoria de superar las graves consecuencias institucionales y sociales que acarrearía la subsistencia del actual estado de cosas. No podemos obviar que la falta de pago de los magros sueldos de los empleados de algunas provincias y la restricción de los servicios que las mismas prestan son en sí una injusticia que debemos superar en forma inmediata, porque los beneficiarios de los mismos son absolutamente ajenos a las causas que originan tal situación y, por sobre todo, tales prestaciones hacen a la cobertura de sus necesidades primarias, lo que hace insoslayable su solución perentoria.

Así también, en el mismo orden de ideas, no podemos dejar de recordar la afligente situación que atraviesa la gran masa de jubilados y pensionados de nuestro país. La situación de la clase pasiva ha sido y es un tema de nuestra permanente preocupación. Prueba de ello son el conjunto de proyectos de ley que he presentado en las comisiones respectivas, y en este sentido voy a insistir como lo hicieron nuestros compañeros en la Honorable Cámara de Diputados y como ya lo planteara el senador por San Luis, en que los fondos que se recauden para el financiamiento del sistema de previsión social, tanto nacional como provincial, sean realmente utilizados para el pago de los haberes a los jubilados, porque ése es el sentido con que votamos esta norma.

Señor presidente: es por ello que en la actual encrucijada no puedo dejar de hacer una opción preferencial por los mismos, al momento de elegir entre las alternativas que se ofrecen.

Y he hablado de optar entre las alternativas que se ofrecen por cuanto no puedo dejar de recordar que voceros autorizados del Poder Ejecutivo nacional han anunciado que, en caso de no aprobarse el llamado paquete tributario, se optaría por un aumento sustancial de las tarifas del conjunto de los servicios públicos.

Lamentablemente en estos días se ha anunciado un aumento de algunas tarifas públicas

que supera los incrementos salariales, lo que en la práctica significa un deterioro de los niveles de vida de los sectores más humildes.

Para terminar, y a pesar de todo lo dicho, ante este estado de cosas, recalcando la responsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo nacional por las mismas, con el fin de evitar males mayores a la vida de la Nación, y en la inteligencia de que se trata de medidas de carácter excepcional y de emergencia, vamos a dar nuestro voto favorable a su aprobación en general, reservándonos para hacer observaciones en particular.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — (*Lee*): Señor presidente: el paquete económico que ha concebido este paquete tributario que hoy llega semidestruido y derrenegado a este recinto, comparado con lo que fue inicialmente, parece haber adherido sin reservas a la idea central con que nuestros liberales han manejado la economía argentina, con muy breves intermitencias, desde 1955.

Esa idea central es que no hay mal económico alguno que no pueda curarse con una buena recesión. Ya nos lanzaron deliberadamente a ella a partir de la última carta de intención con el Fondo Monetario, de junio del año pasado. Lo que tenemos por delante es otra vuelta de tuerca en el mismo sentido.

La idea de la perversidad intrínseca del déficit fiscal, sin consideración alguna hacia la situación de empleo de los recursos productivos —esto es, si se encuentran o no utilizados a pleno—, está en el núcleo mismo del pensamiento liberal que ni siquiera ha registrado el veto por el universo de la teoría económica del pensamiento keynesiano.

¿Cómo es posible que una antigualla tal permanezca hoy vigente entre nosotros? Tiene su explicación: el análisis keynesiano se circunscribe a una economía cerrada y, por lo tanto, no registra la insuficiencia de las políticas expansivas que de ese análisis se deducen para una situación de bajo nivel de empleo de los recursos productivos, cuando existe una restricción específica del sector externo, que es típicamente el caso de la Argentina. Por eso las políticas keynesianas fracasan en su formulación pura, dando lugar, a falta de una teoría económica adaptada a la realidad de los países de industrialización tardía, a la resurrección de aquellas antiguallas que se acreditan a partir de esos fracasos sólo para sumergirse sistemáti-

camente —y pongo a nuestra experiencia nacional por testigo— en un fracaso todavía mayor, formando entre unas y otras políticas el círculo vicioso de una decadencia que ya nos ha postergado demasiado.

Sin embargo, y por una curiosa combinación de acciones psicológicas diversivas, precisamente los defensores del equilibrio fiscal a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia, los sumos sacerdotes del dogma de la eliminación del déficit del presupuesto, precisamente ellos son los impugnadores de este conjunto de medidas, cuyo propósito obvio es allegar recursos a las arcas del Estado sin que importen los efectos de esas exacciones sobre la economía real, sobre la situación de los sectores productivos, sobre el nivel de los salarios y del empleo. Es algo que deberíamos calificar al menos como curioso.

Pero la realidad tiene su propia lógica y es a través de ella que se toma venganza de las decisiones que no la respetan.

El primer efecto de la recesión, como se sabe por experiencia reiterada, es hacer caer la recaudación tributaria, de modo tal que proyectos como el que tenemos por delante, cuyo propósito es recaudar más, bien puede suceder que terminen teniendo por efecto, a causa de sus consecuencias gravemente recesivas, ingresos tributarios en definitiva menores.

Estas cosas suceden cuando se ha perdido la capacidad de leer en los hechos, la capacidad de apreciar con mente fresca la realidad, cuando perdido el rumbo sólo se atina a ajustarse a los dictados de una sabiduría tradicional impuesta por las cartillas conocidas del Fondo Monetario Internacional.

Basta lo expuesto para señalar un pronóstico categórico: cualquiera que sea la suerte que estos proyectos tengan en la votación, no saldrán de ellos efectos benéficos para la Argentina ni, por consiguiente, para su pueblo.

Entrando en puntualizaciones sobre las leyes que integran el paquete impositivo, quiero expresar que la fundamentación oficial para modificar la ley de impuestos internos, principalmente en lo que atañe a las naftas y combustibles en general, se basa en la necesidad de recomponer los haberes jubilatorios y pensiones.

Según estos fundamentos del partido que gobierna, la crisis del sistema de seguridad social se debe a la reducción de los activos frente a los pasivos y a la herencia del proceso militar que con su política económica, puso en crisis el financiamiento tradicional de contribuciones y aportes.

Ya a fines del año pasado el Ejecutivo, mediante un decreto anticonstitucional, tal como lo declaró recientemente la Corte Suprema de la Nación, sumergió a la clase pasiva a sus niveles más bajos de ingresos al no permitir ejecutar las sentencias que declaraban la justicia de sus reclamos.

Mientras esto ocurría en la administración nacional, las administraciones provinciales, gobernadas por justicialistas, a pesar de su precariedad económica, continuaron priorizando los principios de justicia social y, en consecuencia, abonando a los pasivos el 82 por ciento móvil.

Desde esta misma banca mi antecesor presentó a fines del año pasado un pedido de informes para conocer la situación económico financiera de las cajas previsionales, impugnando el referido decreto por inconstitucional. Se convocaba al ministro de Trabajo y Seguridad Social a que informara cómo se produjo ese deterioro, denunciando que pretendía justificar el decreto y cuál era la deuda real con los beneficiarios del sistema. Aún hoy no sabemos a cuánto asciende la deuda ni cuál es su origen. Y el oficialismo continúa buscando distintos medios y recursos no genuinos para paliar este déficit.

Se seguirá equivocando el gobierno si continúa pretendiendo establecer sistemas de parches permanentes para cubrir problemas cuyo origen está en la política económica en su conjunto.

La errática política económica de este gobierno, que no genera empleos productivos, que continúa facilitando la especulación y destruyendo las fuentes productivas, no debe ser pagada por el conjunto de la sociedad. Menos aun por las administraciones provinciales, que a pesar de su carencia de recursos pagan a sus jubilados y pensionados.

Por otra parte, dado que se desconoce el monto necesario para recomponer las jubilaciones y pensiones, así como para saldar las deudas que el Estado nacional mantiene con sus jubilados, y dado que los recursos que se obtendrían a partir de este impuesto parecerían ser muy superiores a ellas, no es difícil suponer que este impuesto constituye una forma encubierta de transferir recursos para la Tesorería de la Nación.

El combustible ha sido por sus características uno de los motores primarios del proceso inflacionario, puesto que es la forma primaria de circulación de los bienes y servicios.

Esta medida elevará en forma significativa los precios al consumidor, que serán lógicamente trasladados nuevamente a los precios en general. Al mismo tiempo, se desalienta la inversión y

constituye otra de las tantas medidas regresivas y recesivas de este gobierno.

Por otra parte, dado que los márgenes de industrialización, comercialización y precio de los contratos de explotación no varían significativamente, el impacto va a gravar fundamentalmente al petróleo crudo, afectando principalmente al único vendedor de éste, que es YPF.

La cláusula que explicita la no coparticipabilidad de lo producido por el impuesto, implica que las provincias estarán pagando tanto a sus jubilados como a los jubilados y pensionados de la Nación.

No es justo que la Nación, teniendo mecanismos legítimos para obtener recursos genuinos y siendo al mismo tiempo mucho más rica que nuestras provincias, recurra a éstas para pagar sus propias deficiencias, así como los cuatro años de sometimiento a las reglas del Fondo, en vez de dar prioridad a la deuda interna que tiene con el pueblo argentino.

Por lo tanto, es muy difícil la posibilidad de implementación de este impuesto por ser: inflacionario y regresivo; arbitrario e injusto con las provincias que deberían pagar doblemente tanto a sus propios jubilados como a los jubilados nacionales; porque grava fundamentalmente a YPF, que es el único productor de crudo; por no haber respondido el Poder Ejecutivo al pedido de informes y por lo tanto desconocer aún hoy los montos reales de la deuda, el origen de la crisis del sistema previsional y el monto necesario para recomponer los haberes de los beneficiarios del sistema; por ser una clara exigencia del Fondo Monetario Internacional que obliga al gobierno a reducir el déficit fiscal, a definir políticas de ajuste para renegociar la deuda y allegar nuevos recursos. Nosotros, los justicialistas, pensamos que la primera obligación del gobierno es con su pueblo, cuyas exigencias, contrariamente a los intereses usureros del Fondo, son los justos reclamos de los niveles de ingresos mínimos para vivir con dignidad.

También es muy difícil la implementación de este impuesto porque creemos que es una forma encubierta de transferir recursos a la Tesorería Nacional, utilizando como argumento la crítica situación de los jubilados y pensionados, y porque no creemos que con estos parches sistemáticos que impone el gobierno, se solucione la grave crisis que acosa a nuestro país y el deterioro progresivo de nuestra estructura productiva.

Muy por el contrario, consideramos que se siguen implementando medidas que alientan la especulación y quebrantan la producción.

Dentro de las modificaciones propuestas a la Ley de Impuesto a las Ganancias, una de las cláusulas más importantes se refiere a la posibilidad de deducir quebrantos hasta 1990.

Al igual que en el caso del ahorro forzoso, mediante esta modificación se pretende obtener recursos hipotecando el futuro de la próxima administración, que no tengo dudas va a ser justicialista.

Mientras se argumenta desde el oficialismo que este impuesto es redistributivo en la medida en que supone una afectación sobre sectores de mayores ingresos, la evasión fiscal permanentemente, la ausencia de mecanismos de control sobre los sectores de altos ingresos, el bajo mínimo imponible y la contribución cautiva de los asalariados, hacen por el contrario que sea absolutamente regresiva. Esto se explica también en la medida en que son los sectores menos favorecidos los que no pueden evadir al fisco, puesto que el empleador es al mismo tiempo agente de retención.

De esta manera los sectores populares medios están subsidiando a los sectores de altos ingresos.

La modificación implica: primero, que las pérdidas se podrán deducir solamente hasta el 50 por ciento; segundo, que no se podrán absorber las pérdidas acumuladas hasta 1990.

Si bien conocemos las dificultades económico-financieras por las que atraviesa la actual administración, debemos pensar en qué condiciones recibirá el próximo gobierno los recursos mediante los cuales deberá desarrollar su labor.

Si pensamos que a partir de 1990 se podrán deducir los quebrantos acumulados durante estos años, sumados éstos a la evasión fiscal, parecería razonable pensar que serán muy limitados los recursos fiscales con que contará.

La actual situación económica por la que atraviesan los sectores de la producción se verá agravada por la circunstancia de no poder deducir quebrantos en los años 1986, 1987 y 1988.

El rechazo de esta modificación, por lo tanto, se debe a que no podemos aceptar que en función de apropiarse de la totalidad de los recursos el gobierno radical nos hipoteque los futuros recursos fiscales de nuestra futura segura administración.

Tampoco podemos aceptar el incentivo a los seguros de retiro privados que sí podrán deducirse en detrimento de los seguros de vida de los trabajadores y asegurados que no son deducibles del impuesto a las ganancias. Por eso propongo eliminar el articulado referente a los seguros privados.

En lo que respecta a los débitos bancarios vamos a aprobar en general el proyecto, insistiendo en su carácter de coparticipable porque no constituye un impuesto nuevo en la técnica fiscal del país. Fue instrumentado durante la época del gobierno militar y el actual lo continuó prorrogando.

En esta oportunidad ha sido presentado como una forma de lograr la autodeterminación del impuesto a las ganancias, ya que la ley permite imputar como crédito a cuenta de éste —me refiero al impuesto a las ganancias— hasta el 70 por ciento de lo abonado por débito bancario.

Mediante este mecanismo de la imputación parcial de lo abonado por débito bancario al impuesto a las ganancias, el gobierno logra, en última instancia, un anticipo en la percepción de este último.

El impuesto se encuentra a cargo de los titulares de las cuentas respectivas y el hecho imponible se configura al efectuarse el débito en la cuenta.

Por la naturaleza del sujeto gravado y el hecho imponible como se configura, se puede sostener que no constituye un impuesto regresivo que afecte a los sectores asalariados.

La tasa que actualmente se encuentra en el orden del 2 por mil, se ha elevado al 7 por mil. Podrá pensarse que esta elevación de la tasa llevaría a una restricción en la utilización del cheque como medio de pago; pero el hecho de su posibilidad de imputarse como crédito para el gravamen a las ganancias puede morigerar esta circunstancia.

Para ciertas actividades se ha establecido una alícuota reducida al uno por mil, en cuyo caso se imputará como crédito fiscal la totalidad de lo abonado.

Respecto de la alícuota llevada al uno por mil —artículo 32—, se considera exagerada dicha reducción. Podría sostenerse exclusivamente para el caso del inciso f) —expendedores de combustibles líquidos con precios oficiales de venta—, ya que es notoria la situación de reducido margen con que se opera en dicha actividad.

Por ello se propone una elevación de la tasa para los restantes casos del artículo 32, al 2 por mil, que es justamente el aplicable a las entidades cooperativas (artículo 32 in fine).

No es lógico gravar con mayor peso a las cooperativas —unidades básicas de la producción— que a los agentes del mercado abierto —inciso e)— o a los corredores de casas de cambio —inciso d)—.

El segundo párrafo del artículo 32 constituye una norma abierta que faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el alcance de la alícuota reducida a otras actividades en los casos en que hagan uso acentuado del cheque y que el margen de utilidad sea extremadamente reducido.

Esta facultad del Poder Ejecutivo nacional sin contralor parlamentario puede llevar, por una aplicación exagerada, a desnaturalizar el impuesto.

En el Estado nacional, provincial o municipal no se incluye a las empresas del Estado, sean sociedades anónimas o mixtas. En esto estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo con las misiones diplomáticas y con ciertas entidades especiales, como son las instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones artísticas, entidades gremiales, partidos políticos, etcétera.

Lo que no resulta razonable es la exención prevista en el artículo 33, inciso c), apartado 1º, que se refiere a las operaciones que efectúan entre sí las entidades financieras actuando a nombre y por cuenta propia. Esto constituye un privilegio para el sistema financiero en desmedro de los restantes factores de producción. En el régimen legal que se había sancionado durante la época militar se contaba igualmente con este privilegio que no es nuevo en nuestro sistema.

Lo que razonablemente la ley establece como exentas son las operaciones del Banco Central con la entidades financieras; esto corresponde al artículo 33, inciso b).

No resulta razonable la facultad que el artículo 35 concede al Poder Ejecutivo nacional para poder reducir la alícuota en un 50 por ciento. Esto podría llevar a que el radicalismo, en 1989, reduzca la alícuota en desmedro de las finanzas de la futura administración. El peronismo, en caso de ser gobierno, tendría el costo político en 1989 de tener que solicitar al Congreso un aumento de la alícuota. Se propone la modificación de dicha facultad.

Por último, se estableció una exención para débitos inferiores a cinco australes, actualizable por la Dirección General Impositiva. Dicha exención fue negociada por el Partido Justicialista, ya que el proyecto del Poder Ejecutivo prevía dos australes. La propuesta de la Cámara de Diputados llevaría a que los cheques de 700 australes quedaran exentos. Es cierto que esto derivará en una división de los cheques cuando se tengan que cancelar sumas mayores, pero, por otra parte, los sectores medios

de la población hacen uso de la cuenta corriente para los gastos mensuales. Creemos que no es conveniente rechazar esto.

Por otro lado, debería agregarse al artículo 33, que trata sobre los sujetos exentos de dichos impuestos, a los escribanos nacionales, respecto de los importes que retengan en su calidad de agentes de retención, y procedan a depositar en las cuentas oficiales de los diversos organismos recaudadores. El fundamento radica en que dichos profesionales son, fundamentalmente, agentes de retención y colaboradores directos en la función de recaudar de los diversos organismos.

Es por todo ello que en oportunidad de que se trate en particular voy a proponer un inciso al artículo 33, que se refiere a los sujetos calificados como agentes de retención de los diversos tributos nacionales o provinciales, respecto de los débitos que se originen en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como tales.

En el proyecto de modificación al régimen legal del cheque resulta altamente negativo que la reforma de fondo a la legislación privada del país se encuentre sumergida en las necesidades fiscales de la administración. Esto constituye una perniciosa técnica legislativa.

El informe del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación sostiene que las reformas propuestas al régimen del cheque son tendientes a evitar la desnaturalización del cheque, reafirmando su calidad de medio de pago, ante lo que considera que en la actualidad opera; es decir, como "promesa de pago".

Dicho objetivo no se logra con el proyecto propiciado por el oficialismo; y levantando las banderas de una correcta utilización de los instrumentos jurídicos busca un rédito fiscal más a costa del pequeño y mediano comerciante y productor.

Esta reforma propiciada por la administración radical constituye un claro reconocimiento de la asfixia financiera que afecta a los pequeños y medianos productores del país. Estos, por las elevadas tasas bancarias, no tienen acceso a los créditos del sistema financiero, sin comentar que el denominado sistema financiero no institucionalizado —es decir, las mesas de dinero—, aunque de ágil operatoria resulta más que gravoso a la actividad mediana. Las necesidades de crédito han ido deformando las formas jurídicas, pero los problemas no se solucionan con la supresión de alguna forma que ha sido co-

rrompida, ya que las necesidades seguirán subsistiendo.

Nadie discute en términos jurídicos la diferencia entre medio de pago que la legislación impone al cheque y la promesa de pago propia de la letra y pagaré.

Este proyecto constituye un mecanismo que tiende a aumentar el libramiento de cheques —sujetos al régimen de impuesto—, ya que al derogarse los endosos, subsistentes exclusivamente para su depósito, los cheques al portador inferiores a 700 australes no cuentan con la garantía del sujeto intermedio entre el librador y el depositante.

Los terceros en el comercio no podrán aceptar cheques que no provengan directamente del librador. Se recuerda que los cheques superiores a la suma de 700 australes deberán ser librados a nombre de persona determinada.

La desnaturalización del cheque no se opera por el tema de la existencia o no de los endosos sino, como todo el mundo sabe, por la antelación de la fecha al momento de su libramiento.

Esta circunstancia subsistirá a pesar de la reforma que el oficialismo propone, pero la eliminación del sistema actual de endosos producirá un aumento en los costos de producción en la pequeña y mediana empresa, ya que los comerciantes deberán mantener en cartera los valores en la poca posibilidad de transferir cheques de terceros sin su propia garantía, que en la actualidad se logra por el mecanismo del endoso.

El sistema propuesto logra exclusivamente un efecto de corte fiscal a costa de paralizar la actividad de los pequeños comerciantes, y con un balance desconocido en cuanto a su capacidad de recaudar ante la recesión que éste y otros proyectos impositivos traerán en la actividad económica. Nos lleva a contramano del mundo ya que son notorios los esfuerzos tendientes a la unificación internacional de los instrumentos comerciales.

En cuanto al régimen del ahorro obligatorio, lo conveniente sería rechazarlo. Pero si ello no es posible, se deben proponer modificaciones.

Las causas por las cuales se lo debería rechazar serían las siguientes. Esta ley fue dictada en 1985, como siempre se ha hecho, con carácter excepcional. Su nueva sanción para 1988 hace que pierda dicho carácter y se transforme en un verdadero impuesto y como tal debería ser coparticipable, ya que lo paga toda la Nación.

El ahorro obligatorio endeuda también al futuro gobierno que asumirá en 1989 y se apropia

de los recursos la actual administración. Es otra forma de endeudar internamente al futuro gobierno, como lo hace el gobierno actual con los créditos externos.

No se explica hacia dónde se destinan esos fondos que se obtendrán a partir de este régimen que, para nosotros, ya tiene carácter de impuesto.

Si la argumentación para proponer este paquete impositivo es la emergencia económica, es razonable exigir que los fondos recaudados a través de las leyes tengan un destino tendiente a resolverla y sea aceptado por la sociedad, que lo va a pagar.

El ahorro tiene su fundamento constitucional en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al hablar de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

Técnicamente no es un impuesto porque el capital es reintegrable con más un interés. Si fuera un impuesto no existiría devolución alguna. Pero como el gobierno lo utiliza no en forma excepcional sino como una herramienta fiscal más y le aplica la tasa de interés que paga la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, a la finalización del período el ciudadano tendrá un capital totalmente desactualizado. Por ello lo calificamos como un impuesto.

Téngase presente que en el régimen que comenzó a operar en 1985 el capital se actualizaba por el índice de precios mayoristas elaborado por el INDEC, sin interés; pero, en última instancia, se devolverá un capital actualizado.

El ahorro obligatorio constituye un gravamen que afecta a los que ya eran sujetos impositivos, ya que a los evasores consuetudinarios del país no los afecta: aquellos que no existen impositivamente continuarán no existiendo para el régimen del ahorro obligatorio. Es decir que premia al sujeto que ha evadido, y esto se ha dicho en reiteradas oportunidades en el curso de esta sesión. A su vez, el que se encuentre en una situación de legalidad es castigado con este pseudo ahorro.

Por los artículos 4º y 14, apartado a), inciso 2º se afectan los regímenes de promoción industrial vigentes en el país al adicionarse al resultado neto de los ejercicios fiscales las rentas exentas y el monto de las desgravaciones, deducciones y demás franquicias tributarias dispuestas por normas de promoción de carácter sectorial.

Por el artículo 10 se crea la posibilidad de sustituir las constancias de los depósitos por instrumentos de crédito nominativos y transferibles, agregando un elemento más al "festival de bonos" y al mercado especulativo.

Las rentas originadas por el depósito obligatorio se encuentran exentas del impuesto a las ganancias exclusivamente para las personas físicas y las sucesiones indivisas.

Por todo ello, señor presidente, de ser aprobado en general este proyecto, me reservo el derecho a hacer las observaciones pertinentes durante su tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — (Lee) "Señor presidente: todos somos conscientes de la grave situación que atraviesa el país, la cual nos coloca en la encrucijada de asumir la tremenda responsabilidad de dar sanción legislativa al paquete de leyes impositivas en consideración, a fin de allegar recursos al Estado que posibiliten el cumplimiento de impostergables obligaciones y solucionen temporariamente graves problemas financieros.

Obviamente, nos vemos constreñidos, por esta situación conyuntural de la que es preciso zafar, a elegir el camino menos grato para un legislador, cual es el de imponer un nuevo sacrificio a un pueblo empobrecido, sacrificio que evidentemente será inútil y hasta contraproducente sin la contrapartida de planes inmediatos, serios y factibles que nos saquen del estancamiento.

En aras de no obstruir la única salida de emergencia que ha quedado abierta en esta embarazosa circunstancia, adelanto el voto afirmativo en general de mi bloque.

Al mismo tiempo, reitero lo que el Partido Bloquista sostiene invariablemente con la mira puesta en el logro de un futuro de bienestar que haga olvidar este amargo presente a un pueblo que soporta con estoicismo exigencias y privaciones y que brevemente podríamos sintetizar así: no aumentar la presión tributaria, ya que ésta afecta a los sectores productivos, desalienta la producción y establece una exacción de los recursos de la actividad privada para cubrir al sector público; reducir el déficit fiscal, disminuyendo el gasto público; adaptar la legislación para fomentar la inversión productiva; desalentar la especulación; reactivar la demanda interna y externa con una equitativa política de ingresos y normas que favorezcan el

comercio exterior; incentivar la creación de nuevas fuentes de trabajo, así como la conservación y crecimiento de las existentes para mantener y aumentar el nivel ocupacional; destinar para los fines previstos los recursos que se obtengan a través de la aplicación de esta legislación.

Estos mismos principios sostuvo mi partido en la mesa del consenso democrático, entendiéndolo que pueden conducir al desarrollo del país y al crecimiento estable y continuo de la economía, que dará como lógica consecuencia un mejoramiento de la recaudación fiscal para que no se repitan otras situaciones como las que hoy nos preocupan."

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Víctor H. Martínez.

Sr. Conchez. — Señor presidente: haré unos brevísimos comentarios sobre estos escabrosos temas que hoy hemos debatido.

En primer lugar, quiero adherirme a la posición y a los argumentos legalistas tan bien expuestos por el senador por Corrientes y por la documentada argumentación del senador por Jujuy, acompañándolos con mi voto negativo a este paquete impositivo.

Creo que este proyecto traído al Senado con urgencias y presiones, no es nada más que un gusto por el facilismo del gobierno, que considera más cómodo acentuar la presión tributaria a través de impuestos que automáticamente tendrán que llevar fondos a las arcas del Estado, y no evitar la evasión, tratada con total despreocupación y negligencia, y reducir el gasto público.

El gobierno en ninguna instancia ha demostrado un poco de preocupación por estos aspectos y yo creo que si el tema lo hubiera tratado como correspondía no sería necesario estar hablando hoy de un "paquete" tributario nuevo que, repito, no es nada más que un síntoma de facilismo, de comodidad.

Pienso que este punto ha sido abundantemente argumentado, pero quiero recalcar algo que se ha mencionado superficialmente. Soy un convencido de que el aumento del precio de los combustibles va a repercutir notoriamente en la productividad rural del país y, como lo dijeron ya en el recinto, va a provocar un fomento de la inflación y va a ahuyentar la inversión empresarial.

Advierto que el resultado de este asunto impositivo puede ser negativo para la prosperidad del país. No termino de comprender cómo Italia, España, y otros muchos países de diferentes zonas, sin mencionar a las más grandes potencias, viven un estado de prosperidad que pueden hasta exportarlo; en cambio, la República Argentina, con su feracidad, con sus inmensas riquezas, no puede salir de esta angustiosa recesión y de esta miseria social. No le encuentro otra explicación al problema que la incapacidad del propio gobierno, comenzando por que no demostró en ningún momento con hechos positivos un espíritu de laboriosidad, de austeridad y de riguroso control de las distintas actividades que hacen al desarrollo del país.

Dije que iba a ser muy breve. Quiero recalcar todo esto y pedir disculpas a mis compañeros peronistas y a los señores gobernadores, pero yo no puedo aprobar estos abusos tributarios.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: durante muchas horas hemos escuchado, a través de las intervenciones de los senadores integrantes de distintos bloques, casi al unísono, con distintos decibeles, una larga letanía de críticas fundamentalmente dirigidas a la política económica del gobierno nacional.

Cualquiera que haya seguido atentamente este debate podría irse con la sensación de que existe una especie de maniqueísmo donde, por un lado, están todos los buenos y, por el otro lado, están todos los malos. Y realmente, con la mano en el corazón, yo creo que nadie puede llegar a afirmar esto.

¿Que se han cometido errores? Nosotros también hemos criticado medidas y disposiciones del área económica. Hemos realizado nuestras autocríticas con toda lealtad. Pero creo que si algo hemos aprendido en cuatro años de esta nueva etapa, en la cual estamos caminando de a poco hacia la afirmación democrática en este período de transición, es que en general los problemas del país no obedecen tanto a decisiones mágicas o voluntaristas de hombres o de grupos; y a veces ni siquiera a condicionamientos que algunos hacen aparecer como elementos determinantes.

Yo creo que lo que hemos aprendido es que en general los pueblos son lo que son porque se comportan del modo en que lo hacen. Es lo que algunos economistas llaman "rigideces estructurales" de la cultura de los pueblos. Nosotros nos hemos pasado años debatiendo pro-

blemas como si se tratara de discusiones filosóficas. Al monetarismo liberal, que no existía en ninguna parte del mundo y que algunos acá trataban de revalidar como la panacea, le oponíamos doctrinas neokeynesianas, que también como el liberalismo clásico, ortodoxo, habían surgido en los países centrales para los países centrales. Y ése quizá fue el error de algunos gobiernos populares o populistas, como se los denominó, que pensaron que aquellas políticas de los países centrales podían llegar a servir.

Pero creo que todos hemos aprendido. Hemos aprendido que lo que nos pasa a los argentinos es la reproducción, multiplicada por treinta millones, de lo que somos la mayoría de los argentinos.

No pretendo justificar todos los errores que podemos haber cometido, y que seguramente en el área económica han sido bastantes. Pero no quiero terminar este debate sin que quede la sensación de que lo que ha pasado, lo que sigue pasando, responde en última instancia a un modo de ser que todavía no ha cambiado en la mayor parte de los argentinos.

Consideremos la presencia de esto que se ha dado en llamar "patria contratista", con ese facilismo de contratación que desmiente a aquellos que dicen que el gasto público es rígido. ¿Cómo va a ser rígido, si sabemos que hay una rigidez estructural en el tema salarios del 60 por ciento, pero en lo que se refiere a bienes de capital, a compras, hay un margen muy grande para eficientizar los mecanismos y, con ello, reducir estas llamadas rigideces estructurales?

Esta patria contratista actúa no sólo en la Nación sino también en las provincias. ¿O es que hay algún representante de nuestras provincias que no pueda llegar a decir que en cada uno no ocurre en chico lo que ocurre en el orden nacional? ¿O es que hay algún representante de alguna de nuestras provincias que no pueda llegar a decir, con la mano en el corazón, que no se ha faltado a la ética de la solidaridad, que es un modo de completar el concepto de justicia social? Y nosotros hemos hecho favores políticos, pensando que con eso estábamos haciendo bien las cosas. Favores que, en última instancia, pagaba todo el pueblo argentino o todo el pueblo de nuestras provincias, cuando no eran adecuadas las asignaciones, los tiempos y los modos de estos favores.

Ya se habló mucho de los implementos y de las plantas de personal y de lo que ocurrió en estos cuatro años en las distintas provincias. Radicales y peronistas hablaron de los rojos en los bancos de provincia. Se habló de las cosas mal hechas que también ocurrieron en las pro-

vincias. Por eso, señor presidente, no seríamos justos si terminásemos esta noche cargando las tintas solamente en una parte del país. Lo que nos pasa a los argentinos es culpa de todos nosotros, en distintos grados y con diferentes niveles de responsabilidad también pero, seguramente, con el convencimiento de que todos tenemos algo que ver con lo que nos está pasando. Este concepto maniqueísta de buenos y malos no se corresponde.

Hemos empezado a racionalizar el debate; hemos empezado a descubrir un poco quiénes o cómo movían las palancas; hemos empezado a darnos cuenta de que esto que alguna vez se afirmó de que en la Argentina no habían existido casi con seguridad planes económicos, son acciones coordinadas y permanentes de las distintas corporaciones que a través de los *lobbies* iban haciendo las resoluciones. Era una realidad; se daba tanto en los niveles provinciales como en el nacional; en los gobiernos pasados como seguramente todavía se va dando en forma relativa en los actuales gobiernos.

Creo que en este sentido tenemos que acomodar las cargas. Hay mucho por transitar; tenemos mucho camino por recorrer y tenemos que recorrerlo y transitarlo juntos.

No será con dogmatismos ni repitiendo frases o *slogans* como vamos a solucionar los problemas del país.

Se dijo con razón que se terminó una época, la de la Argentina excedentaria, la del facilismo; la época en la que con una buena cosecha se arreglaban los problemas, la de la distribución que a veces se podía hacer sin mayores limitaciones.

Esta es la Argentina del esfuerzo, la de la seriedad, en la que todos los sectores tenemos que actuar de esa forma. Entonces, carecerían de sentido esas discusiones a las que nos quieren llevar algunas pequeñas minorías, tales como privatistas y estatistas, libre empresarios y socialistas. A medida que vamos observando los caminos que van recorriendo los pueblos en este mundo contemporáneo, nos damos cuenta casi en términos irrisorios, de que estos debates son absolutamente inocuos, que no existen en ningún país y que las empresas del Estado son buenas o malas, dependiendo de los comportamientos sociales de cada uno de los países.

Pregúntele a los franceses, a los alemanes o a los italianos si se dan el lujo de tener empresas estatales ineficientes. Eso no les ocurre, porque la sociedad funciona; pero aquí en la Argentina, como todavía no estamos funcionando como queremos, tenemos estos bolsones residuales

de ineficiencia porque, fundamentalmente, tenemos la ineficiencia que no hemos conseguido llegar a superar, que es la que está en la estructura intelectual de muchos sectores del país.

Insisto, creo que no somos justos o no lo hubiéramos sido si dejábamos esta noche el debate sin formular algunas de estas reflexiones.

No sé si nuestro equipo económico será de lujo. Tal vez no; seguramente, no. Pero sí sé que no es tan malo como lo quieren hacer aparecer algunos sectores del país.

Somos solidarios con nuestro gobierno. Somos solidarios con todos los niveles de ejecución de nuestro gobierno. Nuestra solidaridad no pasa por la obsecuencia, pero tampoco pasa por la crítica fácil.

Dijo una vez el presidente: "No es tiempo de hacer leña del árbol caído; algunos errores cometidos y algunos precios pagados nos van a ayudar a repensar, pero no a abdicar de lo que creemos que tiene que ser la lealtad con cien años de historia".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: culmina este largo debate sobre un proyecto de ley tan importante como es el de reforma impositiva y de creación de nuevos impuestos, que ha resultado ser un análisis de la situación económica; de la crisis económica del país.

Al oír la seriedad y profundidad de la mayoría de los argumentos expuestos, pensaba si los señores senadores de la Nación no habíamos cometido el error de no invitar a este recinto al señor ministro de Economía, y también si el ministro de Economía no había cometido, a su vez, un error al no concurrir espontáneamente a este recinto para este debate, como lo consiente la Constitución. Para que no piense el país que el Senado no tiene qué preguntar al señor ministro en esta ocasión o que éste no tiene qué decirle al Senado sobre los múltiples problemas que acá se han analizado con tanta altura y seriedad.

Si bien estas leyes son dictadas por la emergencia y la circunstancia, es indudable que ellas nos plantean en toda su intensidad, en todo su dramatismo, la evolución de nuestra economía en un momento en que es necesario perfilar los lineamientos que van a seguirse para consolidar una confianza que es indispensable para el camino del crecimiento.

Existe una reflexión que me parece esencial. Los problemas de la economía argentina no son de superficie o de coyuntura. Son de raíz, de estructura, y lo positivo de este momento es que está cambiando el análisis, el diálogo, el diag-

nóstico. Hoy se habla desde esta perspectiva para analizar los problemas, que vienen acumulándose de lejos, por décadas, y que es necesario afrontarlos como son, como problemas de estructura, en profundidad.

Por eso espero que en algún momento podamos tratar la reforma fiscal profunda y completa que precisa el país, una reforma impositiva integral, simplificadora, equitativa, en lugar de leyes impositivas para la emergencia. Para ello será necesario convocar a una comisión de expertos del mayor nivel, para que se ponga a trabajar intensamente con el concurso de los representantes de todos los partidos para que pueda hacerse esa reforma que evite aprobar, de pronto, leyes como ésta de hoy, para cubrir un problema emergente de déficit fiscal que nos obliga y condiciona a la sanción de estas normas.

Como muchos señores senadores lo han expuesto, reconocen la necesidad de su aprobación y la apoyan aun con sus dudas. Se han planteado dudas constitucionales sobre la modificación de los quebrantos impositivos. Acerca del ahorro obligatorio son graves las objeciones que se han hecho. Y no me agrada —no nos agrada— después de haber sancionado aquella primera ley anterior de ahorro obligatorio “por única vez”, tener que debatir una nueva norma que lo dispone por segunda vez, sin saber, incluso, qué pasó con el cobro, con la percepción completa en sus sucesivas cuotas de lo correspondiente a aquella primera ley. Lo mismo ocurre con las objeciones referidas al impuesto que gravará el querosén por los efectos que puede acarrear, pese a la necesidad que lo justifica para atender la situación de los jubilados.

Pero éstas son las dudas, éste es el análisis que no puede soslayar un legislador de la Nación. Ahí está la realidad del déficit que nos impone tomar la decisión, el déficit que, cuando debatimos el presupuesto hacia el final de las sesiones ordinarias, estimábamos que no superaría el 4 por ciento; y después se vio, por la acumulación, sobre todo, del déficit cuasifiscal, que superaba bastante ese porcentaje. Es un déficit que no se debe al aumento del gasto, sino que tiene que ver, en especial, con el defecto de recaudación.

Este problema que analizamos es, fundamentalmente, reflejo de la crisis del sistema impositivo argentino. Pero se trata de un déficit ante el que es preciso recordar que el Estado está constituido tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales, los que constituyen el conjunto de la administración pública, entendiendo que dicho déficit, el de las provincias,

también pesa sobre el general del Tesoro nacional que, a su vez, a través de la coparticipación, financiará a los presupuestos provinciales.

Coincidiendo con el senador Berhongaray en su análisis referido a los problemas de las empresas públicas. Creo que, en conjunto, debemos reprocharnos la demora en una reforma más profunda que les haga más eficientes, y disminuya su déficit. Ocurre que es muy importante el ahorro que podría hacerse con la racionalización del sistema de aprovisionamiento, adquisiciones o compras de las empresas del Estado.

Coincidiendo con el análisis, a veces nos enredamos en la polémica sobre lo que debe hacerse o no y, en definitiva, no se hace, cuando hay cambios posibles para tornar eficaz el sistema, modernizarlo, racionalizarlo y reducir efectos deficitarios, que después repercuten sobre el conjunto de la economía.

Pienso que al sancionarse este proyecto de ley todos asumimos un compromiso, una suerte de deber que apunta a la necesaria reforma del Estado, especialmente en lo referido a las empresas públicas, a la mejora del control fiscal, para la eficacia de la recaudación de los impuestos y tendiente a la necesidad de una reforma impositiva, en los términos que he planteado.

Señor presidente: no seríamos sinceros si, conociendo la necesidad, no votáramos por la aprobación del proyecto de ley, refugiándonos en la seguridad de su sanción por el voto de quienes, superando sus propias dudas, asumen la dimensión de la emergencia. Se nos informó que, de no aprobarse, las consecuencias serían peores y muy graves.

Además, no siempre la crítica va acompañada de alternativas. Entonces, ante la falta de alternativas y, frente a la realidad de una necesidad que obliga al deber y al compromiso, vamos a votar por la aprobación del proyecto de ley, superando nuestras dudas y críticas.

En realidad, nadie se siente feliz de votar nuevas leyes impositivas, pero nuestro deber exige el cumplimiento de los actos necesarios frente a una emergencia, teniendo en cuenta las presentes circunstancias.

Por todo ello, aprobaremos el proyecto, ante la urgencia y la necesidad, según nos lo plantea nuestro gobierno, en el marco de una coincidencia con otros sectores, con el diagnóstico que muestra cómo aun en las posiciones discrepantes, en las diferencias políticas, frente a la dimensión de la responsabilidad, es posible coincidir en las decisiones.

De este modo, señor presidente, dejo brevemente explicado el sentido de mi voto.

Sr. Presidente. — Se va a llamar para votar...

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Solicito que a esta altura se inserte el discurso que iba a pronunciar, dado lo avanzado de la hora.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción es el siguiente:

Señor presidente:

No se puede tratar este paquete de medidas económicas sin una previa consideración política.

Esta consideración tiene que ver con las elecciones del 8 de septiembre. Nuestro bloque está profundamente convencido de que el pueblo argentino quiso y esperó un cambio sustancial en el rumbo de la nave de nuestra economía.

Hubiéramos deseado que el Poder Ejecutivo nos invitara a concertar una política económica de crecimiento productivo, independiente de las ataduras externas, que permitiera la reactivación del país y una mejora real en el salario de los trabajadores y no a remendar una política económica que ya ha dado evidentes signos de impotencia y caducidad.

Este llamado "paquete impositivo", que es un conjunto de ajustes, para una situación de indudable emergencia fiscal, no puede disimular: en primer lugar los errores de cálculo en la apreciación global de la situación económica, en la elaboración del presupuesto y en el propio ritmo inflacionario del país. En segundo término, tampoco oculta una orientación económica equivocada que no logra revertir la crisis de estancamiento de la Argentina. No podemos menos que mencionar —porque siempre lo he hecho en cada ocasión en que se ha tratado el presupuesto— que nuestra dependencia a los esquemas del Fondo Monetario Internacional son un factor de enorme complicación en el manejo de la ya de por sí compleja economía argentina. El actual equipo económico ha mostrado una tendencia que no puede ignorarse. Construye presupuestos hipotéticos de muy difícil realización y cumplimiento que le sirvan para pasar los exámenes del Fondo. Luego vienen ajustes, onerosos para vastos sectores del país, que se implementan para cumplimentar nuevos requisitos. Y siempre estamos en un juego donde atendemos coyunturas, sin poder atacar los problemas de fondo que nos aquejan. Uno de los más importantes es el peso agobiante de nuestra deuda externa.

Además, en estos ajustes uno tiene, en realidad, pocas opciones. Si no los aprueba toda la gobernabilidad de las finanzas públicas se pone en juego. Y si se los aprueba parece estar dándose un voto de confianza a una política económica —tristemente conocida por el nombre de "austral"— que ya no tiene credibilidad ni consenso.

Quiero dejar en claro este tema fundamental. Nosotros no somos insensibles a las necesidades de la Nación y a las necesidades de las provincias. Pero, más allá de la aprobación de este ajuste que puede llegar a otorgarse con un criterio absolutamente coyuntural, la consideración global de la política económica y del

sistema para elaborar y, yo diría, hasta negociar, el presupuesto nacional, es profundamente negativa. Percibo que, además, éste es el criterio de la mayoría del país sobre esta cuestión. La gente está cansada de una política sin soluciones y no tiene una buena opinión de este ajuste "para pasar el verano" como lo ha denominado con una ironía que le toca, el ingeniero Alsogaray.

Este paquete impositivo no tiene consenso y ello debería hacer reflexionar hondamente al gobierno. Argentina en 1983 tenía una crisis importante, pero el gobierno democrático surgido en 1983 no ha sabido revertirla. No lo ha cambiado. No ha encontrado el rumbo para cambiar la historia económica del país. Quiero referirme ahora a algunos problemas puntuales:

1. Los errores en la elaboración del presupuesto y en el cálculo del ritmo inflacionario.
2. El control de lo recaudado.
3. El perfeccionamiento de los sistemas de recaudación.

1. Errores en la elaboración del presupuesto y en el ritmo de la inflación

El ajuste que estamos considerando permitiría al gobierno recaudar nueve mil cuatrocientos millones de australes. Esta cifra revela la magnitud de los errores de cálculo en el gasto público. Un déficit que el gobierno había calculado en un porcentaje equivalente al 4,1 % del producto bruto, está al finalizar el año en alrededor del 9 %.

Como se advierte, este enorme desfase está lejos de ser un ajuste que puede considerarse como normal en cualquier país y en cualquier economía.

Otro tanto ocurre con la inflación. Se nos advierte cuando formulamos críticas al carácter recesivo de la economía que se trata de programas antiinflacionarios. Se supone, pues, que el gobierno controla el ritmo inflacionario y sin embargo el proyectado porcentaje de un 42 % para todo el período fiscal ya ha superado con creces esa cifra.

2. El control de lo recaudado

Estamos en presencia de una administración que ha perdido credibilidad y que tendrá que manejar nueve mil cuatrocientos millones de australes, equivalentes a u\$s 2.120.000.000 (dos mil ciento veinte millones de dólares).

El manejo de estos fondos requiere de una muy especial responsabilidad, porque estamos sacando recursos a una población exhaustiva desde el punto de vista económico-financiero.

No quiero dejar pasar la oportunidad de recomendar una gran prudencia política en la adecuada administración de estos recursos que se le confieren al Poder Ejecutivo nacional.

Los "ahorros forzados", las restricciones a la transmisión de cheques y por supuesto los incrementos de tarifas y todo el crecimiento desmesurado de los impuestos indirectos, si no son utilizados con enorme racionalidad, pueden significar más adelante deserción fiscal, desobediencia civil y otras formas no menos graves de deterioro de la comunidad nacional.

3. Perfeccionamiento de los sistemas de recaudación

Junto a todas las consideraciones dramáticas que ha invocado el gobierno para fundamentar su pedido de ajuste presupuestario, nos hubiera gustado que también apareciera alguna autocritica en materia de ente recaudador. No siempre se trata de crear nuevos impuestos, de proyectar nuevas formas de exacción fiscal. A veces también se trata de mejorar la recaudación evitando la evasión a la que muchos teóricos consideran como responsable fundamental del déficit fiscal.

Habría que buscar mecanismos racionales de mayor simplicidad pero de más efectividad.

Habría que buscar también que la base impositiva se amplíe permitiendo que una masa cada vez mayor de ciudadanos pague cifras comparativamente menores de impuestos y que éstos resulten equitativos. Tendríamos que avanzar hacia criterios progresivos y no regresivos en materia impositiva, evitando dentro de lo posible esta política de ajustes coyunturales, discutidos y discutibles.

Sr. Rodríguez Saá. — Además, deseo agregar muy sintéticamente que coincido con las expresiones del señor senador de la Rúa en cuanto a que el problema económico argentino es estructural y no coyuntural.

Pero quisiera ampliar el concepto de economía estructural. Creo que ha llegado la hora de que discutamos qué perfil le vamos a dar a la industria argentina; cuál será nuestra política de energía; qué vamos a hacer con la energía nuclear; cuál será nuestra política sobre el agro y sobre las carnes, y todo lo que hace a la economía y a las estructuras económicas de este país.

Por otro lado, estas leyes que estamos votando hoy solamente tienen un sentido social en la parte que se refiere a los jubilados. En el resto del paquete impositivo, los recursos que va a generar no tienen destino, no se establece a dónde van a ir. Esto nos preocupa. ¿Qué distinto sería si nosotros votáramos un paquete impositivo en el que el sentido de la recaudación fuera precisamente desarrollar la industria, desarrollar una política de carnes, desarrollar una política de energía o cualquier otra política tendiente a solucionar el problema de las estructuras económicas?

Pero nos parece que esto es solamente un nuevo ajuste de un poderoso déficit fiscal, que tiende a adecuarse a las pautas del Fondo Monetario. Y esto es lo que no nos gusta.

Como ya ha sido perfectamente definido por los otros señores senadores y está explicado además en la exposición que pedí que se insertara, sólo quería agregar estas palabras.

Sr. Brasesco. — Que se pase a votación, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º a 3º.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Quiero simplemente manifestar mi observación y disidencia con este artículo, por cuanto afecta derechos adquiridos por los industriales de mi provincia y de otras provincias de la Patagonia.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 5º a 42.

—Se lee el artículo 43.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: quería que se dejara constancia, como interpretación auténtica, de un párrafo que le habíamos acercado a los distintos bloques y que ya había adelantado. Incluso los señores senadores del Pacto Autonomista Liberal estarían de acuerdo.

El párrafo diría lo siguiente: "Referente a los recursos mencionados en el inciso a) del presente artículo deberán ser aplicados exclusivamente al incremento de haberes de las jubilaciones y pensiones del régimen nacional de previsión social a efectos de dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en las leyes 18.037 y 18.038 y sus modificatorias, todo ello sin perjuicio del estricto cumplimiento por parte del Estado de los aportes establecidos en las leyes 22.293 y 23.081. El impuesto establecido en el artículo anterior no tiene carácter sustitutivo de las obligaciones impuestas en las leyes mencionadas en el párrafo precedente".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: como había anunciado, propongo que en el artículo 43, en el punto 1º, a continuación de los dos artículos sin número que siguen al 51 de la Ley de Impuestos Internos, se agregue otro artículo con el texto que he leído previamente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 43 en su redacción originaria.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Martiarena. — Falta votar el agregado que propongo.

Sr. Presidente.— El artículo 43 está aprobado en su redacción originaria.

Sr. Martiarena.— Pero lo que yo propongo es un artículo nuevo. No me he hecho entender.

Sr. Presidente.— No lo he interpretado, señor senador. Había entendido que modificaba el artículo 43, incisos 1º y 2º.

Sr. Martiarena.— No. Propuse agregar un artículo, después del segundo artículo sin número, a continuación del artículo 51 de la Ley de Impuestos Internos.

Sr. Presidente.— Precisamente, señor senador, es una modificación al artículo 43, y ya está aprobado en su redacción originaria.

Sr. Martiarena.— No, señor presidente. En el artículo 43 se habla de la Ley de Impuestos Internos, y en el punto 1º dice que se incorporan, a continuación del artículo 51 de la citada ley, dos nuevos artículos que no tienen número. Yo propongo un nuevo artículo sin número a continuación de aquéllos.

Sr. Trilla.— Pido la palabra.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla.— Señor presidente: ya se ha votado el artículo 43, ya no se puede agregar nada. El propio artículo 43 hace un agregado a la Ley de Impuestos Internos.

Sr. Murguía.— Pido la palabra para hacer una aclaración respecto del artículo 43.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía.— Señor presidente: entre los combustibles indicados en uno de los artículos sin número que se incorporan a continuación del artículo 51 de la Ley de Impuestos Internos no se menciona específicamente a los aeroque-rosenos o JP 1, tal como se los conoce comercialmente. Por lo tanto, no será gravado por esta nueva tasa que se establece a través de este artículo que se incorpora.

Además, debemos señalar, en el caso de que existiera alguna duda con los combustibles de uso aeronáutico, que ya se encuentran gravados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Impuestos Internos.

Por lo tanto, el artículo que estamos agregando a la ley, mal podría estar superponiendo una nueva tasa a estos combustibles.

Sr. Presidente.— Vale como interpretación.

Sr. Murguía.— Exactamente, señor presidente.

—Se leen y aprueban los artículos 44 a 47.

—El artículo 48 es de forma.

Sr. Presidente.— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Corresponde votar si se incorporan al Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores senadores.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente.— Se procederá en consecuencia.¹

8

SUBSIDIO AL RACING CLUB, DE TRELEW

Sr. Solari Yrigoyen.— Pido la palabra.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen.— Señor presidente: por su intermedio me excuso ante toda la Cámara por robarle dos minutos más. Pero se encuentra sobre la mesa un dictamen de la Comisión de Deportes en un proyecto de comunicación del que soy autor en que se solicita un subsidio de cincuenta mil australes para el Racing Club, de Trelew, para terminar un gimnasio cuyo costo ha sido superior al millón de australes.

Hay urgencia para tratar este tema porque, como se sabe, se está concluyendo la preparación del presupuesto del año 1988.

Por estos motivos me permito solicitar el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente.— En consideración la moción formulada por el señor senador por Chubut.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos.— Me gustaría que se expresara el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque en otras oportunidades no nos ha permitido tratamiento sobre tablas como éste.

Sr. Brasesco.— Se trata de un proyecto de comunicación.

Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente.— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris).— (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Deportes ha considerado el proyecto del señor senador doctor Hipólito Solari Yrigoyen, por el que solicita que por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación se otorgue un subsidio por la cantidad de cincuenta mil

¹ Ver el Apéndice.